



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
“PEDRO RUIZ GALLO”  
ESCUELA DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN DERECHO**



---

**“El Derecho a la Igualdad en la Responsabilidad  
Restringida por la Edad. Antinomias Jurisprudenciales  
entre la Sala Constitucional y Penal de la Corte  
Suprema”**

**TESIS**

**Presentada para optar el Grado Académico de Doctora  
en Derecho y Ciencia Política**

**AUTORA:**

**Mg. Padilla Rojas, Ana Isabel**

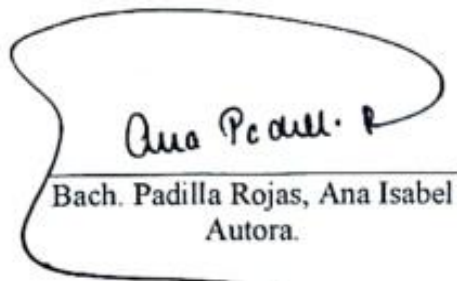
**ASESORA:**

**Dra. Leyla Ivon Vílchez Guivar de Rojas**

**LAMBAYEQUE, PERÚ**

**2023**

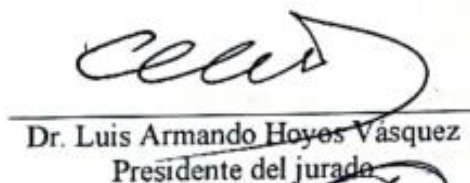
**“El Derecho a la Igualdad en la Responsabilidad Restringida por la Edad. Antinomias Jurisprudenciales entre la Sala Constitucional y Penal de la Corte Suprema.”**

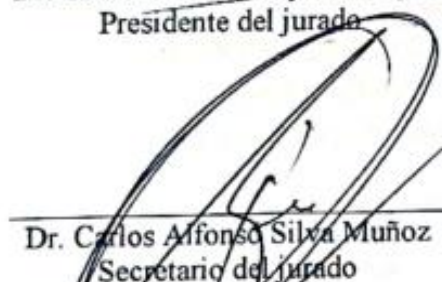
  
Bach. Padilla Rojas, Ana Isabel  
Autora.

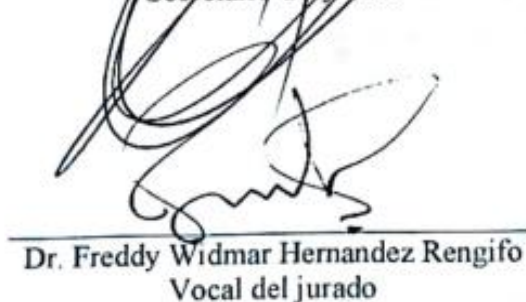
  
Dra. Loyla Ivon Vilchez Quivar de Rojas  
Asesora.

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo  
para optar el Grado de: **Doctora en Derecho y Ciencia Política.**


**Aprobado por:**

  
Dr. Luis Armando Hoyos Vásquez  
Presidente del jurado

  
Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz  
Secretario del jurado

  
Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo  
Vocal del jurado

## Acta De Sustentación

	<b>ESCUELA DE POSGRADO</b> <i>M.Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u><b>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</b></u>	Pág. 1 de 3	

### ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo las 5:00 p.m. del jueves 02 de diciembre de 2022, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°621 - 2022 de fecha 13 de junio de 2022, conformado por:

Dr. LUIS ARMANDO HOYOS VASQUEZ	Presidente
Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ	Secretario
Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO	Vocal
Dra. LEYLA IVON VILCHEZ GUIVAR DE ROJAS	Asesora

Para evaluar el informe de tesis de la tesista ANA ISABEL PADILLA ROJAS, candidato a optar el grado de DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA, con la tesis titulada "EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LA RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA POR LA EDAD, ANTINOMIAS JURISPRUDENCIALES ENTRE LA SALA CONSTITUCIONAL Y PENAL DE LA CORTE SUPREMA".

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°1232-2022-EPG de fecha 25 de noviembre de 2022, que autoriza la Sustentación Virtual del Informe de tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó a la candidata a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole 30 minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

Culminada la exposición de la candidata, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas al candidato.

Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de tesis realizada por la candidata, evaluando en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con 17 puntos, equivalente a

<b>Formato :</b> Físico/Digital	<b>Ubicación :</b> UI- EPG - UNPRG	<b>Actualización:</b>
---------------------------------	------------------------------------	-----------------------

 <b>UNPRG</b> <small>UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO</small>	<b>ESCUELA DE POSGRADO</b> <i>M. Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL</u> <u>DE TESIS</u>	Pág. 2 de 3	


bueno, quedando el candidato apto para optar el Grado de DOCTORA EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA.

Se retornó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual.

Siendo las 6:22 p.m. se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.

  
**Dr. LUIS ARMANDO HOYOS VASQUEZ**  
 PRESIDENTE

  
**Dr. CARLOS ALFONSO SILVA MUÑOZ**  
 SECRETARIO

  
**Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO**  
 VOCAL

**Dra. LEYLA IVON VILCHEZ GUIVAR DE ROJAS**  
 ASESORA

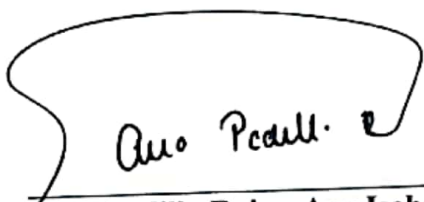


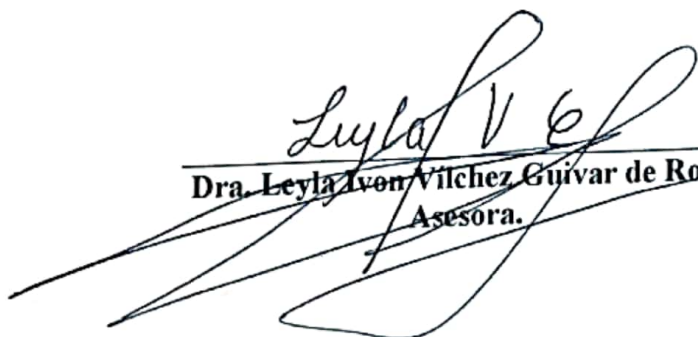
Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

### **Declaración Jurada de Originalidad**

Yo, **Padilla Rojas, Ana Isabel**, investigadora principal, y **Leyla Ivon Vilchez Guivar de Rojas**, asesora del trabajo de investigación **“El Derecho a la Igualdad en la Responsabilidad Restringida por la Edad. Antinomias Jurisprudenciales entre la Sala Constitucional y Penal de la Corte Suprema.”**, declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demuestre lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiere lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.

Lambayeque, de 2023.

  
**Bach. Padilla Rojas, Ana Isabel**  
**Autora.**

  
**Dra. Leyla Ivon Vilchez Guivar de Rojas**  
**Asesora.**

## **Dedicatoria**

*A Dios, porque Él es la guía en mi camino, a mi amada madre Ana, quien es el pilar fundamental de mi vida y a mi adorado hijo Rodrigo, mi principal motor y motivo para superarme día a día.*

## **Agradecimiento**

*A mi segunda y amada madre Chabuca, porque  
mientras estuvo con vida, me acompañó e hizo suya cada  
una de mis metas alcanzadas.*



## Índice General

Acta De Sustentación .....	iii
Declaración Jurada de Originalidad.....	v
Dedicatoria .....	vi
Agradecimiento .....	vii
Índice General .....	viii
Índice de tablas .....	xi
Índice de Graficas .....	xii
Índice De Anexos .....	xiii
Resumen.....	xiv
Abstract .....	xv
1. Capítulo I. Introducción.....	16
1.1. Realidad Problemática.....	16
1.2. Problema de investigación.....	18
1.3. Necesidad de investigar.....	18
1.4. Justificación de la investigación .....	19
1.5. Objetivos.....	20
1.5.1. Objetivo General .....	20
1.5.2. Objetivos Específicos .....	20
2. Capítulo II. Diseño Teórico .....	22
2.1. Estado del Arte y bases epistemológicas.....	22
2.1.1. Respecto a la Teoría de la pena .....	22
2.1.1.1 Teorías absolutas .....	22
2.1.1.2 Teorías relativas .....	23
2.1.1.3 Teorías unitarias .....	25
2.2. Antecedentes de la Investigación.....	27
2.3. Bases teóricas.....	32
2.3.1. Responsabilidad restringida por la Edad .....	32
2.3.2. Responsabilidad penal (Art. 20 del CP) .....	36
2.3.3. Responsabilidad restringida .....	50
2.3.4. Derecho a la igualdad ante la ley.....	52



2.3.5. Igualdad como principio y como derecho.....	54
2.3.6. Ámbitos de Aplicación .....	56
2.3.7. Igualdad en la ley .....	56
2.3.8. La igualdad ante la ley .....	57
2.3.9. Igualdad en la elaboración y aplicación de la ley.....	58
2.3.10. La igualdad y la diferenciación .....	61
2.3.11. Igualdad y la discriminación .....	62
2.3.12. Test de Igualdad .....	64
2.3.13. Discriminación a la inversa.....	66
2.3.14. Antinomias jurisprudenciales.....	67
2.3.15. Criterios de solución de las antinomias jurisprudenciales .....	70
2.3.16. Criterios de solución de las antinomias normativas .....	73
2.4. Bases conceptuales.....	74
3. Capítulo III. Diseño Metodológico .....	77
3.1. Diseño de contrastación de hipótesis .....	77
3.2. Población y Muestra.....	78
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ....	78
4. Capítulo IV. Resultados.....	80
4.1. Respecto al objetivo específico 1.....	80
4.2. Respecto al objetivo específico 2.....	91
5. Capítulo V. Discusión De Resultados .....	122
5.1. Presentación del modelo teórico. ....	122
6. Capítulo VI. Propuesta De Intervención.....	127
6.1. Antecedentes.....	127
6.2. Fundamentación.....	128
6.3. Efectos de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional. ....	129
6.4. Análisis Costo – Beneficio .....	129
6.5. Modificatoria .....	129
Conclusiones.....	131
Recomendaciones .....	133
Referencias .....	134

Anexos .....	140
Constancia de Aprobación de Originalidad .....	144
Resumen de ReporteTurnItIn .....	145
Recibo Digital TurnItIn.....	148

## Índice de tablas

<b>Tabla 1.</b> Categorización de Variables .....	76
<b>Tabla 2.</b> De las entrevistas de Fiscales Penales .....	82
<b>Tabla 3.</b> De las entrevistas a Jueces Penales .....	82
<b>Tabla 4.</b> .....	101
<b>Tabla 5.</b> .....	103
<b>Tabla 6.</b> .....	104
<b>Tabla 7.</b> .....	104
<b>Tabla 8.</b> .....	105
<b>Tabla 9.</b> .....	105
<b>Tabla 10.</b> .....	106
<b>Tabla 11.</b> .....	107
<b>Tabla 12.</b> .....	108
<b>Tabla 13.</b> .....	108
<b>Tabla 14.</b> .....	109
<b>Tabla 15.</b> .....	109
<b>Tabla 16.</b> .....	111
<b>Tabla 17.</b> .....	111
<b>Tabla 18.</b> .....	113
<b>Tabla 19.</b> .....	114
<b>Tabla 20.</b> .....	117
<b>Tabla 21.</b> .....	118
<b>Tabla 22.</b> .....	122
<b>Tabla 23.</b> .....	123
<b>Tabla 24.</b> .....	123
<b>Tabla 25.</b> .....	124

## Índice de Graficas

<b>Gráfico 1.</b> Referencia al Artículo 22° del Código Penal .....	110
<b>Gráfico 2.</b> .....	112
<b>Gráfico 3.</b> .....	125

## Índice De Anexos

Anexo I:Matriz de Consistencia .....	140
Anexo II:Instrumentos de Recolección de Datos .....	141
Anexo III:Rúbrica de Experto de Instrumentos de Recolección de Datos .....	143

## Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo establecer cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal, investigación de tipo básica, utilizando el enfoque cualitativo, siendo las técnicas utilizadas el fichaje, análisis documental y entrevista realizada a diez Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lambayeque y diez Jueces Especializados del Distrito Judicial de Lambayeque.

De los resultados se advierte que la responsabilidad restringida establecida en el art. 22 del Código Penal, permite la disminución prudencial de la pena del imputado, atendiendo al rango etario en el que se comprende, su interpretación presenta colisiones, evidenciándose antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal.

Lamentablemente, esto conlleva a la vulneración del principio a la igualdad ante la Ley. Se concluye que sí prevalece el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad sin exceptuar a agentes de algunos delitos, entonces se soluciona la antinomia jurídica entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, debiendo modificarse el art. 22 del Código Penal.

**Palabras Clave:** Antinomias – igualdad ante la ley – responsabilidad restringida

### **Abstract**

The objective of this investigation was to establish how to solve the jurisprudential antinomies between the Constitutional and Criminal Chambers of the Supreme Court, regarding the application of the second paragraph of art. 22 of the Penal Code, basic type investigation, using the qualitative approach, the techniques used being the Recording, Documentary Analysis and Interview carried out with 10 Provincial Prosecutors of the Lambayeque Fiscal District and 10 specialized Judges of the Lambayeque Judicial District. From the results it is noted that the restricted liability established in art. 22 of the Criminal Code, allows the reasonable reduction of the sentence of the accused, taking into account the age range in which it is understood; its interpretation presents collisions, evidencing jurisprudential antinomies between the Constitutional and Criminal Chambers of the Supreme Court, regarding the application of the second paragraph of art. 22 of the Penal Code. Of course, this leads to the violation of the principle of equality before the Law. It is concluded that the constitutional principle of equality before the law prevails in the application of age-restricted responsibility without exempting agents from some crimes, then it is solved the legal antinomy between the jurisprudence of the Constitutional and Criminal Chambers of the Supreme Court, having to modify art. 22 of the Penal Code.

**Keywords:** Antinomies – Equality before the law – Restricted liability



## **1. Capítulo I. Introducción**

### **1.1. Realidad Problemática.**

La existencia de la responsabilidad restringida por la edad, siempre ha causado polémica, por ello, es que ya han existido cuatro modificaciones al Código Penal vigente, no obstante, en cada una de ellas, se viene consignando normas que no respetan los derechos fundamentales, como lo es igualdad ante la ley. Conocida es la frase, igual razón, igual derecho, pero lamentablemente en la norma vigente, atendiendo a la inmadurez propia de la juventud, que oscila entre los 18 a 21 años, es que se han establecido beneficios para jóvenes infractores a ley penal.

Estos beneficios se sustentan en la edad del agente, pero curiosamente se aplican o inaplican atendiendo a la clasificación de delitos que el emisor de la norma ha establecido en el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal – en adelante CP.

Ante ello, el juzgador, quien tiene el control difuso de la constitucionalidad, en algunos casos, ha inaplicado este segundo párrafo a fin de atender a un derecho constitucional, el derecho a la igualdad; en otros casos, conforme a norma, no ha otorgado el beneficio a quienes por ley no les correspondiere; lo cual ha generado antinomias en la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema – en adelante CS.

El art. 22 del Código Penal vigente, señala que:

“Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma

reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo.

Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, sicariato, conspiración para el delito de sicariato y ofrecimiento para el delito de sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, apología, genocidio, desaparición forzada, tortura, atentado contra la seguridad nacional, traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua.”.

Estando a ello es que, a la fecha no es posible que el juzgador aplique este criterio para reducción prudencial en delitos establecidos en el segundo párrafo del art. sub examine; sin embargo, hemos de advertir la existencia de dispersa normatividad y opiniones jurisprudenciales que avalarían la diligencia de reducción proporcional de la pena atendiendo a la responsabilidad restringida por la edad; como lo son: el X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias - Acuerdo Plenario N.º 4-2016/CIJ-116 de 17 de octubre de 2017, el I Pleno jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial – Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2018/CIJ-433; Recurso de Casación 250-2018/UCAYALI de 22 de noviembre de 2018; 214-2018/EL SANTA; 1672-2017/PUNO y la Sentencia de Casación N.º 133-2017 Lambayeque de 19 de junio de 2019; 291-2019 Ayacucho; 588-2019/Cusco de 24 de mayo de 2021; y las Sentencias en Consulta N.º 1260-2011, de 7 de junio de 2011, y 210-2012, de 27 de abril de 2012 de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, Consultas; las cuales han generado antinomias jurisprudenciales.

En ese contexto, nos encontramos frente a una norma de carácter general, que se aplica de manera diferente, atendiendo al análisis de constitucionalidad que efectúa cada juzgador, priorizando en algunos casos el derecho a la igualdad en la responsabilidad restringida por la edad, y en otros no, generando antinomias jurisprudenciales entre la Sala Constitucional y Penal de la CS.

Estando a lo expuesto, nos formulamos la siguiente problemática:

### **1.2. Problema de investigación**

¿Cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal?

### **1.3. Necesidad de investigar**

Las normas están dadas para todo el ordenamiento jurídico, y son taxativas en el proceso penal, limitándose el uso de analogías, para no atentar con el derecho de las partes; ni con la percepción que tiene el ciudadano respecto al poder punitivo del Estado; lamentablemente, las normas pueden estar tipificadas, pero no siempre el operador de justicia atiende a una adecuada interpretación, conforme al sentido de la norma y a la sistematicidad con la que se debe interpretar el ordenamiento jurídico, ante ello, desarrolla jurisprudencia contradictoria entre sí, lo cual limita la predictibilidad de la misma, y coloca a las partes en desventaja. La presente tesis está encauzada a establecer cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la CS, en relación al segundo párrafo del art. 22 del Código Penal; ello atendiendo a la existencia de contradicción en la jurisprudencia, revelándose su importancia en el contexto social, en el marco de la línea de investigación del Derecho Penal.

#### **1.4. Justificación de la investigación**

Esta investigación se justifica teóricamente en el aporte a la solución de las antinomias existentes entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la CS, respecto al segundo párrafo del art. 22 del CP. Así también en el análisis de constitucionalidad que se realizará a la luz del principio de igualdad ante la ley.

La presente investigación se justifica prácticamente en la necesidad de garantizar a todas las personas que están en un proceso penal, que en el mismo le asistan todas las garantías sustantivas y procesales correspondientes, siendo que la igualdad ante la ley es uno de ellos; por ende, aplicable al momento de efectuar un requerimiento acusatorio y una sentencia condenatoria, en primera, segunda instancia o en Casación.

La exclusión de la aplicación de la reducción proporcional de la pena que le asiste a los agentes que cometen delitos entre los 18 a 21 años o mayores de 65, les asiste en función a sus capacidades de desarrollo cognitivo y psicológico, no evaluándose para su determinación la comisión de uno u otro delito; en razón de lo cual no sería idónea su aplicación limitada por los mismos, puesto que puede transgredir otros derechos, en función de lo cual se realiza este proyecto.

La justificación metodológica la encontramos en la realización de la presente investigación mediante la ruta cualitativa, realizando revisión documental y entrevistas a 10 Fiscales provinciales de Distrito Fiscal de Lambayeque y 10 jueces especializados penal del citado Distrito Judicial, quienes basan sus requerimientos fiscales y acusaciones en atención

a las normas vigentes: los cuales podrían resultar incongruentes si una norma - ley, como es el CP, contraviene la Constitución.

La principal limitación es la existencia de criterios dispersos por parte de los fiscales, algunos actúan conforme a la Constitución, otros se ciñen en la legalidad del Código Penal; existe escasez de antecedentes para la investigación.

## **1.5. Objetivos.**

### ***1.5.1. Objetivo General***

Establecer cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal

### ***1.5.2. Objetivos Específicos***

1. Estudiar la responsabilidad restringida establecida en el art. 22 del Código Penal.
2. Analizar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal.
3. Examinar el derecho a la igualdad ante la ley establecido en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales.

En pro de la organización de este estudio, se desarrolla el diseño teórico que abarca el estado del arte, antecedentes, bases teóricas y conceptuales; luego el diseño metodológico que abarca el diseño de contrastación de hipótesis, población y muestra, técnicas e instrumentos. Se presentan los resultados en función a los objetivos y se discuten los

resultados. Finalmente se realiza una propuesta normativa respecto a la modificatoria del art. 22 del CP.

El propósito del estudio es restringir la generación de antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la CS.

## 2. Capítulo II. Diseño Teórico

### 2.1. Estado del Arte y bases epistemológicas

#### 2.1.1. *Respecto a la Teoría de la pena*

De forma estática, el castigo es el resultado inicial del delito y la compensación del comportamiento delictivo y el delito es la condición previa necesaria para el castigo. Del enfoque dinámico, el castigo tiene el mismo propósito que la delincuencia. Un acto prohibido o prescrito por la ley debe evitarse tomando precauciones especiales si afecta a la sociedad y si afecta al delincuente para impedir que cometa el delito. Explicar los propósitos del castigo se ha convertido en una discusión compleja para los dogmáticos antiguos, quienes distinguen entre teorías absolutas y relativas para explicar estos propósitos.

##### 2.1.1.1 Teorías absolutas

Su nombre deriva de criterios principales en los que existen valores incondicionales, como justicia, que pueden derivar de la degeneración en justicia. Las teorías comienzan con Hegel, quien creía que el castigo es la retribución natural del malhechor porque dialécticamente funciona como la negación de la negación de los derechos y luego el castigo es la restauración del orden legal. Los afines de esta escuela, el castigo parece perfectamente racional, mientras que el crimen es una paradoja irracional. Aparte de Hegel, Immanuel Kant se destaca en el grupo de los teóricos del castigo absoluto, para quienes el castigo es una exigencia racional o absoluta de pagar por el crimen del autor, negando sus fines preventivos o de otro tipo. Por supuesto, estas teorías tienen su elemento talional, por lo que estamos hablando de la teoría de la expiación. En cuanto a Binding, dijo que el castigo es la retribución por el mal. El castigo de Messeg es proporcional a la gravedad de la violación de



la ley y el orden. En la misma dirección, Welzel sugiere que cada uno porta el valor de sus propios hechos.

### **2.1.1.2 Teorías relativas**

La teoría de la relatividad se basa en la imposición de castigos por la consecución de determinados objetivos. El castigo tiene un propósito que es beneficioso para el delincuente y para la comunidad. El propósito de la pena es la prevención personal o especial, cuyo objeto es convencer al verdadero culpable de que no siga el curso del delito. Esta sería la prevención general, cuando la generalización de la pena intimida a la población, se les prohíbe iniciar procesos penales, por lo que no se materializa su potencial delictivo.

El propósito del castigo, según la teoría de la disuasión específica, es evitar que una persona en particular cometa un delito en el futuro. La teoría de la prevención especial tiene su origen en Platón y Protágoras, así que recordar que Protágoras Platón decía “Nemo Prudens Punit Guia Peccatum Est, Sed Ned Peccetur” (ningún sabio castiga porque es pecado, pero entonces no pecaría). No obstante, a partir de finales del siglo XIX cobró especial jerarquía Montero, la pena de oro de España, percibía "el derecho del criminal a la protección".

El positivismo criminológico italiano ha desarrollado en gran medida el concepto de prevención especial en un intento de reemplazar las medidas de seguridad con el castigo. Es en la obra de Franz von List donde la idea especial de prevención alcanza su clímax. En su Plan Marlboro de 1882, argumentó que el castigo solo podía justificarse por su propósito disuasorio. El Plan Marlboro aboga por la prevención específica para tres tipos de infractores: irregulares, corregibles e incorregibles. El castigo del delincuente debe

disuadirlo de cometer delitos en el futuro y el castigo debe efectuar la corrección (resocialización) para que el delincuente sea corregido. Frente a los reincidentes intratables, el castigo persigue al inofensivo, es decir, al infractor.

La teoría de Liszt se impuso en Italia por el trabajo de la disciplina, la resocialización de las redes sociales y la idea del tratamiento con posibilidad de ejecución de sentencias se consideró como tarea especial de prevención de los años 60. Además de estas perspectivas, existen nuevos conceptos de responsabilidad social. Por el momento, en la posición denominada afrontamiento, Bacigalupo se mueve de la prevención especial, adjetivo con el que promueve una prevención especial democrática, el castigo tendrá una función integradora con el entorno social del autor, ya que es una herramienta sociopolítica; finalidad de la pena debe motivar a los ciudadanos a actuar conforme a la ley. Atribuimos este concepto a Ancelmo von Feuerbach, quien considera que el castigo es una prescripción criminal que disuade psicológicamente a quienes tienen inclinaciones ilícitas.

El objetivo de la prevención general es castigar el acoso y prevenir la delincuencia. El castigo debe ser claro, cerrado, proporcionado, notorio y público, dijo Beccaria. Jeremiah Bentham también sugirió que la prevención general es el propósito principal y la razón fundamental del castigo y que la impunidad fomenta el crimen. Ahora bien, hablando de la presencia de prevención ordinaria negativa y prevención general positiva, consideremos: Prevención general negativa: Se dice que cuando el objeto de la pena es terrible, nos encontramos ante la prevención general negativa.

No obstante, clarificamos que los adjetivos utilizados deben interpretarse cultural y evaluativamente, no funcionalmente. El significado cultural de la palabra "negativo" sugiere

que la amenaza es una inadecuada manera de originar a los ciudadanos. Prevención Total Positiva: También conocida como estabilización e integración, que tiene por objeto afirmar el derecho como titular de una seguridad jurídica básica y valiosa. Las relaciones humanas en sociedad deben permitir que los participantes se sientan seguros y conscientes de sus resultados exactos, así como el conocimiento de las diversas reglas de la historia personal de una persona puede conducir al éxito o al fracaso, pero para adquirir y respetar este conocimiento de la misma manera, la tendencia a ajustarse a las normas carece de este tipo de garantías naturales: de ahí la necesidad de sanciones. Jacobs agregó que la misión del castigo es mantener normas, que son patrones orientados de interacción social. El contenido de la pena es la copia y el precio de su ejecución es el infractor.

Dado que el objeto de la norma es un infractor hipotético, todos los ciudadanos con los que interactúan deben esperar que su comportamiento respectivo sea el esperado en relación con la norma rectora. ¿Qué incluye el delito? En esta línea de pensamiento, nos dice Jacobs, “El castigo se usa para ser fieles a la ley, porque en este caso se trata de las consecuencias en la aceptación”. Aunado a lo señalado, la pena debe ser aterradora, si no es su función principal, porque impacta en las víctimas y en terceros, “no por el reconocimiento de la norma, sino por el miedo. Estos efectos pueden ser deseables de otro modo”. Para Armin Kaufman, prevención general activa: 1. Informar a los ciudadanos sobre las condiciones prohibidas 2. Fortalecimiento y promoción del orden jurídico 3. Se alienta a los residentes a obedecer la ley.

### **2.1.1.3 Teorías unitarias**

También se le llama teoría asociativa porque intenta combinar o unificar la tesis absoluta con la tesis relativista que acabamos de discutir. El aporte es una síntesis de que la

sanción debe ser justa y útil, encaminada al castigo ya la vez represiva y preventiva. La naturaleza química de esta mezcla seleccionada puede tener más implicaciones para la justicia que para la prevención, ya que dependiendo de las fortalezas de cada factor seleccionado, terminaríamos con un concepto de castigo opresor (se destaca el objetivo de la justicia o altamente disuasorio se prioriza la finalidad utilitaria del castigo).

Desde este punto de vista, se han abordado los problemas derivados de la necesidad de equilibrar la necesidad de la pena (el criterio utilitarista) y la justicia (el criterio absoluto). Roxin ofrece un modelo para resolver este problema al tratar el castigo de acuerdo con los diferentes momentos en los que existe: castigo amenazado (aquello que amenaza, disuade del crimen o persuade a las personas a obedecer la ley). Aplicación (en el momento del consentimiento), culpabilidad en el caso concreto. En ejecución (tiende a la resocialización de los delincuentes).

La posición de Luo Xin es dialéctica, combinando la prevención general con la prevención específica. Esto es lo que nos dice Roxin: “En primer lugar, el final de la oración es solo una precaución general. Por otro lado, las necesidades preventivas especiales y generales deben ser tenidas en cuenta por igual en las sanciones. En un artículo reciente, Jacobs argumentó enérgicamente en contra de la teoría común, diciendo que la teoría común se basa en la suposición de que la legitimidad y las terminaciones de las oraciones se pueden combinar, lo cual es incorrecto porque no es posible devolver la culpa y la prevención al mismo tiempo.

## **2.2. Antecedentes de la Investigación.**

A nivel internacional, Córdoba (2014) Colombia en su documento titulado “Juicio Justo. Responsabilidad reducida”, cuyo objetivo era sensibilizar a los administradores judiciales sobre el hecho de que las personas son tratadas de manera diferente; con un enfoque cualitativo, concluyó que los administradores judiciales, además de la disponibilidad de instituciones judiciales, protección, etc. Es importante las condiciones en las que se puede reducir la pena si se reduce la conciencia y la autodeterminación sin perder la responsabilidad.

La citada investigación, valora la existencia de la responsabilidad atenuada por edad, considerando su ineludible aplicación. Esta sirve como antecedente, para adentrarnos a la igualdad de los agentes que han cometido ilícitos penales

De igual forma, Suárez y González (2012) Cuba, en su tesis “La determinación de la pena de acuerdo a la capacidad de culpabilidad que posee el adolescente”, cuyo objetivo fue estudiar desde un enfoque cualitativo la reducción de la culpabilidad por madurez psicológica en el grupo de edad de 16 a 20 años, concluyendo que aún no existe completitud entre ellos maduro (mentalmente) y su comprensión no es suficiente autodeterminación, por lo que el uso restrictivo debe reducirse a este grupo de edad.

La citada investigación examina la figura de la responsabilidad restringida, específicamente en las edades que se deben considerar, atendiendo a la no madurez plena que es sustento para su aplicación; nuestra investigación contribuye en su estudio a determinar que la responsabilidad restringida es aplicable, justamente por su fundamento: la inmadurez, que es acorde a la edad.

A nivel nacional, Oyarce (2019), en su investigación “La exclusión de la responsabilidad restringida vulnera el principio de igualdad en los delitos graves”, cuyo propósito fue examinar la responsabilidad restringida en la jurisprudencia utilizando la metodología cualitativa de revisión documental, concluyó que no existe expresión comparativa válida para demostrar que la restricción contenida en el transporte viola el principio de igualdad, porque los hechos no son similares para establecer que la materia sea tratada de manera diferente.

Esta investigación encuentra justificada la exclusión de algunos agentes que cometieron delitos graves, de la beneficencia de la responsabilidad restringida.

De igual forma, Castro (2018), en su tesis “La exclusión de la responsabilidad restringida vulnera el principio de igualdad en los delitos comunes”, cuyo fin fue argumentar que la eliminación de la responsabilidad limitada en delitos graves, como robo agravado, quebranta el principio de igualdad, utilizando el método cualitativo de análisis bibliográfico, concluyendo: “la igualdad ante la ley garantiza que todos son iguales ante la ley, por la razón por la que la norma debe ser de la misma manera aplicada a todos, sin excepciones, sin consideraciones personales, castigo severo en violación de robo agravado de un menor de 21 años, independientemente de la edad limitada de responsabilidad y mayor de 18.

La citada investigación reveló la contravención al principio a la igualdad ante la ley, por la diferenciación de aplicación del beneficio de responsabilidad restringida que no atiende a la causa por la cual ha sido otorgado.

De igual manera, Diaz (2018) Lima, en su tesis “La inaplicación de la responsabilidad restringida y su relación con la vulneración de los fines preventivos especiales de la pena, en el distrito judicial de lima, año 2017”, cuyo fin fue determinar el alcance de la relación entre la no aplicación de la responsabilidad limitada y la vulneración de la finalidad disuasoria específica de la sentencia, un estudio básico no experimental concluyó: Los operadores jurídicos han demostrado empíricamente que la no aplicación de la responsabilidad limitada la responsabilidad tiene un impacto significativo en las personas ascendientes de 18 años y menores de 21, sanciones por violaciones de objetivos especiales preventivos en materia de pena (p. 140).

En ese mismo sentido, esta tesis revelará que la responsabilidad restringida en algunos delitos, constituye una infracción al derecho a la igualdad ante la ley, pues no se fundamenta en causas objetivas.

En el mismo sentido, Zambrano (2018) Lima, en su tesis “La responsabilidad penal restringida por la edad y el principio de igualdad procesal”, cuyo objetivo fue establecer cómo la responsabilidad penal de limitación de edad afecta la igualdad procesal en el Juzgado Penal Metropolitano de Lima - 2015, utilizando un enfoque cuantitativo, descriptivo, explicativo y constructivo, concluyó: La variable de limitación de responsabilidad jurídica penal incide directa y positivamente en el principio según el juicio de Spearman coeficiente de correlación 0,577, la variable de correlación de igualdad procedimental indica que el resultado es moderado, con significación estadística en  $p = 0,000$  y menor de 0,05. P (p. 73).



Es decir, el autor sustenta que la responsabilidad restringida se circunscribe a todos los casos que corresponda por la edad del agente, a fin de que se cumpla el principio de igualdad procesal.

De igual manera, Taco (2017) Cusco, en su tesis “Aplicación de la responsabilidad restringida en los delitos de violación sexual en víctimas de 12 y 17 años de edad”, cuyo fin fue reconocer la idoneidad de la responsabilidad limitada por abuso sexual por parte de víctimas de 12 a 17 años utilizando un enfoque cualitativo, descriptivo y proactivo y concluir que la responsabilidad limitada debe aplicarse al abuso sexual por parte de víctimas de 12 a 17 años, teniendo en cuenta los principios de igualdad, proporcionalidad, tradición y demás consensos establecidos por la Corte Suprema con la ayuda del control descentralizado.

La presente investigación, propugna que el citado beneficio se aplique a todas las personas que incurrir en delitos por comportamientos acorde a su inmadurez o avanzada edad.

A nivel local, citamos a Malca (2019), en su investigación “La constitucionalidad de la limitación de responsabilidad restringida en el Código Penal y la igualdad ante la ley”, cuyo objetivo fue con base en el principio de igualdad ante la ley, comprender la constitucionalidad de la limitación de la responsabilidad penal y las reservas a la ley se utilizan el método de la interpretación jurídica, el método del ordenamiento jurídico, el método de la deducción hipotética y el método de la inducción se logra la dignidad humana. Un grupo de personas que discrimina a un agente en función de la edad y mucho menos en función de la gravedad del delito en lugar de la capacidad del agente, es la razón de una

defensa o recurso viciado y su constitucionalidad el contexto de la interpretación constitucional.

Así también, citamos a Apagüño (2018), en su tesis “La regulación de la responsabilidad restringida por la edad en el Perú y su compatibilidad con el principio de igualdad”, cuyo fin fue comprender la coincidencia constitucional de normas peruanas sobre el límite de edad de responsabilidad con el principio de igualdad de derechos, el uso de un enfoque híbrido para determinar que el límite de responsabilidad en el Perú no cumple con el principio de igualdad de derechos, no se admite la prueba de proporcionalidad porque los artículos analizados se aplican de manera desigual, la justificación constitucional es inválida.

Es así que la citada investigación analiza la regulación de la responsabilidad restringida, la cual también será materia de análisis, pero a la luz de su aplicación a través de la Casación N.º 291-2019 Ayacucho.

Por último, citamos a Arana (2016), en su tesis titulada “La Responsabilidad Penal para adolescentes mayores de 16 años”, cuyo objetivo fue determinar que los superiores a 16 años son responsables penalmente, utilizando el método deductivo inductivo, concluyó que la criminalización de estos es una acción indispensable para limitar el nivel de criminalidad, ya que el país no ha realizado diversas políticas para atender este problema a nivel social.

La citada investigación revela la necesaria culpabilidad penal a los mayores de 16 años, lo cual en cierta medida se contrapone con la responsabilidad restringida pues a esta edad no han alcanzado la madurez suficiente para entender los injustos penales. Al respecto,

nuestra investigación coincide al estudiar la responsabilidad penal de los más jóvenes, peor en este caso entre 18 y 21 años; asimismo estudiaremos la responsabilidad penal de mayores de 65 años, la cual también es restringida atendiendo a su degeneración de facultades.

## **2.3. Bases teóricas**

### **2.3.1. Responsabilidad restringida por la Edad**

En nuestro Código Penal, se advierte que “Responsabilidad” es sinónimo de “culpabilidad”, pues sólo se imputa culpabilidad a quien puede asumir la responsabilidad.

Roxin (2008) precisa: “Es una valoración de los delitos típicos y puede determinar si el autor debe ser sancionado desde el punto de vista penal preventivo; la culpa sigue siendo la base y el límite del castigo”. (p. 31)

De igual forma, Rodríguez (2011) manifiesta: “La responsabilidad penal debe entenderse como las consecuencias jurídicas de un delito, el estado de obediencia de un individuo a la potestad sancionadora del Estado y se manifiesta como la imposición de una pena”. (p. 405)

Ahora bien, el legislador estableció, en función a la falta de autodeterminación del joven mayor de 18 y menor de 21, que esta responsabilidad debe ser atenuada, en consecuencia la pena debe ser disminuida, considerando que incluso en proporción menor al mínimo establecido para el delito cometido; haciendo diferenciación de aplicación a los agentes de algunos delitos.

Así también, Roxin (2008), señaló que los jóvenes entre 18 a 21 están asimilados a los crecidos en su imputabilidad. Es decir, son inimputables, pero atendiendo a un grado de madurez propio del desarrollo temprano de la personalidad, se puede atenuar la pena.

Por otro lado, el legislador, sustentando en la disminución de las capacidades es porque “va degradándose el sistema cognitivo y psicológico”, en razón de lo cual el juez

puede aplicar la responsabilidad restringida, advirtiéndose que su aplicación es una posibilidad del juez, pero no es la regla general; recortándose la aplicación de esta en vía legislativa, en razón de lo cual, el Ministerio Público, al momento de solicitar la pena no utiliza este argumento en algunos delitos, cuyo beneficio se ha prohibido por ley; pues si bien hay pronunciamientos que señalan no deben aplicarse las restricciones, el artículo 22° del CP sigue plenamente vigente y surtiendo sus efectos en el tiempo.

Ahora bien, la pena es la que puede ser disminuida atendiendo esta responsabilidad restringida por edad. La pena es la sanción a la vulneración de derechos y bienes resguardados por la ley; esta busca conminar tal violación, persiguiendo la prevención de más ilícitos. (Mantovani, 2015)

Individualizar la pena es tarea de los jueces a examinar según la ocupación disuasoria general y específica de la sentencia y la culpabilidad del agente, y estamos en la etapa de aplicación de la responsabilidad limitada.

Caro (2013) sostiene que “los factores que intervienen en la cuantificación de la culpabilidad en el sistema penal han sido especificados en normas jurídicas que no estaban disponibles hasta hace unos años; asimismo, la doctrina y la jurisprudencia penal promueven la individualización de la pena recientemente. comenzó hace solo unas décadas, lo cual es diferente de la teoría del crimen, que ha sido extensamente cubierta por la criminología.

Así también, Jiménez (2016), sobre la cuestión de limitar la responsabilidad penal a mayores de 18 y menores de 21, citó a Bustos diciendo: Responsabilidad es igual a ejecución. (...), la aplicación significa poner a prueba la capacidad del Estado para exigir una respuesta específica de alguien. Para que tenga estas capacidades, debe tener las condiciones que requieren este tipo de respuesta, de lo contrario estará dentro de los límites de la arbitrariedad total y el terror de Estado, (...) estamos nuevamente ante un concepto neontológico de política, incluida una mutua. relaciones y organización social. No es una falla en la estructura

del ser, en la capacidad de obrar diferente, en el libre albedrío, como en la teoría tradicional, sino en la relación entre el individuo y el Estado. (p, 28).

Prado (2015) manifiesta que la responsabilidad restringida es intrínseca al delito, siendo supuestos de disminución de punibilidad; por el contrario (Mirg Puig, 2014) aduce que son síntesis accidentales del delito, porque de ellos no depende su calificación como tal, sino solo su gravedad; de igual forma en el mismo sentido se pronuncia Borja (2015), manifiesta que pese a ser externo al delito, son eximentes incompletas (atenuantes)

Si bien las posturas expuestas son dispares, los citados autores coinciden en que constituye una circunstancia de atenuación; lo cual difiere mucho de los criterios adoptados en los últimos años, los cuales tienden a elevar las penas, buscando limitar la comisión de las mismas; sin embargo no vemos una disminución de la criminalidad, sino cárceles repletas de condenados y procesados, quienes se encuentran hacinados y no reciben programas ni atención para que puedan resocializarse, lo cual se aleja gravemente de los fines de la pena, pero no nos detendremos aquí, por no ser objeto de la investigación.

Ahora bien, el hecho de imponer penas al culpable, no puede transgredir de modo alguno la normativa penal, la cual debe ir alineada a los principios constitucionales, pues recordemos que los derechos humanos son insoslayables, aunque se imponga una pena privativa de libertad, pues sólo restringimos la libertad y derechos vinculados, pero no su derecho a la vida, la salud, la igualdad ante la ley, entre otros.

Aunado a ello, “El objeto de la pena no puede exceder la magnitud del delito del agente, que debe ser determinada por el juez penal en función del carácter del infractor y del mayor o menor daño causado por su actuación a los bienes constitucionalmente protegidos de que se trate”. (STC. N°0019-2005-PI/TC, Fundamento 41)

Estando a ello, la protección de los derechos constitucionales no puede dejarse a criterio del juzgador, pues es el legislador quien debe emitir normas con arreglo a la

Constitución, no esperando que sea el juez de la causa quien la inaplique para ir acorde a la Constitución, más aún cuando se advierte que su uso es discrecional y restringido. Es decir, el legislador debe proveer de seguridad jurídica a las decisiones judiciales y a los requerimientos fiscales.

En el Acuerdo Plenario N°4-2016 de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la SC, publicado el 17 de octubre de 2017, se abordó la responsabilidad restringida por edad, precisando que el primer antecedente se dio en el Código Penal de 1924; y, en Ley N° 15590 del 20 de agosto de 1965, que constriñó la traición a la patria, prohibió la atenuación de la pena, siendo el primer caso de trato diferenciado, entre otros como los Decretos Leyes N° 25659, 25708, 25880, los cuales pese a ver sido sometidos a acción de inconstitucionalidad, no se obtuvo un pronunciamiento favorable a la limitación de la aplicación de este favor de reducción moderada de la pena.

De este acuerdo plenario debemos resaltar su fundamento 10, que señala: “Las personas no maduran repentinamente y las personas entre 18 y 21 años no se consideran completamente competentes penalmente porque su proceso de maduración aún no está completo; además, en la vejez de la gestante, expresa un período de actividad vital reducida, su capacidad de culpa debe considerarse limitada”.

Ahora bien, como sabemos consideramos personas con capacidad de ejercicio a los mayores de 18 años, por lo cual a partir de dicha fecha su conducta es imputable penalmente; siendo que el Maestro Fernandez Sessarego señala que “a esta edad, una persona está dotada de la suficiente madurez intelectual, equilibrio psíquico, capacidad de reflexión y sentido de la responsabilidad para ejercer sus derechos de forma autónoma y sin ayuda y es capaz de ejercerlos.”, sin embargo su comportamiento puede variar pues su personalidad no se ha formado plenamente, siendo fácilmente influenciable; les cuesta autodeterminarse para actuar conforme a los valores sociales y al derecho; siendo que la aplicación de la

responsabilidad restringida es determinada por el juez que conoce la causa, pues en definitiva del estudio del actuar del agente, podrá determinar si efectivamente merece esta reducción de pena, pues en su contra puede presentarse la reincidencia, lo cual determina el conocimiento previo de la reprochabilidad del hecho.

Es así que se evidencia que, vía control difuso, jurisdicción extraordinaria y de última ratio, se puede determinar vía interpretación la constitucionalidad de las normas cuyo efecto es entre partes, previo test de ponderación; más aun cuando la norma no es de aplicación obligatoria o irrestricta; debiendo ser su aplicación o inaplicación motivada.

Es de precisar que no toda diferencia es un trato desigual, pues la igualdad se da entre iguales, entendiéndose que esta premisa fue la que validó la exclusión de ciertos agentes, al acceso a este favor de minorización proporcional de la pena.

### **2.3.2. Responsabilidad penal (Art. 20 del CP)**

El Artículo 20 del Código Penal, prevé la inimputabilidad con criterios normativos biológicos (Villavicencio 2014) o normativos psicológicos (García 2012; Hurtado y Prado 2011), ya que exige que “las anomalías psicológicas incapaciten al sujeto para comprender sus actos y en consecuencia, comportamiento” (Prado, 2011, p. 598). La doctrina del estado incluye este concepto híbrido de la teoría presentada por Klav Rosing. Este autor define la culpa como “comportamiento injusto a pesar de la disponibilidad normativa” (Roxin 1997, p. 807). Así, reprocha datos normativos empíricos mixtos constituidos por dos elementos: la capacidad general de autocontrol y la disponibilidad normativa y la distribución normativa de facultades para obrar conforme a la ley.

En cuanto al factor empírico, Luo Xin explicó que no está hablando del libre albedrío como requisito previo para las reglas del juego o la naturaleza normativa de la vida social.

Es decir, la libertad es una norma, no un empirismo. Por otro lado, los factores experienciales deben incluir el estado mental y emocional de una persona, que le permite (ya sea libre o determinada) controlar psicológicamente su comportamiento; sin embargo, estas capacidades psíquicas no son suficientes para establecer la atribución, sino que requieren de una valoración normativa, incluyendo el otorgamiento a la persona de la capacidad de obrar conforme a derecho, por lo que se exigirá responsabilidad penal por tal conducta. Esta atribución sería el elemento normativo de la culpa. Por lo tanto, si una persona comete un acto delincuencial en un estadio en el que tiene la oportunidad de autocontrol su conducta y la ley penal le obliga a actuar de otra manera, habrá impunidad.

Un sector de la doctrina (García, 2012) y la parte normativa se adiciona a la teoría de Jakob. El autor construye su concepto de culpa en un programa en el que el derecho penal trata de restaurar y comunicar la vigencia de las normas criminalmente engañadas, manteniendo así la aceptación general de estas normas (Jakobs, 1996, p. 584). En este esquema teórico, el delito ya no es una “modificación experimentada y real del mundo exterior” (violación de los derechos jurídicos), sino un intercambio o expresión normativa libre de valores (Lesch 2000, p. 268). Los humanos ya no son vistos como seres empíricos, sino que son capaces de expresar significados racionales y criminalmente significativos. Esta habilidad obliga al sujeto a restituir la vigencia de las normas defraudadas (Jakobs, 2005).

Como hemos visto, la capacidad de expresar el sentido penal de una norma constituye atribuibilidad (Lesch, 2000, p. 271) y por tanto imputabilidad. Ya no se define a partir del concepto de hombre como existencia empírica, sino que se define de manera normativa y universal. Es decir, los juicios no se hacen sobre la base de una persona, sino sobre la base de la percepción que la sociedad tiene de ella como capaz de causar malestar social. La



responsabilidad, o la capacidad de cuestionar la validez normativa, sería un concepto normativo significativo determinado por criterios prudenciales generales más que por las circunstancias personales del individuo (Jakobs, 1996, p. 631). En esta idea, García sigue a Jacobs al definir el sentido común como “la capacidad de un agente para comunicar hechos criminalmente relevantes a través de sus acciones” (2012, p. 642). La responsabilidad surge cuando la ley penal obliga a una persona a restaurar la vigencia de una norma perturbada por sus actos.

Respecto a los supuestos normativos, se señala que está exceptuado de responsabilidad penal:

1. “El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión” (inc. 1 art. 20 CP).

Los psicópatas están configurados para explicar una de las razones por las que un individuo inocente comete un comportamiento típico e ilegal. Por lo tanto, la reacción del ordenamiento jurídico no puede ser fijando sanciones, sino tomando distintas medidas según la medida en que el sujeto sea aplicable. Como se desprende del presente trabajo, se adopta la razón de impecabilidad para juzgar lo que es normal, a fin de que se acepten los efectos producidos por la ley, y lo anormal, no se pueden aceptar los mismos efectos. Eso es exactamente lo que sucede con la psicosis. Si bien el sistema legal penal peruano lo denomina así, se refiere a cualquier condición mental patológica, independientemente de su causa.

Por tanto, cabe señalar que los conceptos de normalidad y anormalidad son respuestas a valoraciones sociales que están incrustadas en las normas de nuestro sistema

penal. De hecho, las reglas impuestas socialmente están diseñadas para hacer que los sujetos se comporten de acuerdo con el consenso social sancionado. Una persona será así susceptible de acción penal cuando el desarrollo de su personalidad sea acorde con los modelos de desarrollo expresados en el ordenamiento jurídico, los cuales resultarán normales y esperados. Para ser más precisos, una persona no se pertenece a sí misma, sino a su desarrollo y relaciones con la sociedad particular. Así, se considerará desviación psicológica si algún aspecto psicológico del sujeto crea un riesgo de prohibición que es contrario al desarrollo psicológico y/o comportamiento socialmente esperado. Su conformidad con las evaluaciones sociales estándar solo se puede probar con el apoyo de la disciplina pertinente, a saber, la psiquiatría y las habilidades que se pueden desarrollar a partir de ella.

Por otra parte, si bien los trastornos mentales se reconocen como desviaciones, conviene recordar que los términos utilizados para designarlos no siempre coinciden con los utilizados en otros ordenamientos jurídicos. Básicamente, la psicosis, hace referencia a un término general que hace alusión a los trastornos mentales o psicológicos que pueden afectar al sujeto en el instante de la comisión del delito. El CP español establece que están exentas de responsabilidad penal las personas que, al cometer un hecho delictivo, no comprendan o no se ajusten a comprender el delito por "cualquier cambio anormal o psíquico"; y en la siguiente sección haga coincidir estos términos con el término trastorno mental transitorio.

El CP de Colombia, establece que una persona que nuevamente no comprende o no puede actuar de acuerdo con el entendimiento del hecho ilícito no es responsable por razones tales como trastorno mental. El derecho penal argentino, por su parte, utiliza los términos "fallo de sus capacidades" y "los mismos cambios patológicos". Por lo tanto, la terminología utilizada en otros países generalmente permite afirmar que una anomalía o cambio en el campo psíquico de una persona, además de la frase que lo expresa, se considera base de atribución. De esta manera, es necesario entender exactamente de qué estamos hablando: "El

trastorno mental es una condición psicopatológica en la que el sujeto vive durante un incidente con suficiente volumen, gravedad e impacto en el campo cognitivo, voluntad o emociones que no le permite darse cuenta de la ilicitud de sus actos o identificarse por tales entendimientos.

2. “El menor de 18 años” (inc. 2 art. 20 CP)”.

La problemática de la edad penal está indisolublemente ligada con la del niño o adolescente y por ende también con el juicio de imputabilidad o capacidad de culpabilidad del agente responsable de la acción típica. La mayoría de legislaciones en el mundo han coincidido en establecer como edad mínima de inimputabilidad la de 18 años. Si bien la tendencia en la doctrina y la legislación ha sido la de determinar la imputabilidad desde las ciencias naturales con lo biológico; existen aspectos psicológicos y sociales que influyen al momento de determinar la edad máxima de responsabilidad de un menor de edad.

**Aspectos biológicos.** - El sistema de vigilancia utiliza hasta tres métodos para determinar si un agente es o no responsable de un delito. En primer lugar, los métodos biológicos se encuentran entre los más importantes para determinar la atribución. Confirma el estado patológico de la persona (que suele exigirle un orden psicofisiológico) y en consecuencia declara su incompetencia. A diferencia del anterior, el enfoque psicológico no se centra en las condiciones patológicas, sino en su impacto en el entorno psicológico de la persona; y el enfoque híbrido o biosociológico, que se nutre de dos sistemas que forman combinaciones diferentes: la psicopsiquiatría, la psiquiatría biológica y la psicosociología biológica. El enfoque híbrido se centra tanto en la base biológica de la impecabilidad como en sus consecuencias en la vida psicológica del escritor. Este sistema debe estar en armonía en términos de desarrollo biológico, psicológico e integración social, para que el sujeto tenga la oportunidad de apreciar la ilegalidad de la conducta. Una de las razones de la infalibilidad que se encuentra en la doctrina es la llamada "inmadurez". Como enseñaba Cray, se refiere

a un sistema biológico y no existen más que dos criterios para su determinación: (...) la discriminación, tras lo cual en cada caso es necesario comprobar si el individuo tiene el objetivo fijado, dónde más cierta edad, la inmadurez del individuo se supone *iuris et de iure*. El criterio (objetivo) es que las legislaciones se basan para atribuir al niño o adolescente la calidad de inimputable, pues carece de la madurez con que viene acompañado la mayoría de edad.

**Aspectos psicológicos.** - Las definiciones psicológicas son importantes para justificar por qué la mayoría de edad se fija en 18 años. Un concepto básico de la psicología del desarrollo o evolutiva es que el proceso de crecimiento es la maduración. Si se reconoce que un cierto comportamiento ocurre en todos los miembros de una especie, aproximadamente a la misma edad, sin un entrenamiento especial, es claro que es el resultado de la maduración y no del aprendizaje.

Según la teoría del desarrollo, entre los 10 y los 12 años el niño entra en la cuarta etapa de la evolución, que se caracteriza por el inicio del razonamiento sistemático y estructurado sobre su existencia. Obtiene la capacidad de evaluar factores, manejar y controlar variables, formular hipótesis e incluso probarlas. Elementos de pensamiento abstracto que demuestran la capacidad de un joven para comprender sus hechos, acciones y posibles sanciones. Entonces, dado que su cerebro e intelecto están más desarrollados; poder comprender que toda acción tiene una reacción y por tanto una consecuencia, una sanción, comprender el delito y las consecuencias asociadas a él. Obviamente, no todos los delitos requieren el mismo nivel de inteligencia para comprender, el menor promedio comprenderá que no debería haberle quitado la vida a alguien y, por otro lado, es probable que no pueda comprender qué significan los números de fraude. Siempre es un error negar que los adolescentes puedan conocer y amar, comprender y actuar. Los adolescentes no deben ser vistos como inconscientes e irresponsables de sus acciones, ya que parece que pueden tener

la capacidad de comprender las reglas y motivarse de acuerdo con ellas, aunque no como adultos. La psicología evolutiva no puede distinguir al adolescente, pero su capacidad mental es todavía insuficiente para decir que sus mecanismos de autocontrol conductual responden adecuadamente a la injusticia.

**Aspectos sociológicos.** - Uno de los fenómenos que incide directamente en la formación de la personalidad del sujeto es el medio social en el que se desarrolla, de igual forma, junto con los factores biológicos y psicológicos ya mencionados, permite que una persona se comporte de determinada manera en un medio determinado. . . Aunque los valores pueden variar con el tiempo, los valores siguen siendo los mismos; la globalización, el uso de la tecnología y el enriquecimiento de la información y el conocimiento han tenido un impacto tan grande en la sociedad que es imposible comparar el contexto sociológico del desarrollo de la juventud hace 50 años con la juventud de hoy. Comparado esto ya que ha habido un aumento significativo en los delitos recientes a lo largo de los años, es decir, por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal; 14 años y su agresividad (aumenta el daño causado) voluntariamente hacia los bienes materiales y las personas. Las relaciones familiares disfuncionales, los medios de comunicación y el mal trato de los niños o la delincuencia juvenil ponen de relieve la delincuencia sin necesidad de reeducación, resocialización. Adoptar el comportamiento agresivo o ilegal de un niño como un modelo socialmente aceptable, como un modelo a seguir, le dará notoriedad. La realidad surge como base para pronunciamientos e iniciativas legislativas que obligan a repensar el tema de la inmunidad penal de los menores de 18 años.

3. “El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros (inc. 3 art. 20 CP), siempre que concurren las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios,

considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa. c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa”.

Solorzano, (2021) afirma que la defensa jurídica del fondo de la ley ha derrotado a la situación razonable más que a la proporcional. Para este último, la relación comienza a romperse, lo que justifica la defensa, aunque se considere descortés o socialmente aceptable. Bernath (2015) ha comprobado que la teoría dualista no encaja en la perspectiva de la creación ni en la de sus compañeros. Según los defensores, el ambiente de legítima defensa sólo puede identificarse si el ataque está relacionado tanto con el estado peligroso de los derechos jurídicos de la persona como con los aspectos mencionados; sin embargo, debe ser un asunto individual. En cuanto a la definición de la teoría, el ataque a las pérdidas ejecutivas que pueden evitarse mediante la evasión involucra solo las afirmaciones de los teóricos transpersonales, porque la lucha contra los intereses legales es consciente de que la designación dualista puede evitarse optando por no participar.

Vera (2019) en este sentido, es posible separar la necesidad de protección (en un sentido amplio o general) y la necesidad de utilizar los medios como dos cosas diferentes. Inicialmente se asoció con deficiencias de conservación no especificadas y su evitación no pudo evaluar la conservación completa o incompleta. Es decir, se constató que existía riesgo para ciertos bienes jurídicos tutelados penalmente que ya no se encontraban protegidos y asegurados, por lo que se ordenó actuar para evitar que la defensa se percatara de ese riesgo. Las necesidades o defensas especiales deben integrarse en el manejo de los intermedios, y si se exageran (muy exageradas) pueden dar lugar a una evaluación incompleta de los cuidados paliativos.

Cova (s.f.) y su finalidad son dos cosas diferentes. La protección de la propiedad, cualquiera que sea, siempre es legal: el trabajo de los medios no siempre es legal y de una manera que no corresponde a un delito, como un asesinato o un daño. Sin embargo, si el valor de la propiedad en juego es significativo y el daño es definitivamente insuperable, debe negociar con el propietario y tiene derecho a defenderse por cualquier medio que sea necesario.

4. “El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de, siempre que concurren los siguientes requisitos: a) Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado; y b) Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro; otro" (inc. 4 art. 20 CP)

Del “estado de necesidad justificante”, Politoff, Mattus y Ramírez (2004) indican que: “La idea de estado de necesidad justificante supone la existencia de un mal o peligro inminente para un bien jurídico que no puede evitarse de otra forma como no sea dañando un bien de menor valor (...)” (p. 228); la lesión se ocasiona a un bien inferior jerarquía, para proteger un bien superior.

En el mismo sentido, los penalistas Rodríguez, Ugaz, Gamero y Schönbohm (2009) cita que: “consiste en un estado de peligro actual para legítimos intereses que únicamente puede conjurarse mediante la lesión de intereses legítimos ajenos y que no dan lugar a una legítima defensa, ni al ejercicio de un deber” (p. 77). Lo que se elimina es la antijuricidad, al ser una causa de justificación.

5. “El que, ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación.

No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias; especialmente, si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica” (inc. 5 art. 20 CP).

Una justificación del estado de necesidad contiene una lista de apertus, que es comprensiva de los objetos, la vida, la libertad, etc. contenidos en esa lista. Esto no es lo mismo que la necesidad de estado exento cuando se establecen bienes jurídicos (Bramont-Arias, 2002, p. 286).

El “estado de necesidad disculpante”, según Rodríguez, Ugaz, Gamero y Schoenbom (2009) sostienen que “(...) En un conflicto entre bienes jurídicos de la misma clase, es importante que “el daño hecho no sea mayor que el daño que se quiere evitar” (p. 98); los objetos jurídicos enfrentados tienen el mismo valor, porque se trata de esta persona criminal cuyos objetos jurídicos de diferentes valores se enfrentan. Orts, Gonzáles, Matallín y Roig (2010): “(...) como causa de culpa (excusa) cuando hay conflicto entre bienes de igual valor (cuando se sacrifica un bien por otro). Ver SSTs 24-11-1997; 10 de febrero de 2002)” (p. 91); es claro que en esta especie de estado necesario (estado de inocencia) la culpa queda excluida. Sobre la regulación normativa del estado de necesidad exculpante en el ordenamiento jurídico, los penalistas Rodríguez, Ugaz, Gamero y Schönbohm (2009) mencionan que: “Está contemplado en el inciso 5 del art. 20 del Código Penal que se relaciona con el estado de necesidad exculpante (...)” (p. 98); además en aquel artículo



también se establece en qué casos no procede la exención del estado de necesidad disculpante.

El inciso 5 del artículo 20 del Código Penal de 1991 dice: Quien de otra manera se enfrente a un peligro presente e inminente, a saber, una amenaza a la vida, a la integridad física o a la libertad, que haya cometido un acto ilegal con el fin de evitar un peligro para sí mismo o para las personas con quien tiene lazos estrechos. Esta excepción no se aplica si las circunstancias pueden obligar al agente a aceptar o soportar el peligro, especialmente si crea el peligro o está obligado por ciertas relaciones jurídicas. El código penal peruano cierra bienes jurídicos que sólo pueden defenderse relevándolos de la necesidad.

6. “El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero o de la naturaleza” (inc. 6 art. 20 CP)

Es una fuerza que hace que el sujeto no pueda reaccionar ante ella, una fuerza física irresistible puede provenir de la naturaleza o de un tercero, en esta forma de pasividad es importante que obligue a la persona a actuar sin resistencia, por lo que esta fuerza física debe ser absoluta, es decir el sujeto no puede tener la opción de hacer otra cosa. Si esta fuerza no es absoluta, entonces quien la padece puede resistirla, o al menos no puede excluir la acción, porque esta fuerza irresistible requiere la posibilidad de que la voluntad sea eliminada por completo junto con las capacidades del sujeto.

7. “El que obra compelido por miedo insuperable de un mal igual o mayor” (inc. 7 art. 20 CP)

Esta es la base para la exención y también para la responsabilidad según el Artículo 20, Cláusula 7 del Código Penal, donde el temor justificado conduce a la exclusión de la responsabilidad penal. En el caso de estados emocionales, debe esperarse un cambio de

conciencia grave, que es la base de la inmunidad según el artículo 20 inc. 1 del Código Penal, pero cuando las emociones no son graves ni justificadas, el artículo 21 del Código Penal. Al respecto, Prado (2016) citado por Andrade (2019) afirma que “el temor mencionado en la norma no debe compararse con el temor insuperable, cuyas presunciones de inocencia están señaladas en el inciso 7 del artículo 20”.

El autor cita el artículo 46, inciso 1, inciso c) de la Ley Penal, que establece que los sentimientos o temores justificables no son considerados sinónimos de temor insuperable, ya que el artículo del autor toma en cuenta las razones antes mencionadas solicitud de exención, relacionados con la intensidad. Por otra parte, para mitigar el castigo del ofensor, el sentimiento violento debe ser considerado como una condición perdonable. También debe extenderse que el daño a la reputación o la ofensa injustificada son circunstancias que hacen perdonables los sentimientos.

8. “El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo” (inc. 8 art. 20 CP)

Estos supuestos sobre el cumplimiento de las obligaciones legales pueden traducirse en principios del uso de la fuerza. Según la organización de la ONU, los estados y las fuerzas del orden deben adoptar e implementar reglas sobre el uso de la fuerza que sean consistentes con los principios básicos del uso de la fuerza y las armas de fuego y los funcionarios que las usan deben hacerlas cumplir. También obliga al Estado a desarrollar lineamientos y brindar la capacitación y el equipo necesario para preservar la integridad de los responsables de garantizar la libertad y el orden público, a saber, la policía.

9. “El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones”. (inc. 9 art. 20 CP)

El TC afirmó que "si la orden es manifiestamente ilegal, la obligación de cumplir la orden desaparece y la ejecución de la orden implica responsabilidad penal". Asimismo, la Corte Constitucional señaló que "dentro de la Constitución, el ámbito de la obediencia debida, en primer lugar, conforme a la supremacía constitucional y al principio social del Estado democrático y de derecho, prevé a quienes ejercen los poderes estatales "dentro de los límites y obligaciones previstas en la Constitución y la ley" (artículo 45 de la Constitución).

10. "El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición." (inc. 10 art. 20 CP)

Del mismo modo, una orden que es ilegal en sustancia parece ser legal, no impone responsabilidad penal y es totalmente vinculante para el destinatario; por lo tanto, la ejecución de una orden superior no es vinculante porque es ilegal, excepto cuando se viola la ley, la violación debe ser evidente para el destinatario de la orden. Se entiende por manifiesto que no admite interpretaciones contrarias. Cuando una orden resulta ser claramente ilegal -porque viola claramente la ley, si el subordinado la ejecuta, existe el riesgo de desaprobación legal y responderá aceptando la autoría.

11." El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte." (inc. 11 art. 20 CP)

Como Carbonell, (2021) explica: que el parámetro de necesidad está relacionado con la excepcionalidad que debe regir en el uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, estos solo deberán hacer uso de su potestad para utilizar la fuerza cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Por lo tanto durante el procedimiento de

detención de una persona que tenga que inevitablemente hacer uso de la fuerza, se deberá proceder de la siguiente manera: 1. Procurar ocasionar el menor daño a la persona en detención y velar por el respeto a la vida e integridad física y psicológica del detenido; 2. No expondrá al detenido a tratos crueles o denigrantes o actos de tortura o de abuso de autoridad; y 3. Utilizará de forma legal, necesaria y proporcional los distintos niveles del uso de la fuerza.

Asimismo, Cubides et al., (2022) ante la necesidad de mantener el orden público, el uso de la fuerza letal debe utilizarse únicamente como último recurso. Por lo tanto, tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos comparten dos principios similares, como son la necesidad y la proporcionalidad. En relación con el mantenimiento y restauración del orden público, el principio de necesidad se refiere al uso de medios no violentos antes del uso directo de la fuerza y las armas de fuego. Estos mecanismos sólo deben utilizarse cuando la primera medida es ineficaz o no puede garantizar el resultado deseado. En cuanto a los argumentos presentados, el principio significa que la fuerza solo debe usarse cuando las circunstancias lo justifiquen, siempre se considera el principio de necesidad y la no violencia es el primer mecanismo, por lo que el uso de la fuerza y la fuerza solo es efectivo si la primera arma es ineficaz, si se van a utilizar armas de fuego.

En cuanto a la implementación de este principio, el Ministerio del Interior de Medina (2018) destaca que cualquier actuación que realice la Policía Nacional del Perú, en el ejercicio de sus funciones, debe estar también dentro del marco legal. La vigilancia eficaz debe estar estrictamente limitada por el derecho nacional e internacional. También cabe señalar que el cumplimiento del principio de necesidad significa que el uso de la fuerza se detiene cuando se han alcanzado los fines.

### 2.3.3. *Responsabilidad restringida*

El art. 21 del CP, pregona “En los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal”.

Para comprobar la cuantía de la sanción impuesta, en principio, hay que valorar que no se han agotado los requisitos para determinar su aplicación en el principio de culpa y también tener en cuenta el principio de proporcionalidad del artículo 8 del Título Transitorio del Código Penal Peruano, que es una limitación del ius puniendi, pues se busca la correspondencia entre la injusticia y la pena impuesta, El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 139, artículos 21 y 22 de la Constitución Política y artículo IX del Título Transitorio del Código Penal.

Como todos sabemos, el castigo en la sociedad tiene un importante propósito disuasorio para promover la regulación del delincuente y el ordenamiento jurídico y fortalecer el respeto de los ciudadanos por las normas. En este sentido, la sanción debe tender a un efecto disuasorio especialmente positivo, de modo que tenga un efecto beneficioso sobre la personalidad del infractor, si ello no es posible, debe prevalecer la socialización y el deterioro de la condición del infractor y la amenaza a su dignidad personal. En efecto, la validez de una pena o de una pena privativa de libertad no se refiere a los mismos criterios que se utilizan para dictar la pena, sino a criterios establecidos por medidas especiales.

El tema de la modificación de las circunstancias de la responsabilidad penal ha recibido tan poca atención que no existe una definición que exprese su verdadero significado. En esencia, las circunstancias incluyen hechos, relaciones o datos concretos que son penalmente responsables. Desde un punto de vista jurídico, la actividad delictiva no está relacionada con el alcance del delito, sino con las consecuencias. Así lo establece claramente

el texto del Código Penal del Perú (artículo 20), que señala las causales de exoneración, atenuación o acrecentamiento de la responsabilidad penal; son meras modificaciones de la responsabilidad penal, que sin duda implican su fuerza jurídica como delito. Condiciones del instrumento cuantitativo. En otras palabras, las circunstancias del delito son los factores incidentales nombrados y no nombrados de la estructura criminal que influyen en la determinación de la pena. Su desgracia hace que no causen injusticia ni responsabilidad al sujeto.

Es decir, en base a circunstancias comprensibles, pueden valorar una mayor o menor desvalorización de un hecho ilícito o un mayor o menor grado de culpabilidad imputable al autor de dicho hecho y luego si el delito es más o menos grave, en consecuencia, evaluar la gama de sanciones cualitativas y cuantitativas que deben imponerse a los infractores o participantes. La función primordial es meramente la de facilitar la gradación o determinación de la cuantificación o extensión de las sanciones específicas aplicables a los hechos punibles.

Las circunstancias pueden clasificarse de diferentes formas, pero de acuerdo a las características del derecho penal de nuestro país, según la naturaleza de las circunstancias, el efecto y la relación con la condena, se aceptan tres normas de clasificación. Los casos penales complejos a menudo involucran una variedad de circunstancias de la misma o diferente naturaleza, por ejemplo, debido a la diversidad de delitos o agentes. En estos casos, la determinación de penas específicas requiere evaluaciones analíticas complejas, las cuales deben ser evaluadas por los jueces en cada caso específico. Si concurren múltiples circunstancias agravantes, la pena debe aproximarse a la pena máxima legal o, en su caso, a la pena máxima. Del mismo modo, si concurren varias circunstancias atenuantes al mismo tiempo, debe imponerse una pena cercana al mínimo legal.

#### **2.3.4. *Derecho a la igualdad ante la ley***

El Pacto de San José de Costa Rica, en su Art. 24, señala que “todos son iguales ante la ley y su protección es sin discriminación”.

Nuestra Carta Magna, en su art. 2º prescribe: “toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”; en el mismo sentido, el art.103º determina: “(...) Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas”.

Según el Tribunal Constitucional, en el Exp. 03525-2011-AA:

“[...]La igualdad es ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable”.

El mismo TC, señala es un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho, que la igualdad será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable.” (STC 00009-2007-PI/TC, fundamento 20).

Es así que, este derecho importa que la ley no debe efectuar distinciones donde no las hay, como el caso sub examine, pues, que diferencia habría para no aplicar la reducción prudencial de la pena a un autor por un delito u otro, atendiendo a su edad; es decir, la norma prevé un trato prudencial atendiendo a la inmadurez del agente o disminución de su actividad cognitiva y psicológica, la cual atiende a una razón especial, la propia personalidad, la persona en sí lo cual no habilita en modo alguno que puedan preverse exclusiones en razón al delito, pues este no ha sido un factor que ha determinado la aplicación de la responsabilidad restringida; más aún si cada delito ya tiene su propia graduación y si sus límites son mayores, pues la aplicación de la responsabilidad restringida también será acorde a la graduación del delito.

Ahora bien, el legislador no debe prever normas que atenten con principios constitucionales y humanos, que son los fundantes del Estado de Derecho, en razón de lo cual estudiaremos si se justifica esta “diferencia” en la aplicación del beneficio de reducción proporcional de la pena por responsabilidad restringida.

El derecho a la igualdad, según Miranda (2016): La igualdad sólo se viola cuando los contratos desiguales carecen de una justificación objetiva y razonable, es decir, buscan menoscabar los derechos fundamentales de las personas.

Según Rubio (1999), este principio revela que:

“- Todos tenemos algo de común e idéntico con los demás que es lo que nos caracteriza como humanos. En conjunto son los derechos humanos declarados para la comunidad de hombres y mujeres y que se encarnan en cada uno de nosotros como



parte de dicho grupo. Cada ser humano tiene por tanto todos los derechos humanos y en eso es igual a cada uno de los demás.

- Habrá que tratar jurídicamente a las personas no por sus diferencias que indiscutiblemente existen sino por la diferencia en la naturaleza de las cosas tratar con igualdad en lo que todos somos iguales y de diversa manera en lo que somos diferentes forma parte de lo conector en el Derecho”.

### ***2.3.5. Igualdad como principio y como derecho***

Es una norma que se reconoce como un derecho fundamental de toda persona y un principio constitucional, define un conjunto de tareas para las entidades tanto públicas como privadas y prohíbe cualquier discriminación, aunque reconozca la introducción de discriminación entre casos o condiciones legales, si dicho tratamiento está justificado por razones objetivas y supera las pruebas de razonabilidad y proporcionalidad.

En este sentido, el principio de igualdad de derechos exige que el Estado trate a todas las personas que reúnan las mismas condiciones (como viudas y viudos, hijos, inversionistas nacionales y extranjeros) o sustancialmente a todas las personas con las mismas condiciones. Estas facultades se dividen básicamente en dos derechos específicos: a) el derecho a la igualdad de trato ante la ley y su aplicación y b) el derecho a no ser discriminado por ningún motivo.

La Carta Constitucional exige que seamos tratados por igual ante la ley, este mandato permite la discriminación porque todos estamos en las mismas circunstancias o en la misma situación en la que en realidad debemos ser tratados bajo la ley del mismo modo y cuando

existan diferencias significativas, el reconocimiento de esas diferencias puede permitir la aplicación de un tratamiento jurídico diferente; sin embargo, si el tratamiento se basa en algún motivo prohibido por la constitución (origen, raza, sexo, idioma, etc.), entonces el tratamiento será nulo porque se caracterizará como discriminatorio.

El art. 103 de la Constitución de 1993 dispone que podrán adoptarse leyes especiales según la naturaleza de los casos, pero que no podrán diferir de persona a persona. Como ejemplo, argumentamos que para determinar el impuesto sobre la renta que una persona debe pagar al gobierno, se determina una proporción de tasas impositivas que aumentan progresivamente en función del nivel de ingresos del contribuyente, pero no todos tenemos los mismos ingresos. Por lo tanto, debe recibir un tratamiento diferente en función de los ingresos económicos obtenidos por la persona en un año predeterminado.

Por último, el derecho a la igualdad es un derecho relacional, pues “la igualdad no puede garantizarse plenamente sin reconocer la interdependencia, indivisibilidad e interrelación de los diferentes aspectos de la igualdad”. En principio, la igualdad no se ve amenazada de forma espontánea ni en abstracto, sino que en tanto se vincula a otros derechos, como el derecho a la igualdad en el trabajo, tiene características o condiciones similares a otra persona (comparar condiciones), a pesar de ser en tal en la misma situación sería tratado mejor o de manera privilegiada que la persona en cuestión. Al respecto, la Corte Constitucional señaló:

(...) el principio-derecho de igualdad se constituye en un presupuesto indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales. Posee, además, una naturaleza relacional, es decir, que funciona en la medida en que se encuentre relacionada con el resto de derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales. Dicho

carácter relacional sólo opera vinculativamente para asegurar el goce, real, efectivo y pleno del plexo de derechos que la Constitución y las leyes reconocen y garantizan.

Cuando se trata del derecho a la educación, por ejemplo, se vulnera la igualdad cuando se imponen requisitos o condiciones que los estudiantes o sus padres no pueden cumplir para acceder a los centros educativos públicos o privados.

### **2.3.6. Ámbitos de Aplicación**

Los ámbitos de aplicación de la igualdad son en la ley y ante la ley. La igualdad ante la ley se refiere a la aplicabilidad de la igualdad de todos en el ámbito administrativo, jurisdiccional y personal. La igualdad ante la ley se refiere a la igualdad como un derecho fundamental que es vinculante para la ley y los legisladores.

### **2.3.7. Igualdad en la ley**

La igualdad en la ley, refiere a su contenido y constituye mandato legislativo que contiene una ley que dice que las personas iguales deben ser tratadas por igual y las personas desiguales deben ser tratadas de manera diferente. Por otro lado, la igualdad en la aplicación judicial remite al concepto clásico de igualdad de los jueces. Esto se debe a que la autoridad que ejerce la jurisdicción debe tratar igual a las mismas personas. Mendonca y Guibourg, Molina Guaita, Cea Egaña, Verdugo y Pfeffer, Figueroa, Ollero y muchos otros autores se expresan en este sentido. Esto significa que el poder judicial debe tratar a las personas iguales por igual y a las personas desiguales de manera diferente, lo que luego se denomina el concepto básico de igualdad en la aplicación de la ley (Díaz, 2012).

### 2.3.8. *La igualdad ante la ley*

Adoptar una opinión igualitaria en el campo de las constituciones nacionales, así como en el campo de los derechos humanos internacionales. Dentro de los estados, la primera dimensión de la igualdad ante la ley apareció con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789 y luego fue reconocida por las constituciones clásicas y modernas como la naturaleza igualitaria y las cualidades fundamentales de todos los seres humanos. Históricamente, esta dimensión condujo a la erradicación de la esclavitud, el desprecio por la dignidad humana y la igualdad fundamental de los seres humanos. Esto fue evidente en los inicios del ordenamiento jurídico chileno, con la declaración de la libertad de la matriz en 1811, la abolición de la esclavitud en la carta fundacional de 1823 y los posteriores textos constitucionales que la celebraron.

La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y las constituciones internacionalmente la pregonan. Argumentan que cualquier distinción basada en cualquier dimensión subjetiva es sospechosa de ser inconstitucional, sujeta a un análisis profundo de racionalidad y proporcionalidad y finalmente decidida por la jurisdicción constitucional o un tribunal internacional de derechos humanos. La jurisprudencia de nuestros países avala este punto de vista y un modo típico lo señala la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que expresa: “En relación con la igualdad ante la ley, existe una exigencia inequívoca de aplicar un régimen uniforme. está libre de discriminación injusta o arbitraria en su interpretación, valoración y alcance de las consecuencias jurídicas e impide la creación de leyes y reglamentos diferentes según la raza, condición social, origen, riqueza, religión, ideología u otras características estrictamente específicas”.

La prohibición de distinguir entre los aspectos subjetivos de los individuos es una limitación de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, así como del autogobierno privado. El inciso 2 del artículo 19 de la Constitución, de conformidad con el inciso 2 del artículo 5 y el contenido de los derechos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos requieren un estricto escrutinio constitucional. Igualdad de principios y derechos donde las diferencias son subjetivas como raza, religión, origen, ideología, etc. En este caso, la carga de la prueba recae en quienes sostienen la legitimidad de la distinción basada en estos factores. En este sentido, no es aplicable el principio de presunción de constitucionalidad de las normas jurídicas.

### ***2.3.9. Igualdad en la elaboración y aplicación de la ley***

Un texto normativo se ajusta al alcance y significado del principio de igualdad porque su imperio normativo incluye desde el principio a todas las personas porque no reconoce efectos discriminatorios; por lo tanto, luego de cumplir con las prioridades antes mencionadas de acuerdo con las funciones esenciales correspondientes, que distribuyen beneficios o penalidades de manera diferente. La existencia de disposiciones reglamentarias diferentes o de tratamientos diferentes resultantes de la aplicación de la interpretación de la ley debe evaluarse teniendo en cuenta el objeto y el efecto de las medidas legales adoptadas en esta materia. La determinación de las distinciones legales debe basarse en valores morales y legales y debe apuntar a resultados legales legítimos que deben ser resultados válidos específicos, obvios y verificables.

El fundamento de la distinción debe ser un fin legítimo, definido, específico y concreto dirigido a obtener o asegurar un bien o valor constitucional, o un bien o valor

constitucionalmente aceptable. En otras palabras, debe basarse en razones objetivas y razonables de acuerdo con evaluaciones precisas generalmente aceptadas. Por lo tanto, no es posible hablar efectivamente de trato diferencial si se basa en hechos o situaciones subjetivas evidentes. Es importante señalar que la justificación objetiva se trata de la existencia real de los supuestos normativos, mientras que la racionalidad dota a toda la estructura normativa de un contexto axiológico lógico.

Así, la discriminación incluye reglas que determinan una conexión razonable entre el trato desigual establecido, los supuestos sobre hechos objetivos y los fines a alcanzar; sin embargo, hay que añadir una escala a lo anterior. Para ello, es necesario pensar en la armonía y el cumplimiento de la situación actual y las metas establecidas. Por tanto, la distinción será válida si se adecua a la situación real y a la finalidad perseguida.

También es necesario considerar la razonabilidad, es decir, la necesidad de probar la conformidad de los medios utilizados en la ley con el fin declarado. Esto significa que existe un vínculo o conexión válida entre la diferencia que se pretende legitimar, los supuestos de hecho que la sustentan, el procedimiento o enfoque utilizado y la finalidad a la que se destina. Como colofón, cabe destacar que el concepto de igualdad ante la ley no contradice la existencia de una norma de diferencia, si se prueba:

- “a) La existencia de distintas situaciones de hecho y, por ende, la relevancia de la diferenciación.
- b) La acreditación de una finalidad específica;
- c) La existencia de razonabilidad, es decir, su admisibilidad desde la perspectiva de los preceptos, valores y principios constitucionales;

- d) La existencia de proporcionalidad; es decir, que la consecuencia jurídica diferenciadora sea armónica y correspondiente con los supuestos de hecho y la finalidad; y,
- e) La existencia de racionalidad, es decir, coherencia entre los supuestos de hecho el medio empleado y la finalidad que se persigue”.

A la hora de esclarecer el significado de igualdad y desigualdad, es necesario reflexionar sobre lo que significa trato igual y trato diferente, siempre en el ámbito de la igualdad donde se aplica la ley. La complejidad del segundo de estos términos hace necesario explicarlos por separado. Desde un punto de vista legal, la igualdad de trato significa seguir a Vivanco y garantizar la igualdad de trato legal de dos o más casos. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta “igualdad de condiciones, para ser consideradas pertinentes deben establecerse las mismas consecuencias jurídicas”. Ahora, con base en la teoría de la justicia y de acuerdo a lo que Bobbio llama el "principio de la justicia", elige "de cada uno según su capacidad", "de cada uno según sus necesidades", "de cada uno según sus necesidades fuerza". Dar a todos por igual, esta última debe elegirse de modo que tratar por igual implique otorgar a todos iguales derechos.

La diferencia en la igualdad donde se aplica la ley es que los jueces tienen que aplicar reglas diferentes en casos que no son desiguales. Puede verse que es irrelevante si la aplicación de diferentes reglas da como resultado la misma decisión o una diferente. Ello porque el contenido de la sentencia, que según Kelsen es la norma individual contenida en la sentencia, puede o no ser el mismo en el caso comparado, según lo que el ordenamiento jurídico haya determinado al efecto.

A veces, en efecto, los casos desiguales deben ser tratados de manera diferente (por ejemplo, adultos y menores en términos de derechos de voto), mientras que en otros casos deben ser tratados por igual (por ejemplo, narcotraficantes y ladrones en términos de período de gracia), si las normas aplicables en estos casos son consistentes durante ese período. Es importante señalar que las mismas decisiones no se toman porque los elementos sean los mismos, sino porque se regulan de la misma manera. Por tanto, en este caso, no hay igual aplicación de la ley, por lo que no hay vulneración. En el mismo sentido, explicó Brieskorn, no se quebranta la igualdad si en los casos reconocidos como desiguales se aplican las mismas consecuencias jurídicas, por lo que el hurto y el hurto agravado pueden estar cubiertos por un período de hasta tres años en cada caso.

#### ***2.3.10. La igualdad y la diferenciación***

García Toma (1999) Innegablemente, la igualdad tiene su base humana, es decir, que todos los hombres comparten la misma condición humana (hombres libres y racionales). Pero esta igualdad no tiene nada que ver con lo que todos llaman "accidente". Entonces, todos son esencialmente iguales pero difieren en "accidente". Se refieren a características físicas y psicológicas. El conocimiento concreto y específico y la sociedad, sin cambiar su esencia, se agrupan y forman sus condiciones personales, únicas e incommunicables. Por lo tanto, la afirmación de que las personas son a la vez iguales y diferentes no es deseable. No hay duda de que cada uno tiene su propia realidad físico-psicológica-intelectual-social. En este sentido, se les puede llamar inteligencia, talento, carácter, temperamento, personalidad, sensibilidad, etc.



Bernal Pulido (2010), Si establece que el deber de igualdad de trato está contenido en cuatro mandatos constitucionales: (ii) permitir el trato diferenciado para beneficiarios cuyas circunstancias no tengan factores comunes, el mandato para beneficiarios cuyas diferencias sean más importantes (igualdad de trato a pesar de las diferencias); (iv) el poder de tratar de manera diferente a los beneficiarios que también se encuentran en posiciones parcialmente similares y parcialmente diferentes, priorizando las diferencias que lo mismo (aunque sea un trato igual pero diferente). Por otra parte, se constató que las tareas antes mencionadas, a pesar de las ventajas de la clasificación anterior, no incluían garantías para promover la igualdad de los grupos discriminados y marginados, así como protección especial para las personas que recibían protección física especial por razones psicológicas o económicas, en desventaja frente a los demás; después de todo, estas son clasificaciones que merecen un mayor análisis a los efectos de nuestro artículo.

### ***2.3.11. Igualdad y la discriminación***

Discriminación significa adoptar una actitud o acción parcial, parcial e injusta o marcar una diferencia que, en última instancia, es adversa para algo o alguien. Quizás de manera más sucinta, la discriminación es la práctica de un trato desigual inaceptable. La connotación despectiva de la palabra hoy tiene una dimensión internacional, y palabras similares se utilizan en todas partes para expresar diferencias injustas en el trato legal, social y económico entre personas, por lo tanto, trato diferente, arbitrario, injusto y dañino de ciertos individuos o grupos.

El artículo 1º.1 de la CADH, la define: “Toda discriminación, exclusión, restricción o preferencia fundada en motivos especiales tales como raza, color, sexo , idioma, religión, etc”, significado político o de otro tipo, origen nacional o social y finalidad o resultado La

definición de Bayefski citada por Valdivia (2015) tiene tres elementos: a) el trato debe ser irrazonablemente diferente b) tener un efecto adverso a la igualdad , aunque no se requiere intención discriminatoria y c) existen categorías prohibidas de discriminación con posibilidad de ampliación, pues no hay lista estricta al respecto, ya que la mayoría de los documentos internacionales son otorgados por tribunales y humanos especializados, las instituciones de derechos humanos tienen cierta discrecionalidad para determinar qué criterios constituyen o no sospecha de discriminación.

Se prohíbe la discriminación basada en “motivos prohibidos”, lo que significa que la protección especial tiene por objeto prevenir las diferencias que existen en la sociedad basadas en un especial odio al ordenamiento jurídico y relacionadas con condiciones que pueden considerarse inherentes. La discriminación es, en definitiva, una forma especial de distinción caracterizada por el hecho de que se otorga en función de un conjunto de características innatas o circunstancias sociales de una persona, no relacionadas con el mérito o la capacidad personal.

En tanto la discriminación es antisocial, inhumana y odiosa; la diferenciación es dividir a las personas según sus méritos o esfuerzos y debemos tratarlos mejor. También se pueden distinguir aquellos con limitaciones, es decir, trato preferencial, que puede ser físico o social y cuyo apoyo no discrimine a los demás y que estas diferencias sean razonables y cuando sea necesario.

Se evidencia la existencia de dos tipos de discriminación directa e indirecta.

Según el TC, la directa ocurre cuando la conducta del empleador hace una diferencia por razones inconstitucionales y en tales casos el efecto de la intervención y persecución

debe basarse en un proceso y decisión judicial que adolece de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, no es una acción objetiva y proporcionada motivos razonables de discriminación por motivos prohibidos donde las leyes, políticas y prácticas del empleador excluyen, desalientan o favorecen claramente a ciertos empleados en función de sus características, independientemente de sus calificaciones y expertis en trabajo. Es directa es cuando una persona o grupo de personas es objeto de discriminación y prejuicio en base a categorías cuestionables y se establece claramente como la base de la diferencia.

La discriminación indirecta, personifica una acción neutra y no representa formalmente una discriminación en su configuración, pero aún tiene un efecto discriminatorio. Pues bien, la discriminación indirecta a tenor del Tribunal Constitucional – en adelante TC- es cuando el empleador actúa sobre la base de una libertad de acción aparentemente caprichosa incluida en la “Constitución”, cuyo objeto y consecuencias son esencialmente discriminatorios contra una persona o más trabajadores. Esta discriminación ocurre cuando algunas leyes, reglamentos, políticas y acciones del empleador que parecen ser objetivas dañan desproporcionadamente a los empleados sin motivo; es decir, si la aplicación de una razón válida o neutra afectaría negativa y desproporcionadamente a un grupo social en comparación con otro grupo social, si la razón no está suficientemente justificada. En esta forma de discriminación, la discriminación que parece ser neutral y tiene un efecto nocivo y desproporcionado en integrantes de un grupo o colectivo protegido por las leyes contra la discriminación también se denomina discriminación de impacto.

### ***2.3.12. Test de Igualdad***

Si una norma encaja discriminación en algunos sujetos o beneficiarios, dicho trato tiene que estar justificado, pues esta no puede tomar una posición o estándar discriminatorio,

por lo que se deben observar ciertas medidas o subprincipios para pasar la prueba de igualdad, estos son:

a) Los subprincipios de aplicabilidad o pertinencia, primero se debe examinar el objeto de la medida y luego si tiene trascendencia constitucional y social, por lo que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser adecuada o puede un fin constitucionalmente legítimo, es decir, una medida debe ser lícita o consistente con un propósito legítimo para protegerla, ya que la imposición de trato desigual promueve un propósito constitucionalmente legítimo, pero bajo escrutinio, una medida tomada por la legislatura independientemente de la finalidad que pretende proteger no estará sujeta a tal contexto de restricción

b) El principio secundario de necesidad, debe comprobarse la proporcionalidad de la medida en relación con otras medidas igualmente eficaces, ya que se trata de la utilización de medios alternativos. Las medidas adoptadas y dónde se analizan porque, por un lado, la igual o mayor aplicabilidad de los medios alternativos y, por otro lado, su menor grado de intervención, es decir, injerencia en los derechos fundamentales, no debe existir otro medio alternativo equivalente.

c) El subprincipio de proporcionalidad, que sería la ponderación de los dos principios pertinentes, dado que la vulneración de los derechos fundamentales debe ser legítima, el fin legítimo de tal intervención debe corresponder al menos al grado de artificialidad de los actos jurídicos. derechos fundamentales. En otras palabras, la proporcionalidad en sentido estricto requiere una comparación de dos factores o intensidades: 1) el logro del objetivo de la medida legislativa diferenciada y 2) el

efecto de los derechos fundamentales relevantes, así, como se mencionó anteriormente, el primero de ellos debe ser al menos igual al segundo. Finalmente, otro parámetro en la prueba de igualdad, incluyendo el “respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores”, porque la adopción de estatutos especiales no significa que se limiten los derechos fundamentales expresados por el bloque constitucional y, por tanto, los derechos de los trabajadores afectado.

### ***2.3.13. Discriminación a la inversa***

Por el contrario, se viola la igualdad cuando dos elementos iguales son tratados de manera diferente y dos elementos desiguales son tratados de igual manera. Entonces, si no hay elementos comparables en la situación, la igualdad no está involucrada. Favorecer desproporcionadamente más a determinados individuos de determinados grupos sociales que a otros, al tiempo que se busca compensar y contrarrestar la marginación o exclusión injusta de quienes se benefician de la discriminación inversa. La discriminación inversa puede definirse como el reconocimiento de ciertas medidas por normas nacionales e internacionales que exigen un trato desigual favorable a quienes son discriminados por razones económicas o por razón de nacionalidad o raza, género o discapacidad física.

Las medidas tomadas de acuerdo con este principio tienen como objetivo promover la participación de los grupos sociales vulnerables. Estas medidas también incluyen la igualdad de educación, empleo, cargos políticos, etc. y en concluyente a todas las aristas: social, política, económica y cultural.

La caución de discriminación inversa enfatiza la voluntad de alcanzar la verdadera igualdad entre personas y grupos sociales y de superar la noción negativa del igual goce de la libertad, que es sólo formal, ya que esta concepción debe preservar las diferencias reales existentes, siempre en detrimento de los intereses más débiles.

Reconocer la discriminación inversa como una posibilidad significa, entre otras cosas, que la implementación de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades puede contribuir a clarificar actitudes al respecto. Respetar su instrumentalidad evita uno de los errores más comunes, según el cual oponerse a la discriminación inversa es oponerse a políticas que promuevan la igualdad. Además, cabe señalar que la discriminación inversa tiene al menos dos características que la distinguen de otras posibles acciones positivas: una, como señala Ruiz (1994), es su ubicación en el contexto de una desventaja específica, y la otra es su costo para una medida utilizada por una persona discriminada. Por otro lado, la acción afirmativa tradicional involucra medidas presupuestarias, cuyos costos se distribuyen a su vez proporcional o gradualmente entre todos los ciudadanos en el proceso de redistribución de la riqueza.

#### ***2.3.14. Antinomias jurisprudenciales***

Son un conflicto entre normas, producto de una interpretación ya realizada. La antinomia existente entre Sentencias de la Sala Constitucional y Social Permanente y el Acuerdo Plenario 4-2016/C1J-116, debe solucionarse sobre la base de tres criterios: (i) la especificidad -criterio cualitativo relacionado con la rama jurídica de la norma jurídica objeto de la revisión-, (ii) el momento del pronunciamiento de la sentencia o decisión, que

el Tribunal Supremo opone al tribunal - (iii) el criterio de resolución de normas técnicas de derecho penal conflictivas - normas jurídicas específicas caracterizadas por el derecho penal.

Según la Apelación 1915-2017, Lima, las antinomias también son normativas, esto por la existencia de dos normas vigentes que tienen el mismo fin y determinan soluciones incompatibles entre sí, ocasionando que la observancia o ejecución de una de ellas sufre la violación de la otra, pues en simultaneo no es realizable. Adoleciendo de un síndrome de incompatibilidad entre sí.

Según Vásquez (2020), acorde con el DRAE (2018) “antinomia “es definida como la “contradicción entre dos preceptos legales” (párr. 1). Además, la Corte Constitucional de Colombia considera antinomia constitucional como “una situación en la que dos normas mutuamente incompatibles pertenecen al mismo ordenamiento jurídico y tienen el mismo campo de acción”.

Las paradojas no están permitidas en los ordenamientos jurídicos, porque “el ordenamiento jurídico crea un sistema, porque en él no pueden coexistir normas incompatibles. Aquí, “institución” equivale a la vigencia de un principio que excluye la incompatibilidad de las normas. Esta pregunta ha establecido criterios válidos para resolver controversias, entre los que se pueden destacar los siguientes puntos: (a) cronológico, (b) rango y (c) profesional. En el primer caso “la última norma es superior a la primera”, en el segundo “la norma superior prevalece sobre la inferior” y en el tercero “la norma específica prevalece sobre la norma general”. Pero lo que en realidad sucede es que se dictan leyes, resoluciones, precedentes, sin un análisis previo y exhaustivo de la base constitucional de las normas que las vulneran. Incluso contra estos.

La jurisprudencia se ha considerado a través de los tiempos como un medio para interpretar las leyes y por ende el antídoto para resolver.

Surge una antinomia cuando dos disposiciones confrontan una misma situación de hecho con consecuencias jurídicas diferentes e incompatibles. La actividad legislativa es controvertida porque, como se mencionó anteriormente, es prácticamente imposible para los legisladores verificar todas las regulaciones existentes en países con una tradición germánica romana para asegurarse de que las nuevas regulaciones que pretenden emitir no entren en conflicto con las regulaciones existentes. Incluso si intenta hacerlo, en realidad le resulta imposible tener en cuenta todos los supuestos fácticos sobre la aplicación de las diversas normas, lo que en última instancia puede dar lugar a contradicciones. En esa medida, la doctrina afirma que “la autonomía es una consecuencia natural de la dinámica del ordenamiento legal porque “el cuerpo de normas que llamamos derecho positivo es una variedad de intereses e ideologías” (Prieto, 2002, p.97).

Se desprende que la autorregulación acompaña a la actividad legislativa, es decir, se produce tan pronto como se promulga una determinada norma y el intérprete demuestra que es incompatible con otra norma igualmente válida. Por ello, los legisladores incluyen fórmulas absolutas en el cuerpo legislativo, según las cuales unas leyes prevalecerán sobre otras -aunque se aprueben en el futuro y se desconozca su contenido-, aunque está en nuestro ordenamiento jurídico. En muchos casos, el intérprete es la autoridad jurisdiccional responsable de decidir qué norma de conflicto de leyes tiene prioridad sobre la base de los principios legales de resolución de conflictos. Ahora bien, como se mencionó en la sección anterior, la negativa implícita enfrenta al intérprete con una contradicción que necesita ser



resuelta. Ante esta contradicción, el traductor debe elegir una norma en conflicto sobre la otra.

### ***2.3.15. Criterios de solución de las antinomias jurisprudenciales***

En la Casación 1672-2017, Puno; se evidencia a partir de las antinomias jurisprudenciales:

La inconsistencia del fallo de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Sociales 4-2016/C1J-116, debe ser resuelta conforme a tres criterios: (i) Profesional - criterio cualitativo relacionado con el sector jurídico que implementa la ley en cuestión de reglas - ( ii) la sentencia impugnada o decisión del Tribunal Supremo al momento de su anuncio -el criterio de la temporalidad- y (iii) los métodos de resolución de conflictos de normas de derecho penal -específicos de las normas jurídicas, generalmente el Derecho Penal.

El sentenciado, Julio César Pineda Calsín, interpuso recurso de casación por violación de derecho sustantivo y desviación de la jurisprudencia, contra la decisión del tribunal de dejar sin efecto la sentencia de primera instancia.

En sentencia de 1ra instancia de julio de 2014, se estableció que el inciso 2 del artículo 22, no era aplicable al contar con responsabilidad restringida, conllevando que Pineda Kalsin fuera condenado por el delito de violación sexual a cuatro años de prisión efectiva convertida a 200 días de trabajo forzado, imponiéndosele tratamiento terapéutico y el pago de una multa de S/ 2,000 soles; se basó en la limitación de la responsabilidad.

En el recurso de apelación introducido por el Ministerio Público, la SPCSJ Puno confirmó la sentencia de primera instancia y elevó los autos a la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema – en adelante SCSCS respecto de la inaplicación del artículo 22 del Código Penal; evidenciándose que la sala no aprobó la inaplicación del art. 22 del CP, programó nueva audiencia y le impuso pena más gravosa, 6 años de pena privativa de libertad efectiva.

El agente casa la sentencia, donde se dilucidó “causales de vulneración de precepto penal material y de apartamiento de doctrina jurisprudencial: artículo 429, numerales 3 y 5 del CPP y lo concerniente a la aplicación o no del artículo 22 del Código Penal en el delito sub-materia” (Casación 1672-2017).

Se realizó audiencia, en la cual no se debatieron los hechos probados, se refirió la pena entre 6 y 8 años. Se sostuvo que en primera instancia la pena se disminuyó por minoría relativa de edad y ebriedad relativa, inaplicó el segundo párrafo del art. 22 del CP; no obstante, la Sala Constitucional la desaprobó, incluso rechazó la aplicación de los arts. 20 inciso 1 y 21 del Código Penal; disponiendo seis años de privación de libertad.

La resolución deja constancia de las antinomias existentes en la interpretación de la Sala, enfatiza que las Ejecutorias de las Consultas número 1260-2011/Junín; 210-2012/Cajamarca, sostenían la vulneración a la igualdad ante la ley, aprobándose la consulta, no obstante, en este caso, la SCPCS, en decisión fraccionada (cuatro votos contra tres votos), expuso lo contrario.

Por otro lado, las Salas Penales de la CS el 17.10.2017, publicaron el Acuerdo Plenario n.º 4-2016/CIJ-116, como principios jurídicos vinculantes para los jueces penales de la República, las disposiciones excluyentes del artículo 22º del CP, son inconstitucionales y los jueces penales ordinarios no deben aplicarlas (publicada sentencia posterior y antes de la sentencia de la sesión de juicio, que es objeto de la apelación).

Al respecto, la cuarta causal desarrolla claramente tres criterios: El principio de igualdad reconocido en el artículo 2º de la Carta Suprema del Perú: (i) es el derecho subjetivo de las personas a la igualdad de trato, (ii) permite la inclusión de diferentes elementos legalmente significativos si se proporcionan razones objetivamente válidas basadas en estándares generalmente aceptados o juicios de valor y las consecuencias legales de estas diferencias son proporcionales al propósito declarado, como evitar una carga excesiva o resultados desproporcionados, (iii) es necesario, por un lado, que las disposiciones pertinentes impongan, directa o indirectamente, un trato diferente a grupos o grupos de personas, y, por otro lado, que las situaciones subjetivas que buscan comparar son de hecho homogéneos o comparables, es decir, las comparaciones no son arbitrarias o caprichosas.

Dichos méritos exigen: A. En el ámbito del derecho penal constitucional, en cuanto vincula el principio de igualdad con la categoría de delitos dolosos y culposos (más precisamente imputables), en caso de conflicto de normas (artículo 139, inciso 11 de la Constitución) -aun tratándose de sentencias judiciales-, los criterios de solución técnica deben ser los mismos, pues son lineamientos jurídicos de debe aplicar la definición de contradicciones normativas - , artículo 4 - plenaria 4-2016/CIJ-116 para reconocer lineamientos más favorables al imputado sin afectar la ratificación. Se anuló la sentencia y se consideró procedente el recurso de casación en relación con la violación de normas

jurídicas sustantivas y el alejamiento de la jurisprudencia propuesta por el imputado Julio César Pineda Calcin.

#### ***2.3.16. Criterios de solución de las antinomias normativas***

- Principio de jerarquía.- El principio de jerarquía es consecuencia del hecho de que el ordenamiento jurídico es una estructura jerárquica. Este principio significa, que los objetivos más altos son preferibles a los objetivos más bajos. La estructura gradual del ordenamiento jurídico, está directamente relacionada con los principios de creación y aplicación del derecho. Por lo tanto, la especificación creada no puede entrar en conflicto con la aplicación que la desarrolló, si hay un conflicto entre las especificaciones en dos niveles de especificación diferentes, la especificación más alta tiene prioridad sobre la especificación más baja.
  
- Principio de competencia.- Los ordenamientos jurídicos, especialmente las constituciones, determinan ciertas materias que deben ser reguladas por algún marco legal (reserva normativa), si existe una contradicción entre dos tipos diferentes de normas jurídicas, de acuerdo con lo señalado, se trata de una norma con posibilidad de regular el caso, es decir, una norma sobre la cual se funda la reserva normativa -incluida en la jerarquía de las normas jurídicas, la tercera norma sobre especificaciones en conflicto - autoridad para regular la situación.
  
- Principio de especialidad .- Significa que cuando dos reglas entran en conflicto, la regla específica debe prevalecer sobre la regla general. Es claro que el principio de especificidad se refiere al nivel de resolución de las contradicciones normativas, en caso contrario, los conflictos se resolverán aplicando principios jerárquicos sin utilizar principios específicos. La dificultad de este principio es determinar cuál es la norma especial, porque ninguna norma jurídica puede considerarse especial en sí misma, sino que su especificidad debe determinarse en relación con la norma a la que se opone y los hechos deben ser normativos. De hecho, incluso dentro de un mismo

organismo regulador pueden existir normas que se consideren otras normas generales que sean específicas del mismo organismo regulador.

- Principio cronológico.- La última norma es superior a la primera norma y en base a la lógica básica, la adopción de la nueva norma por parte del legislador es una modificación de la norma anterior y es superior a ella. Es ilógico pensar que las nuevas reglas no se pueden aplicar porque entran en conflicto con las reglas anteriores. Esto está directamente relacionado con la invalidez de la regla, ya que cuando se publica la siguiente regla entra en conflicto con la anterior, lo que se denomina invalidez, similar al principio de rectificación, el criterio de temporalidad también se refiere a la yuxtaposición de dos normas en el mismo nivel que son capaces de regular el caso.

## **2.4. Bases conceptuales**

### **a) Responsabilidad Restringida por Edad:**

Es la disminución prudencial de la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. El fundamento de la responsabilidad restringida, se dirige a los agentes que cometen delitos y a la fecha de comisión tienen entre 18 y 21 años, no habiendo alcanzado la madurez, por lo cual no se les considera titulares de una capacidad plena para actuar culpablemente, pues su proceso de madurez no ha terminado.

Asimismo, en el caso de la edad avanzada, a partir de los 65 años, se fundamenta en que el agente expresa un período de decadencia, de disminución de las actividades vitales, que desemboca en una etapa de degeneración que afecta a las facultades vitales, por lo que la capacidad de culpabilidad debe ser considerada como limitada. (art. 22 del Código Penal)

### **b) Antinomias jurisprudenciales:**

Son un conflicto entre normas, producto de una interpretación ya realizada. La antinomia existente entre las Sentencia de la Sala Constitucional y Social Permanente y la Sala Penal - Acuerdo Plenario 4-2016/C1J-116, debe resolverse en función a tres criterios: (i) especialidad –criterio cualitativo vinculado a la rama del derecho en la que se inserta el precepto legal examinado–, (ii) momento de expedición de las sentencias o resoluciones del Tribunal Supremo en oposición –criterio de temporalidad–, y (iii) técnica de resolución de conflictos normativos en el Derecho penal –regla jurídica específica, propia del derecho penal.

**c) Derecho a la igualdad ante la ley:**

Es un principio - derecho humano y constitucional, que garantiza que todos somos iguales ante la ley, no existiendo discriminación alguna entre las personas, es decir, lo que beneficia a uno, beneficia a todos en iguales condiciones. No puede beneficiarse a alguien y a otro no, pues eso acarrearía tratos discriminatorios. En derecho penal, implica que todos tienen igual trato ante la ley; es decir, la ley no hace distinciones en razón de las personas; cualquier diferencia debe ser objetiva y fundamentada.

**Tabla 1.** *Categorización de Variables*

<b>Variables</b>	<b>Definición de la Variable</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Instrumento</b>
<b>Sí prevalece el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad sin exceptuar a agentes de algunos delitos</b>	Es un principio - derecho humano y constitucional que garantiza que todos somos iguales ante la ley, no existiendo discriminación alguna entre las personas, es decir, lo que beneficia a uno, beneficia a todos en iguales condiciones.	Legal	1. Legislación nacional 2. Legislación comparada 3. Doctrina Nacional 4. Doctrina Comparada 5. Jurisprudencia internacional 6. Jurisprudencia Constitucional 7. Jurisprudencia Penal	Análisis documental  Entrevista
<b>Entonces se soluciona la antinomia jurídica entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema.</b>	Son un conflicto entre normas, producto de una interpretación ya realizada. Existe antinomia entre las Sentencia de la Sala Constitucional y Social Permanente y el Acuerdo Plenario 4-2016/C1J-116	Legal	1. Legislación nacional 2. Legislación comparada 3. Doctrina Nacional 4. Doctrina Comparada 5. Jurisprudencia internacional 6. Jurisprudencia Constitucional 7. Jurisprudencia Penal	Análisis documental  Entrevista

### **3. Capítulo III. Diseño Metodológico**

#### **3.1. Diseño de contrastación de hipótesis**

En la investigación cualitativa, la formulación de la hipótesis es opcional (Hernández -Sampieri y Mendoza, 2018); se postula como hipótesis:

“Sí prevalece el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad sin exceptuar a agentes de algunos delitos, entonces se soluciona la antinomia jurídica entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema”.

El diseño de investigación utilizado en la presente investigación fue teoría fundamentada. A fin de contrastar la información, se analizó la responsabilidad restringida establecida en el art. 22 del Código Penal y las limitaciones a su aplicación en delitos preestablecidos, utilizando la legislación, la doctrina y la jurisprudencia; lo cual nos permitió establecer cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la CS, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del CP; se estudió la responsabilidad restringida establecida en el art. 22 del CP; se analizó las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la CS, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del CP y examinar el derecho a la igualdad ante la ley establecido en la Carta Suprema y en los tratados internacionales. Así también, se realizó una entrevista a fin de conocer la percepción de Fiscales Provinciales y Jueces Especializados Penales del Distrito Fiscal y Judicial de Lambayeque.



La investigación es teórica a nivel descriptivo. Hernández-Sampieri (2018), para este tipo de estudio, sostiene que el diseño es el cualitativo. Se estudió la responsabilidad restringida establecida en el art. 22 del Código Penal; se analizó las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la CS, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del CP; se analizó el derecho a la igualdad ante la ley establecido en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales.

### **3.2. Población y Muestra.**

Se ejecutó con un universo finito se tomó a los Fiscales Provinciales Penales y Jueces Especializados Penales del Distrito Fiscal y Judicial de Lambayeque; siendo que la muestra será determinada por conveniencia, considerando 10 Fiscales Provinciales y 10 magistrados especializados en derecho penal, constituyendo cada fiscal y cada juez entrevistado una unidad de análisis.

Asimismo, se analizó el X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias - Acuerdo Plenario N.º 4-2016/CIJ-116 de 17 de octubre de 2017, el I Pleno jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial – Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2018/CIJ-433; Recurso de Casación 250-2018/UCAYALI de 22 de noviembre de 2018; 214-2018/EL SANTA; 1672-2017/PUNO y la Sentencia de Casación N.º 133-2017 Lambayeque de 19 de junio de 2019; 291-2019 Ayacucho; 588-2019/Cusco de 24 de mayo de 2021; y la Sentencia en Consulta .º 1260-2011, de 7 de junio de 2011, y 210-2012, de 27 de abril de 2012, emitidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia Consultas, las cuales han generado antinomias jurisprudenciales.

### **3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.**

Las técnicas utilizadas fueron el fichaje, análisis documental y entrevista, cuyos instrumentos detallamos a continuación:

- a) Fichas bibliográficas: se utilizarán para citar los conceptos referidos al derecho de presunción de inocencia en la legislación y doctrina a nivel nacional e internacional, utilizando las normas APA 7ma edición.
- b) b) Análisis documental al X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias - Acuerdo Plenario N.º 4-2016/CIJ-116 de 17 de octubre de 2017, el I Pleno jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial – Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2018/CIJ-433; Recurso de Casación 250-2018/UCAYALI de 22 de noviembre de 2018; 214-2018/EL SANTA; 1672-2017/PUNO y la Sentencia de Casación N.º 133-2017 Lambayeque de 19 de junio de 2019; 291-2019 Ayacucho; 588-2019/Cusco de 24 de mayo de 2021; y la Sentencia en Consulta 1260-2011, de 7 de junio de 2011, y 210-2012, de 27 de abril de 2012, emitidas por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia; las cuales han generado antinomias jurisprudenciales.
- c) Guía de entrevista: Este instrumento nos permitirá conocer la percepción de los Fiscales Provinciales y Jueces especializados Penales respecto a cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del CP.

#### **4. Capítulo IV. Resultados.**

##### **4.1. Respecto al objetivo específico 1**

##### **1. Estudiar la responsabilidad restringida establecida en el art. 22 del Código Penal.**

El progreso de la personalidad se deriva en la dignidad ontológica, por el hecho de ser humano y moral a partir de la ejecución de actos libres que lo hacen asumir la responsabilidad de su accionar, frente a la sociedad.

La persona capaz es responsable penalmente, es así que la culpabilidad que asumirá será acorde a su individualidad y sociabilidad. La culpabilidad se relaciona con la capacidad de conocer y comprender las normas de convivencia, aprendidas y tipificadas en las leyes; así como el respeto a los roles que tiene atribuidos.

Al respecto, en cuanto esté en el parámetro etareo de mayores de dieciocho y menores de veintiún años de edad, puede ser sujeto a atenuación de la punibilidad, por el estado de transición en el que se encuentra, de la inmadurez a la madurez, del desconocimiento a la comprensión.

La falta de toma de conciencia de las personas en crecimiento es la que ha obligado al legislador a distinguir un grupo de delincuentes jóvenes a fin de aplicarles un tratamiento especial.

Del fichaje se advierte, que Villa Stein (2008) cita “prohibir mediante una ley la disminución de la pena sobre la base del delito cometido significaría valorar el grado de antijuridicidad de la conducta con un elemento que no es propio para hacerlo” (p.501).

Hurtado (2005) precisa “la culpabilidad es el reclamo de la conducta no es un juicio de desaprobación moral depende del fondo. Es necesario, comprobar si el comportamiento del agente merece o no ser desaprobado también por la moral” (p. 605).

Según Muñoz y García (2004)

“Existen determinados casos en los que el autor de un hecho típico y antijurídico queda exento de responsabilidad penal, ello demuestra que, junto a la tipicidad y antijurídica debe darse una tercera categoría en la teoría general del delito, cuya presencia es necesaria para imponer una pena. Esta categoría es la culpabilidad una categoría cuya función consiste, precisamente en acoger aquellos elementos referidos al autor del delito que, sin pertenecer al tipo ni a la antijurídica son también necesario para la imposición de una pena” (p. 527).

Para atribuir responsabilidad restringida, tenemos que llegar al estadio de la culpabilidad, pues aquí recién se puede responsabilizar al agente e imponerle una sanción, la cual será graduada conforme a su responsabilidad.

La culpabilidad es obligación forzosa para poder establecer la pena a asignar, previa verificación de los elementos de la antijuridicidad para el requerimiento de la sanción al agente.

Es necesario analizar las tipologías particulares del autor pues mediante este juicio particular se puede atribuir “la realización del hecho ilícito. La responsabilidad penal dependerá que el autor sea responsable penalmente” (Rodríguez, 2008 y Peña, 2011).

De las entrevistas se evidencia:

**Tabla 2.** *De las entrevistas de Fiscales Penales*

<b>Fiscales penales</b>	<b>¿En qué se sustenta la responsabilidad restringida por la edad?</b>	<b>Categorización</b>
<b>Fiscal 1</b>	En el grado de madurez psicológica de la persona, sea por entrar a la mayoría de edad, o por su avanzada edad	
<b>Fiscal 2 y 6</b>	Se aplica por la edad de sujeto activo al momento de cometer el hecho punible, el cual cuenta con una edad mayor de 18 y menor de 21, así como mayor de 65 años	
<b>Fiscal 3, 7 y 10</b>	Por el reproche o exigencia del conocimiento de la norma en un menor de edad y en caso de adulto mayor por sus condiciones de salud ante su avanza edad	
<b>Fiscal 4 y 8</b>	En falta de un desarrollo psicosocial de la personalidad para comprender la delictuosidad de una conducta	
<b>Fiscal 5 y 9</b>	Menor capacidad de comprender la norma penal	

**Tabla 3.** *De las entrevistas a Jueces Penales*

<b>Jueces penales</b>	<b>¿En qué se sustenta la responsabilidad restringida por la edad?</b>	<b>Categorización</b>
<b>Juez 1 y 9</b>	Se sustenta en la culpabilidad, e incide sobre la edad del agente (de 18 a 21 o de mayores de 65 años).	
<b>Juez 2 y 7</b>	Inmadurez por la edad	
<b>Juez 3 y 10</b>	ART. 22 Código Penal.	
<b>Juez 4 y 6</b>	En la capacidad racional de autodeterminarse.	

---

<b>Juez 5</b>	Se sustenta en el aun incompleto desarrollo (mayor de 18 y menor de 21 años) o disminución (más de 65 años) de la culpabilidad.
<b>Juez 8</b>	La responsabilidad restringida por la edad se sustenta en un estado de inmadurez que aun presenta el sujeto activo, una vez adquirida la mayoría de edad - 18 años- hasta antes de los 21 años, puesto que la madurez plena se va adquiriendo de manera gradual, mientras que en el caso de los mayores de 65 años es por su naturaleza senil, que implica el deterioro progresivo de sus capacidades cognitivas.

---

Se advierte que es por el nivel de madurez psicológica de la persona, sea por su reciente inicio de la mayoría de edad o por su elevada edad. Las personas mayores de 18 años y menores de 21 años, se encuentran dentro de los parámetros de la responsabilidad restringida; de igual forma, los mayores de 65 años, siendo potestad de la judicatura realizar una reducción de su pena, basado en que la madurez plena, se lograría después de cumplir los 21 años y en el caso de adulto mayor por la decadencia y mengua de sus acciones vitales siendo colegible la minorización de su capacidad de comprensión; a la fecha es facultativa del juez, y no obligatoria (Acuerdo plenario 4/99).

La culpabilidad reprocha el accionar del agente contra del ordenamiento jurídico, pese a que su actuar debió ajustarse a derecho (Bramont, 2002) . “quien no es capaz, no puede ser declarado culpable y en consecuencia no es penalmente responsable, pese a la tipicidad y antijuridicidad” (Exp. 140095, 30 de setiembre de 1996).

Según Hurtado (2011), la comisión de un hecho ilícito no basta para que el sujeto sea culpable, pues éste debe reunir las condiciones mínimas (mentales y físicas) que le

permitan comprender plenamente la ilicitud de sus actos y que sus actos puedan ser ajustados para expresar el entendimiento.

La razón se basa en la "libertad individual, libre de todo constreñimiento biológico, psíquico o mental, para poder exigir a una persona que actúe de conformidad con un ordenamiento jurídico"; excluye de responsabilidad penal a las personas afectadas por motivos anormales. Individuo para situaciones específicas (Villavicencio, 2006). Para las minorías, se basa en criterios "biológicos, intelectuales y mixtos". Los estándares biológicos afirman que los menores no distinguen entre justo e injusto. El estándar de inteligencia se basa en la prueba de discriminación contra los sujetos, pero se cree que esto sería una presunción legítima porque la persona aún no ha alcanzado la madurez para actuar lícitamente.

En Perú, son menores de edad los menores de 18 años, encontrándose al menor de edad dentro del código de los niños y adolescentes (Villavicencio, 2006)

En la responsabilidad restringida, la minorización de la sanción se dará del mínimo hacia abajo, constatándose previamente una real disminución de la capacidad penal (Meini . 2014).

Al respecto, se debe dejar claro que no todas las personas alcanzan la madurez a la misma edad, porque es un proceso lento y diferente para cada persona; además, existe la posibilidad de castigos severos para los jóvenes mayores de 18 años y menores 21. Impacto negativo, que ha llevado a los legisladores a buscar alternativas para minorizar

la pena infra del mínimo legal, la misma lógica se aplica a las incapacidades existentes para las personas de 65 años o más.

A nivel sudamericano, el CP chileno, establece criterios de exención, pero no de reducción de responsabilidad. El CP boliviano (Código Penal) define la atribución parcial: “Artículo 18: Atribución parcial: si en el supuesto del artículo anterior no se excluye por completo la capacidad de entender o querer del agente, pero cuando se reduce significativamente, el juez reduce la pena conforme al artículo 39 o aplica los medios de seguridad más convenientes.”

El CP de Venezuela expresa “69. Artículo - atribución reducida. Si las condiciones mencionadas en los artículos 62 y 63 no excluyen por completo la capacidad de entender o de querer, pero la reducen significativamente, el juez puede reducir la pena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 o aplicar las disposiciones y medidas previstas en el artículo 120 y siempre se tiene en cuenta el grado de recuperación mental del agente”.

En Brazil, un simil a nuestra normatividad, se sustenta la edad avanzada, como causal de responsabilidad restringida, pero eleva la edad a 70 años; ello atendiendo a que después de haber alcanzado la madurez arriba a un periodo de declinación y desmedro de actividades vitales, menoscabando su capacidad de comprender, lo cual merma la culpabilidad (Hurtado, 2005)

En Centroamérica, el Código Penal mexicano: “Artículo 39: para los sujetos de inteligencia reducida, el juez tomará las medidas de tratamiento correspondientes en



forma de prisión o libertad vigilada, así como las condiciones para garantizar la protección social, teniendo en cuenta la peligrosidad, sólo se reducirá el sentido común de las personas mayores de 65 años y sujetos entre 18 y 20 años de edad, teniendo en cuenta el riesgo del sujeto y las necesidades surgidas durante el tratamiento".

Declaración de la CP de Costa Rica: "43. artículo (...) Una persona que, en el momento de la acción u omisión, simplemente no está completamente equipada para comprender la naturaleza ilegal de la acción o para tomar una decisión basada en este entendimiento. "

De igual forma, el Código Procesal Penal de Panamá permite una atribución reducida: "Artículo 25. Al momento de la acción u omisión, la persona que, por un cambio grave de conciencia, no sea plenamente capaz de comprender el carácter ilícito del hecho, es una conducta menos responsable", estableció como salvaguardia punitiva que "los enfermos mentales, drogadictos, alcohólicos y personas con responsabilidad limitada serían enviados a hospitales psiquiátricos o instituciones médicas especiales o educativas".

A nivel europeo, el CP Francés se establece en su art. 89º: "Al momento de cometer el hecho, el estado mental causado por la enfermedad ha sufrido cambios importantes, pero no se excluye la falta de tal estado mental y el hecho cometido debe rendir cuentas, pero la pena puede ser reducido."

El CP Alemán declaró: "El castigo puede mitigarse si, debido a las razones mencionadas en el artículo 20, el autor fue significativamente menos capaz de cometer el

acto o de comprender la injusticia del acto o de actuar con este entendimiento de conformidad con el artículo 49". Subsección 1°.

El CP italiano ofrece un modelo de imputación reducido y restringido por edad. “En consecuencia, existe una presunción absoluta de falta de competitividad para los menores de 14 años. Para los mayores de 14 y menores de 18, céntrese en la capacidad de comprender y querer. Si hay una atribución, se suaviza la oración correspondiente. Por supuesto, ninguna presunción excluye las medidas de seguridad (artículos 97 y 98 del CP). Por un lado, cuando se incluyó este número en el Código Penal, aparecieron diferentes formas de aplicación: la primera era facultativa, permitiendo a los jueces modificar la sentencia; el segundo fue requerido por conversión bajo la Ley; por otro lado, definieron que el número de reducciones aplicables está en gran parte relacionado con la capacidad del sujeto para comprender la ilegalidad de la acción y controlarla, ya que puede hacer que la persona pague más o menos de lo recomendado y dejando así pena reducida al juez- libertad de acción'.

España por su parte, “Las personas mayores de 18 años y menores de 21 años que hayan cometido hechos delictivos podrán estar sujetas a las disposiciones de la ley sobre responsabilidad penal de los menores en los casos de esta pena y violaciones” (artículo 69, Ley de Enjuiciamiento Criminal).

El sustento para responsabilizar al agente y determinarle una pena es la responsabilidad, verificando el cumplimiento de los elementos justos de la antijuricidad.

La culpa tiene un concepto psicológico; los juristas influenciados por el positivismo filosófico afirman que la culpa es una combinación psicológica que vincula al autor del delito a las consecuencias negativas del mismo. Según Von Lister: intencionalmente o con dolo, con negligencia, una persona que voluntariamente causa un daño indebido por negligencia o descuido, es culpable. Visión psicológica normativa según la cual un hecho punible debe realizarse en condiciones normales (no en estado de necesidad).

“Hablando de capacidad delictiva, debe considerarse un requisito previo para la culpabilidad. En cuanto al dolo y la culpa, se definen como expresiones de culpa” (Hurtado, 2005, p. 603).

La responsabilidad disminuida es parcialmente exigible porque el sujeto todavía puede entender la ilicitud de la conducta y, por lo tanto, es capaz de actuar en el entendimiento de que el sujeto es capaz de tomar decisiones que eviten el delito.

Las condiciones biopsicológicas serán hipótesis que reducen la atribución. Sus facultades mentales aquí deben ser normales y, por lo tanto, pueden inferirse. Las sanciones deben reducirse significativamente, teniendo en cuenta la reducción de responsabilidad.

A los jóvenes le asiste el beneficio de la responsabilidad limitada, los jueces podrán “reducir cautelosamente las penas aplicables a los mayores de 18 años pero menores de 21 y mayores de 65 (responsabilidad limitada por la edad). Al respecto, en 1999 la jurisdicción plena de Iquitos mostró que las atenuantes pueden aplicarse selectivamente y que la ley penal se aplica por debajo del mínimo legal” (Villavicencio, 2006). La

limitación de responsabilidad se basa en "la falta de madurez plena, que para algunas personas se alcanza después de los 18 años, mientras que para las personas mayores, a partir de los 65 años, disminuye con la edad y el envejecimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, la legislación cuenta con ciertas normas que determinan la etapa intermedia entre el término señalado en el Código Penal y el momento en que una persona es considerada adulta.

Hasta ahora, estas restricciones se han configurado en el artículo 22° del Código Penal, que prevé el período de 18 a 21 años. Las personas mayores de 18 años, estarán sujetas a las leyes penales normales en lugar de ser consideradas personas plenamente competentes.

Para la sentencia, el juez debe evaluar el caso en particular, para observar la existencia de atenuantes o agravantes, así como para establecer la sanción adecuada. De acuerdo al texto del artículo 45° de nuestro Código Penal, se establece que:

- a) si sólo concurren circunstancias atenuantes, la pena específica se determina en el tercio inferior;
- b) si concurren circunstancias agravantes y atenuantes, la pena específica se determina en el tercio medio, y
- c) Si sólo concurren circunstancias agravantes, la pena especial se establece sobre el tercio superior.

En caso, la responsabilidad del agente sea restringida por la edad y no existieren agravantes, la pena se determina por debajo del tercio inferior.

Cabe resaltar que el art. 10 del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala:

(...)

3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado.

Es así que la pena determinada para los jóvenes infractores, no solo debe ser determinada de forma restringida, sino que también las condiciones de su reclusión deben permitir que tenga una vida digna, lo cual a la fecha no ocurre en el Perú, pues ya se ha comprobado el hacinamiento penitenciario, declarándose el Estado de Cosas Inconstitucional, “respecto de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad en la calidad de su infraestructura, entre otros a nivel nacional, precisando que las alternativas de solución a los problemas de hacinamiento carcelario en el Perú exige el trabajo conjunto y coordinado del Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre otros, así como la participación de la sociedad en general”.

Al respecto, conviene precisar que si se impone pena a una persona que goza de responsabilidad restringida, en principio, debería encontrarse albergado en establecimientos que permitan su reeducación y reinserción a la sociedad; lo cual no ocurre.

Así también, a penas más severas, más tiempo están las personas en los establecimientos penitenciarios, generando cargas económicas al Estado e incrementando el hacinamiento ya existente.

Estos resultados se sustentan en Arana (2016), quien concluyó que la responsabilidad penal de los jóvenes mayores de 16 años es una medida indispensable para restringir el nivel de delincuencia, ya que el estado no ha realizado diversas políticas sociales para reducir este problema.

De igual forma, se sustentan en Córdoba (2014) quien concluyó que se considera las circunstancias en las que la pena puede ser reducida si la capacidad de comprensión y autodeterminación se ve afectada sin pérdida de responsabilidad.

Finalmente, se afianzan en Suárez y González (2012) Cuba, quien concluyó, que entre estas edades es que aún no han llegado a la madurez plena (psíquica), su capacidad de entendimiento no es basta como para autodeterminarse, en razón de lo cual se debe reducir a esa edad la aplicación restringida.

#### **4.2. Respecto al objetivo específico 2.**

##### **2. Analizar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal.**

A continuación se presentan los resultados de la revisión documental:

Sentencias de la Salas Penales que otorgan el beneficio de la responsabilidad restringida, inaplicando el segundo párrafo del art. 22 del CP que excluye algunos agentes:

- a) X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias - Acuerdo Plenario N.º 4-2016/CIJ-116 de 17 de octubre de 2017

Este pleno señala que la existencia de responsabilidad restringida abarca desde los 18 años la edad mínima para la capacidad de culpabilidad (artículo 20.2 del Código Penal), así también que “tenga más de dieciocho años y menos de veintiún años de edad, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la infracción operando una reducción proporcional de la pena del mínimo legal hacia abajo” (Villavicencio, 2006).

La igualdad, obliga a que no haya diferencia de trato legal no admitido constitucionalmente implicando que los magistrados tienen la potestad—y el deber—de emplear las normas constitucionales. “La disminución de la punibilidad está en función a la edad del agente cuando cometió el delito, para lo cual se fija un criterio objetivo: entre 18 y 21 años y más de 65 años de edad; segundo, que esta disminución de la punibilidad está residenciada en la capacidad penal como un elemento de la categoría culpabilidad; tercero, la referencia a delitos graves tiene como premisa, para la diferenciación, la entidad del injusto, esto es, la antijuridicidad penal de la conducta del agente, sin duda, una categoría del delito propia y distinta de la culpabilidad”.

Según la SALA PENAL.- Este acuerdo no puede transgredir el derecho a la igualdad, basándose en causas que no son las determinantes a la aplicación de responsabilidad restringida, cuyo criterio es la edad y no la diferenciación entre uno

u otro delito, en ese escenario corresponde señalar que en el caso del agente de TID, cuya responsabilidad calce en el parámetro etario establecido en el art. 22, puede alegar y ser pasible de determinación judicial de la pena, basado en responsabilidad restringida.

b) I Pleno jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial  
– Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2018/CIJ-433

Este pleno consideró como vinculante que la madurez de la persona es un asunto biopsicosocial definido por la ciencia en cada caso. Valorado normativamente por el art.22 del CP con una maduración normativa (dieciocho años de edad) y una psicológica (que determina la ciencia).

Este pleno señala que es factible la aplicación de responsabilidad restringida a todos los supuestos, pues no menciona limitaciones a algunos delitos, es más se afianza en la legalidad de la disminución a límites inferiores al mínimo legal.

Según la SALA PENAL, casa la sentencia de vista, que confirmó la de primera instancia y otorgó el beneficio de responsabilidad restringida a los agentes sin considerar el delito que hubieren cometido, lo cual se apega al criterio jurisprudencial de atender con igualdad a quienes por rango etario, puede asistírles la responsabilidad restringida, de acuerdo al Acuerdo Plenario N.º 4-2016/CIJ-116

c) Recurso de Casación 250-2018/UCAYALI de 22 de noviembre de 2018; 214-2018/EL SANTA.



Este recurso reitera la doctrina jurisprudencial recaída en la causa número 1672-2017, Puno y enfatiza la primacía del Acuerdo Plenario número 4-2016/CJ-116.

El numeral 2 de su segundo Fundamento pregona:

“Si bien es verdad que la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia emitió varias sentencias en vía de consulta, entre ellas la recaída en la Consulta número 19578-2016/El Santa, de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en sentido contrario, las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia profirieron el Acuerdo Plenario de las Salas de lo Penal de este Supremo Tribunal número 4-2016/CIJ-116, publicado el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, esta antinomia jurídica debe resolverse en función a tres criterios: (i) especialidad -criterio cualitativo vinculado a la rama del Derecho en la que se inserta el precepto legal examinado-; (ii) momento de expedición de las sentencias del Tribunal Supremo en oposición -criterio de temporalidad-; y, (iii) técnica de resolución de conflictos normativos, específicos del Derecho Penal, en el que se ubica el precepto examinado -regla jurídica específica, propia del Derecho penal.”

La citada resolución casa la sentencia de vista, que confirmó la de primera instancia que condenó a los imputados a 8 años y considerando la edad del agente, pese a que su delito fue el de robo agravado, decidieron imponer siete años de pena privativa de libertad. Es así que pese a no estar permitido en aquella época el hecho de otorgar el beneficio de responsabilidad restringida a estos agentes, finalmente los equiparo a los infractores de los delitos que, si lo permitían, lo cual se apega al criterio

jurisprudencial de atender con igualdad a quienes, por rango etario, puede asistirles la responsabilidad restringida.

d) Sentencia de Casación N.º 291-2019 Ayacucho

En los fundamentos de esta sentencia encontramos el desagregado del criterio doctrinario avalado por la Corte Suprema, el cual eleva (como debe ser), la prioridad “del principio constitucional de igualdad ante la ley, frente al criterio de gravedad abstracta por el tipo de delito cometido, lo cual inhibe la discriminación, que es la diferencia de trato de las personas en situaciones análogas básicamente similares y basadas en una característica identificable o estatus. Los criterios de determinación de la culpabilidad son personales; el menor juicio de reproche que merece el autor o partícipe de un delito que es aún joven adulto o ya es un adulto mayor”.

La citada resolución casa la sentencia de vista, que confirmo la de primera instancia.

e) Sentencia Casación N.º 588-2019/Cusco de 24 de mayo de 2021

Esta Casación constituye Doctrina jurisprudencial vinculante y precisa que:

“El artículo 22 del Código Penal consagra una causal de disminución de la punibilidad –no una circunstancia de atenuación privilegiada– que importa, en todos los casos, imponer una pena por debajo del mínimo legal, lo que es una consecuencia de su propia naturaleza jurídica, al ser intrínsecas al delito

desde la exclusión parcial de sus componentes o categorías sistemáticas –la imputabilidad en este caso y cuyo límite es la observancia de la proporcionalidad adecuada al caso.

(...) un aspecto vinculado a la antijuridicidad de la conducta no puede equipararse, desde el principio-derecho de igualdad y la justificación basada en la existencia de diferencias objetivas y razonables, a la culpabilidad del sujeto activo, a fin de excluir determinadas consecuencias en la punibilidad, a efectos de equipararlas, en función a determinados delitos –no a todos–, con las personas entre veintiún años a sesenta y cinco años de edad”.

Decisión de la Corte Suprema, que revoca a las sentencias emitidas por el Poder Judicial y apegándose al principio constitucional de igualdad, casó la sentencia y redujo la pena por el delito de robo agravado, sin hacer distinción entre el delito cometido por el agente.

f) Recurso Casación N°1672-2017/PUNO de 18 de octubre de 2018

La Decisión de la Sala Penal Permanente, que revoca las sentencias emitida por la primera instancia y apegándose al principio constitucional de igualdad, casó la sentencia y redujo la pena por el delito de robo agravado, sin hacer distinción entre el delito cometido por el agente, que en este caso fue violación sexual.

Esta Casación resulta ser la más importante, pues de su análisis se advierte que la Sala Constitucional Social y Permanente de la Corte Suprema, al ser consultada por las Salas Superiores, indicaba que no se debía inaplicar el segundo párrafo del artículo 22, esto es,

que no se debería aplicar el beneficio de responsabilidad restringida a los supuestos que la norma penal había determinado inaplicables.

Es una cuestionable decisión, pues el análisis constitucional, demandaría que a la luz del principio de igualdad, la Sala hubiere indicado inaplicable esta disposición.

g) Casación N°133-2017/Lambayeque de 19 de junio de 2019

Al igual que sus antecesoras, declara que el artículo 22° del Código Penal es inaplicable, no cumple con la garantía constitucional del principio de igualdad, "el límite de edad señalado en el artículo 22 inciso 1 es una circunstancia atenuante".

El agente manifestó que el fundamento de la demanda de casación es la inobservancia del principio de igualdad y la desviación de la práctica legal, en virtud del artículo 22 inciso 2 del Código Procesal Penal, no fue utilizado como un privilegio en la atenuación de la pena.

***Consultas absueltas por la Sala Constitucional de la CS que no otorgan el beneficio de la responsabilidad restringida, aplicando el segundo párrafo del art. 22 del CP que excluye algunos agentes:***

a) Consulta N° 11384-2015 Huancavelica de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia

Se atribuyó al procesado el delito contra la libertad sexual de menor de edad en grado de tentativa y actos contra el pudor en menores, evidenciándose como fundamento fuerza:

“(…) Resulta plenamente ajustado a derecho y conforme a la Constitución Política del Estado que la Ley establezca ciertas prohibiciones para el otorgamiento de beneficios penales; por ende, no puede interpretarse como inconstitucional, pues como se tiene expuesto, dicho precepto no hace otra cosa que establecer límites a este tipo de beneficios penales o penitenciarios”. (Fundamento Undécimo)

La presente sentencia afianza y clarifica la regla de exclusión de ciertos delitos del beneficio de graduación de pena establecida por el artículo 22° del Código Penal.

b) Consulta N° 1618-2016 Lima Norte

La decisión de inaplicación del art. 22° del CP se elevó a consulta, por cuanto la norma que otorga beneficios excluía a los agentes del delito de robo agravado.

El fundamento 2.2 cita:

“La autorización constitucional a los jueces para el ejercicio del control difuso, tiene límites bajo responsabilidad, no pudiendo ser ejercida en forma irrestricta ni vulnerando el ordenamiento jurídico y constitucional que justamente les corresponde preservar”.

Sostiene en sus argumentos la constitucionalidad de las normas y que en base a ellas el juez debe resolver para seguridad jurídica de las partes. El poder judicial, es limitado interpartes. Asimismo argumenta que la diferenciación no constituye discriminación, sustentando la validez y eficacia de la norma.

Desaprueba la consulta. Esta consulta contenía un criterio de aplicación de la restricción por edad previsto en el segundo párrafo del Artículo 22 del CP.

***Consultas absueltas por la Sala Constitucional de la CS que otorgan el beneficio de la responsabilidad restringida, aplicando el segundo párrafo del art. 22 del CP que excluye algunos agentes:***

- a) Consulta N.º 1260-2011, de 7 de junio de 2011 de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia

Se elevó en consulta la sentencia de fecha 18 de enero de dos mil once, por el delito de actos contra el pudor a menor de 14 años, seguida contra Taipe Carbajal consultando la inaplicación del segundo párrafo del artículo 22.

En esta sentencia, la Sala de Derecho Constitucional, consideró que se encontraba justificado el control difuso, caso contrario se realizaría un trato no justificado constitucionalmente, frente a personas que se encuentran en una situación particular. Así también cita el Acuerdo Plenario N.º 07-2007/CJ-116 de las Salas Penales, que refiere el uso de la proporcionalidad concreta y abstracta, de los usos y valores que la informan.

Esta Resolución aprueba la consulta efectuada mediante resolución de 18 de enero de 2011, en tanto declaró inaplicable el segundo párrafo del artículo 22 del CP.

- b) Consulta N.º 210-2012, de 27 de abril de 2012 de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia

Se evidencia que la citada consulta declara NULO el extremo que eleva la consulta, siendo esta información la única obrante en la página del Poder Judicial, fuente confiable de donde se han extraído las resoluciones analizadas en la presente investigación.

- c) Consulta N° 1618-2016 Lima Norte de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia

El imputado fue condenado por la comisión del delito de robo en la modalidad de tentativa, en agravio de un adolescente de 14 años.

El fundamento tercero de la Consulta sustentó:

“(…) la norma que prevé la reducción de la pena, en sí no es una norma universal e igualitaria para todos los supuestos de imputabilidad restringida, sino que, contiene distinciones al establecerla como ‘posibilidad’, lo cual significa que a todos los agentes con imputabilidad restringida no se les podrá reducir la pena, ello dependerá de las particularidades del agente y del caso, evaluadas y motivadas en la decisión del juez”. (3.5. del Fundamento Tercero)

Esta consulta contiene un criterio de aplicación de la restricción por edad previsto en el segundo párrafo del Artículo 22 del CP.

d) Consulta N.º 28311-2018 de 19 de marzo de 2021

El caso elevado a consulta es la inaplicación del art. 22 que restringe del beneficio de responsabilidad restringida al agente de tráfico ilícito de drogas; pues el JP Colegiado del Callao realizó control difuso; el cual fue aprobado en base al derecho a la igualdad y en pro de la rehabilitación y reeducación del agente (4 votos). Entre los argumentos se evidencia en base a la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de la norma legal inaplicada, señalando que el juez tiene la posibilidad de dar el beneficio, no la imposición.

Por otro lado, en minoría 3 jueces supremos, sostuvieron que se debe desaprobar la sentencia pues no se debe inaplicar la restricción, declarando nula la misma.

En ese sentido se advierte del criterio contradictorio en la misma sala.

A modo de resumen, se presentan las siguientes tablas:

**Tabla 4.**

<b>Sala Penal de la Corte Suprema</b>	<b>Decisión</b>
<b>X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias - Acuerdo Plenario N.º 4-2016/CIJ-116 de 17 de octubre de 2017</b>	CASAN. Cambian la decisión de la Sala de vista. En casación aplica el principio de igualdad y casa la sentencia
<b>I Pleno jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial – Sentencia</b>	CASAN La citada resolución casa la sentencia de vista, que confirmo



<b>Plenaria Casatoria N.º 1-2018/CIJ-433</b>	la de primera instancia, en base al principio de igualdad.
<b>Recurso de Casación 250-2018/UCAYALI de 22 de noviembre de 2018; 214-2018/EL SANTA.</b>	CASAN. La citada resolución casa la sentencia de vista, que confirmo la de primera instancia, y aplica responsabilidad restringida.
<b>Sentencia de Casación N.º 291-2019 Ayacucho</b>	CASAN. La citada resolución casa la sentencia de vista, que confirmo la de primera instancia.
<b>Stcia. Casación N.º 588-2019/Cusco de 24 de mayo de 2021</b>	CASAN. La citada resolución casa la sentencia de vista, que confirmo la de primera instancia.
<b>Recurso. Casación N.º 1672-2017/PUNO de 18 de octubre de 2018</b>	CASAN. Revoca a la sentencia emitida por la primera instancia y apegándose al principio constitucional de igualdad, casó la sentencia y redujo la pena por el delito de robo agravado
<b>Teoría resultante</b>	Las Salas Penales de la Corte Suprema, inaplican el segundo párrafo que restringe su aplicación en algunos delitos, considerando que el sustento para la atenuación es la edad del agente.

Tabla 5.

<b>Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema</b>			<b>Decisión</b>
<b>Consulta N.º 1260-2011, de 7 de junio de 2011 de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia</b>			Esta Resolución aprueba la consulta efectuada mediante resolución del 18 de enero del 2011, en tanto declaró inaplicable el segundo párrafo del artículo 22 del CP.
<b>Consulta</b>	<b>Nº</b>	<b>1618-2016</b>	Desaprueba la consulta. Esta consulta contiene un criterio de aplicación de la restricción por edad previsto en el segundo párrafo del Artículo 22 del CP.
<b>Lima Norte</b>			
<b>Consulta</b>	<b>Nº</b>	<b>11384-2015</b>	Desaprueba la consulta. Afianza y clarifica la regla de exclusión de ciertos delitos del beneficio de graduación de pena establecida por el artículo 22 del CP
<b>Huancavelica.</b>			
<b>Teoría resultante</b>			La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, en su mayoría, en las últimas Consultas, desaprueba la consulta y considera oportuno establecer límites a este tipo de beneficios penales o penitenciarios.

Es así que se advierte la existencia de antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del CP.

A continuación, se presenta la data de las entrevistas realizadas.

**Tabla 6.**

<b>Fiscales</b>	<b>¿Cuál es el tratamiento doctrinario sobre la responsabilidad restringida de acuerdo a la edad del agente que comete un hecho punible? Categorización.</b>
<b>Fiscal 1 y 8</b>	Reducción de la pena en forma prudencial
<b>Fiscal 2 y 6</b>	Es también denominada según la doctrina como un factor de eximente imperfecto ya que tiene como finalidad de atenuar la pena del imputado.
<b>Fiscal 3 y 9</b>	Considera que la responsabilidad restringida debe ser aplicada a cualquier persona que se ubica entre el rango de la edad establecida y cualquier tipo de exclusión es discriminatoria.
<b>Fiscal 4 y 10</b>	Procede la atenuación ó descuento de la pena a imponer, constituye circunstancia atenuante específica
<b>Fiscal 5 y 7</b>	Reducción prudencia de la pena

**Tabla 7.**

<b>Jueces penales</b>	<b>¿Cuál es el tratamiento doctrinario sobre la responsabilidad restringida de acuerdo a la edad del agente que comete un hecho punible?</b>
<b>Categorización</b>	
<b>Juez 1 y 9</b>	En la doctrina José Antonio Caro John, entre otros, en su debido momento abogaron por la reducción de la pena al margen de las restricciones que se plantean en la actual redacción del artículo 22° del Código Penal, se plasmó finalmente en el acuerdo plenario N° 4-2016.
<b>Juez 2 y 7</b>	Disminución de pena
<b>Juez 3 y 10</b>	La corte suprema considera la reducción de la pena, por debajo del mínimo legal.
<b>Juez 4 y 8</b>	En la actualidad doctrina se mantiene en la idea que es una causal de disminución de punibilidad.
<b>Juez 5</b>	El tratamiento que se le brinda es una causal de disminución de punibilidad en razón de la edad, en el entendimiento de que un

	sujeto menor de 21 años de edad aún no ha completado el total desarrollo de la culpabilidad y en el caso del mayor de 65 años de edad, porque existe una potencial disminución de la culpabilidad.
<b>Juez 6</b>	Los agentes delictuales comprendidos en estas edades acceden a una reducción de pena, por la condición arriba explicada, esto es, opera como un factor de disminución de la punibilidad

**Tabla 8.**

<b>Fiscales penales</b>	<b>¿Cuáles son los fundamentos jurídicos por los que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema decide aplicar el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal? Categorización</b>
<b>Fiscal 1 y 10</b>	Igualdad
<b>Fiscal 2 y 8</b>	Porque existen delitos más gravosos y su aplicación puede llegar afectar derechos constitucionales
<b>Fiscal 3 y 7</b>	La gravedad del hecho
<b>Fiscal 4 y 5</b>	Según recuerdo por la gravedad de algunos delitos como por ejemplo Robo agravado ó violación sexual.
<b>Fiscal 6 y 9</b>	Vulneración a la igualdad

**Tabla 9.**

<b>Jueces penales</b>	<b>¿Cuáles son los fundamentos jurídicos por los que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema decide aplicar el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal? Categorización</b>
<b>Juez 1 y 9</b>	La gravedad del hecho y por la naturaleza del bien jurídico protegido, porque precisamente por esa razón es que solo para algunos delitos resulta aplicable el artículo 22° del CP, que no permite disminuir la pena por responsabilidad restringida y por cuya razón considera que no colisiona el principio de igualdad.

<b>Juez 2 y 7</b>	Considera que no se viola el derecho a la igualdad, pues se está brindando un trato igual entre personas de las mismas características, reincidentes, habituales o que hayan cometido delitos graves.
<b>Juez 3 y 10</b>	La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, ha considerado la validez del segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, al establecer que dicho dispositivo legal no vulnera el principio de igualdad, ya que este principio tiene vigencia entre los iguales y si la ley ha considerado algunas circunstancias particulares, éstas obedecen a la gravedad del delito, así como la naturaleza del mismo y es en esta razón que impone un tratamiento diferenciado.
<b>Juez 4 y 8</b>	El sustento es puramente legal, dado que el artículo 22° del CP en su segundo párrafo excluye este beneficio a algunos agentes de determinados delitos.

**Tabla 10.**

<b>Fiscales</b>	<b>¿Cuáles son los fundamentos jurídicos por los que las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema decide inaplicar el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal?</b> <b>Categorización</b>
<b>Fiscal 1, 9, 10</b>	Igualdad
<b>Fiscal 2, 5</b>	Para inaplicar el segundo párrafo del artículo 22 del código penal en uno de los delitos establecidos en dicho párrafo, se tendrían que realizar una ponderación de derechos.
<b>Fiscal 3, 8</b>	Por la vulneración al principio de igualdad ante la ley.
<b>Fiscal 4</b>	Según recuerdo por la aplicación del principio de igualdad en la aplicación de la ley, sin importar la gravedad del delito cometido.
<b>Fiscal 6</b>	Por tema de seguridad social

**Tabla 11.**

<b>Jueces</b>	<b>¿Cuáles son los fundamentos jurídicos por los que las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema decide inaplicar el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal?</b>
<b>Juez 1, 9, 10</b>	La Sala Penal, hace un adecuado análisis de la categoría de la culpabilidad, la cual está sobre de la personalidad del agente, cuando tiene 18 a 21 años, su personalidad está en formación y en cambio en los mayores de 65 años su personalidad está en deterioro, el beneficio de la reducción de la pena incide en la personalidad del agente y no en el delito que pueda cometer, en consecuencia, la exclusión de la reducción de la pena viola el derecho a la igualdad ante la ley y en la ley.
<b>Juez 2, 5</b>	Principio de igualdad
<b>Juez 3</b>	Que la reducción de la pena por responsabilidad restringida, no tiene su fundamento en la gravedad del hecho, sino en la evolución vital del ser humano, existiendo una discriminación y desigualdad al aplicar este artículo.
<b>Juez 8</b>	No se debe vulnerar el derecho a la igualdad y solo basta comprobar la edad del agente para su aplicación independiente de cualquier delito, en razón de tener una culpabilidad disminuida.
<b>Juez 4 y 7</b>	El principal fundamento de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema, para inaplicar el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, es la vigencia del principio de igualdad, básicamente porque la disminución de la pena por razón de la edad [responsabilidad restringida] obedece a criterios personales del agente [culpabilidad] y no a la gravedad del hecho [injusto penal]; en consecuencia, la diferenciación no puede ser válida.
<b>Juez 6</b>	Porque esencialmente vulneran el principio constitucional de igualdad ante la ley y de no discriminación.

**Tabla 12.**

<b>Fiscales</b>	<b>¿Cuál es la posición mayoritaria de la comunidad jurídica del Distrito Fiscal de Lambayeque acerca de la responsabilidad restringida por la edad del agente que comete un hecho delictivo?</b>
<b>Fiscal 1, 7</b>	Reducción prudencial de la pena
<b>Fiscal 2, 9</b>	Mientras no afecte derechos fundamentales, se debería aplicar dicha responsabilidad restringida, teniendo en cuenta que tenemos un Código Penal que es netamente garantista.
<b>Fiscal 3, 10</b>	Que debe ser aplicada la responsabilidad restringida
<b>Fiscal 4, 6</b>	Actualmente, al parecer, se sigue los parámetros de las Salas Penales de la Corte Suprema, es decir se inaplica el segundo párrafo del art. 22°
<b>Fiscal 5, 8</b>	Inaplicable

**Tabla 13.**

<b>Jueces</b>	<b>¿Cuál es la posición mayoritaria de la comunidad jurídica del Distrito Judicial de Lambayeque acerca de la responsabilidad restringida por la edad del agente que comete un hecho delictivo?</b>
<b>Juez 1, 9</b>	Se toma en cuenta la responsabilidad restringida, al margen del delito cometido, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 4-2016.
<b>Juez 2</b>	Cumplimiento lineamientos de la Casación 237_2019 y Acuerdo Plenario 4/2016
<b>Juez 7</b>	Los juzgados colegiados, en consonancia con lo establecido por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha pronunciado en innumerables casaciones, respecto a aplicar la reducción de la pena por responsabilidad restringida, aun cuando se trate de delitos precisados en el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, sin necesidad de aplicar control difuso, amparados en los criterios establecidos.

<b>Juez 3, 10</b>	No puedo responder a ello, no se ha hecho un estudio, particularmente lo aplico. Existen consultas a la Sala Constitucional en la que se ha determinado un correcto control difuso y no se ha aplicado el segundo párrafo del art. 22, entonces este sería el criterio.
<b>Juez 4, 6</b>	Actualmente, se viene inaplicando el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal.
<b>Juez 5, 8</b>	En este Distrito Judicial se ha adoptado la posición de reducir prudencialmente la pena en todos los delitos cuando se trate de un agente de responsabilidad restringida.

**Tabla 14.**

<b>Fiscales</b>	<b>¿Debe expulsarse del ordenamiento penal el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal por contravenir la Constitución Política del Perú?</b>
<b>Fiscal 1 y 8</b>	Si
<b>Fiscal 2 y 10</b>	Si, debido a que se trataría de una discriminación no autorizada constitucionalmente
<b>Fiscal 3 y 7</b>	Sí.
<b>Fiscal 4 y 6</b>	Si, si se quiere privilegiar el principio de igualdad,
<b>Fiscal 5 y 9</b>	Si

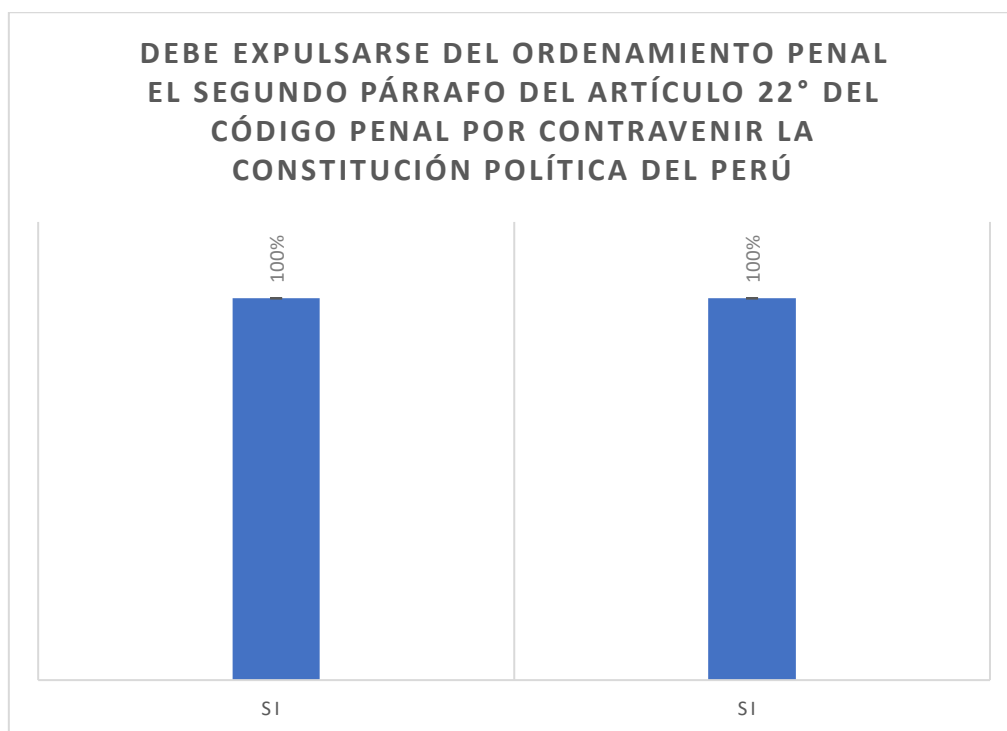
**Tabla 15.**

<b>Jueces</b>	<b>¿Debe expulsarse del ordenamiento penal el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal por contravenir la Constitución Política del Perú?</b>
<b>Juez 1 y 7</b>	Sí, por cuanto viola el derecho a la igualdad.
<b>Juez 2 y 10</b>	Si, por el principio de igualdad. Además la edad es analizada en la culpabilidad y no en la antijuricidad, por lo que no hay fundamento para la discriminación establecida en el segundo párrafo del artículo 22°.



<b>Juez 3 y 8</b>	Sí.
<b>Juez 4 y 6</b>	Si, si se quiere privilegiar el principio de igualdad
<b>Juez 5</b>	Considero que las razones que se exponen para su inaplicación, esto es, la infracción al principio de igualdad, permite sostener que debería ser derogado.
<b>Juez 9</b>	Efectivamente, debe modificarse dicha norma, adaptándose a los criterios de política criminal de la región latinoamericana. Sabido es, que la agravación de penas y exclusión de beneficios no disuade al delincuente. La orientación va sobre todo por la prevención.

**Gráfico 1.** Referencia al Artículo 22° del Código Penal



De los resultados se advierte que el 100% de fiscales y el 100% de jueces consideran que debe excluirse el art. 22 del CP.

**Tabla 16.**

<b>Fiscales</b>	<b>¿Al existir el Acuerdo Plenario N° 4-2016/CIJ-116 como jurisprudencia vinculante que se inaplique el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, debe aplicarse para las Salas de Derecho Constitucional y Social y las Salas Penales de la Corte Suprema?</b>
<b>Fiscal 1 y 8</b>	Si
<b>Fiscal 2 y 9</b>	Si
<b>Fiscal 3 y 10</b>	Sí, ya que los acuerdos tienen como finalidad unificar criterios
<b>Fiscal 4 y 6</b>	Sí debe aplicarse
<b>Fiscal 5 y 7</b>	No

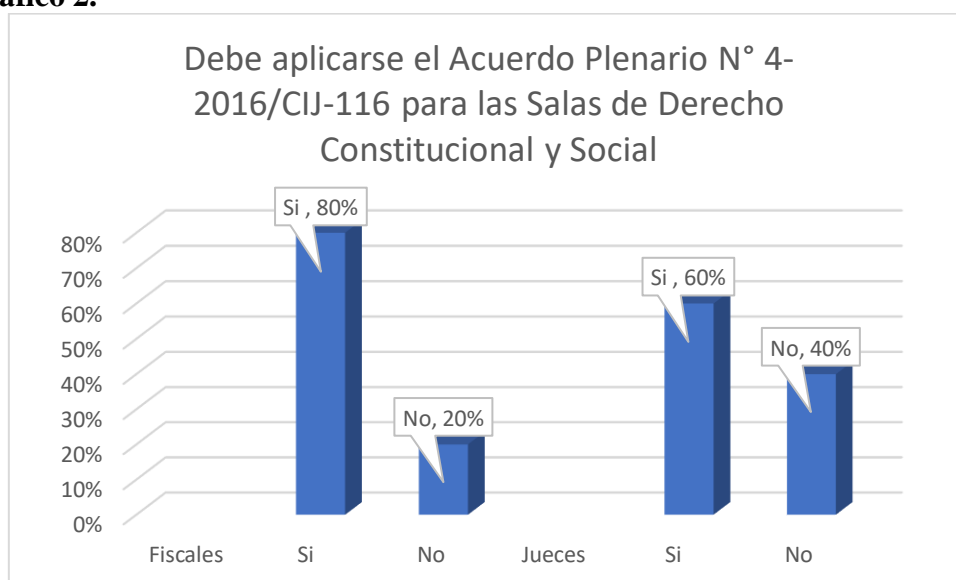
**Tabla 17.**

<b>Jueces</b>	<b>¿Al existir el Acuerdo Plenario N° 4-2016/CIJ-116 como jurisprudencia vinculante que se inaplique el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, debe aplicarse para las Salas de Derecho Constitucional y Social y las Salas Penales de la Corte Suprema?</b>
<b>Juez 1 y 10</b>	Sí debería aplicarse, en mérito al valor seguridad jurídica, sin embargo, la Sala Constitucional, genera distorsiones en el ordenamiento jurídico, tomando en cuenta que tiene una posición irrazonable, en cuanto a su par las Salas Penales Supremas, por lo que estas últimas han utilizado la novedosa figura de la antinomia jurisprudencial.
<b>Juez 2 y 9</b>	Si
<b>Juez 3</b>	Las salas penales de la corte suprema han establecido que resulta factible la reducción de pena por responsabilidad restringida, en todo caso quienes deberían empezar a aplicarlo son las Salas de Derecho Constitucional y Social.
<b>Juez 4 y 6</b>	Los Acuerdos Plenarios, en puridad no constituyen jurisprudencia vinculante, más aún, si los acuerdos plenarios dictados en materia

penal únicamente, son dictados para establecer una guía de aplicación obligatoria para todas las instancias involucradas en materia penal, salvo que exista una fundamentación motivada para su apartamiento. En cuanto a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, su intervención se originó por mandato constitucional que incluye la consulta como mecanismo para la aprobación o desaprobación del control difuso; siendo así, su función es realizar el control de validez de la constitucionalidad o no de la norma, que fue considerada como inconstitucional, que involucra un procedimiento distinto.

<b>Juez 5 y 8</b>	No
<b>Juez 7</b>	Considero que los Acuerdos Plenarios rigen para toda la judicatura nacional, lo cual incluye evidentemente a los órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema, tanto más si son ellos mismos los que han dado esa pauta de solución de conflictos para uniformizar la jurisprudencia nacional.

**Gráfico 2.**



Se evidencia que un 80% de los fiscales entrevistados y un 60% de los jueces entrevistados considera que las Salas de Derecho Constitucional y Social y las Salas Penales de la Corte Suprema deben aplicar el Acuerdo Plenario N° 4-2016/CIJ-116.

**Tabla 18.**

<b>Fiscales</b>	<b>Señale su OPINION respecto a alguna jurisprudencia de las Salas de Derecho Constitucional y Social o las Salas Penales de la Corte Suprema hayan aplicado/inaplicado el beneficio de la responsabilidad restringida.</b>
<b>Fiscal 1, 5 y 8</b>	En la casación N° 528-2020-Ayacucho, se señala que la no aplicación de la responsabilidad restringida por la edad, por la comisión de ciertos delitos, afecta el principio de igualdad en la aplicación de la pena; con lo cual estoy de acuerdo, pues el segundo párrafo del artículo 22° del CP, hace una discriminación selectiva y limitativa para excluir de la causal de disminución del quantum punitivo por la edad, solamente a ciertos delitos, sin que existan fundamento suficiente que justifique tal medida limitativa que afecta el principio de igualdad en la aplicación de la ley penal, que establece nuestra Constitución en su art. 2° y que debe existir para toda persona con edad restringida que cometa un delito, independientemente de la gravedad o no del delito cometido.
<b>Fiscal 2, 4 y 9</b>	En algunas jurisprudencias, la sala advierte que, en el segundo párrafo del artículo que se refiere a la responsabilidad restringida, donde se prohíbe dicha reducción de la pena para ciertos agentes, se toma en cuenta la gravedad y afectación a diversos bienes jurídicos, lo cual afectaría derechos constitucionales como el de igualdad ante la ley.
<b>Fiscal 6</b>	Considero que si se debe aplicar la responsabilidad restringida, ya que conforme a nuestro estado paternalista, se estima que la persona no es totalmente madura para asumir su responsabilidad como ciudadano, pero esto no se justifica en determinados casos, como es el sicariato, donde el autor condena a muerte a un ciudadano.

<b>Fiscal 3 y 10</b>	En la Casación Número 291-2019/Ayacucho, emitida el 16 de noviembre de 2020, la Corte Suprema señaló que la exclusión de la responsabilidad restringida en los casos de violación sexual, tráfico ilícito de drogas, entre otros, es discriminatoria. Esto debido a que se debe primar el "principio constitucional de igualdad ante la ley, frente al criterio de gravedad abstracta por el tipo de delito cometido", según la Suprema. Asimismo, la Corte señala que la atenuación en relación con las condiciones personales del sujeto y no a la gravedad del injusto cometido. Por ende, la Suprema Sala considera que es una discriminación no autorizada constitucionalmente. Por último, "no es necesaria la constatación con pericia específica del grado de inmadurez del procesado", agregó la Corte Suprema.
----------------------	--

**Tabla 19.**

<b>Jueces</b>	<b>Señale su OPINION respecto a alguna jurisprudencia de las Salas de Derecho Constitucional y Social o las Salas Penales de la Corte Suprema hayan aplicado/inaplicado el beneficio de la responsabilidad restringida.</b>
<b>Juez 1 y 10</b>	Consulta Exp. N° 1618-2016-Lima Norte otro caso similar corresponde a la Consulta Exp. N° 30146-2018-Cusco.
<b>Juez 2 y 9</b>	Desconozco
<b>Juez 3</b>	Siendo juez, el juzgado donde laboro, precisamente considera el criterio de la reducción de la pena por responsabilidad restringida por la edad, conforme lo establece las Salas Penales de la Corte Suprema.
<b>Juez 4 y 6</b>	Un ejemplo de su aplicación es en la Casación nro. 1762-2019-Puno. En el que la sala penal inaplica el segundo párrafo en base a la capacidad de culpabilidad del agente y no así se tiene en cuenta la gravedad del delito. En esta sentencia se recuerda varias sentencias en ese sentido.
<b>Juez 5 y 8</b>	Particularmente considero que, el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, infringe el principio de igualdad, ya que el fundamento de la responsabilidad restringida radica en una cuestión personal del

---

agente [la edad], y no en una cuestión de gravedad del hecho imputado [injusto penal]. En ese sentido, cuando la ley penal hace diferenciación sobre cuestiones personales del agente, infringe el principio de igualdad, lo cual no sucede cuando establece diferencias en relación a la gravedad del hecho, que si estaría justificado.

---

**Juez 7** Casación 308-2020- Ica, del 08 de junio del 2022: En ese caso se aplica la reducción de pena por responsabilidad restringida, conforme a los criterios ya señalados.

---

De nuestros resultados, se concluye que:

“Las exclusiones fijadas en el artículo 22° del Código Penal, implican una discriminación no autorizada constitucionalmente, pues está sustentada en la gravedad del hecho factor que incide en consideraciones abstractas-, mientras que la culpabilidad por el hecho incide en factores individuales concretos del agente, al margen del hecho cometido; el supuesto fáctico del artículo 22 del Código Penal no tiene su fundamento causal y normativo en las características y gravedad del injusto penal, sino en la evolución vital del ser humano.

Por otro lado, la responsabilidad restringida resulta aplicable solo con la mera constatación de la edad del imputado mayor de 18 y menor de 21 años de edad o más de 65 años, al tiempo de la comisión del hecho punible, por lo que califica como un factor de atenuación privilegiada en la determinación de la pena y no es necesaria la constatación con pericia específica del grado de inmadurez del procesado.

Se debe recurrir ineludiblemente a la aplicación del principio de proporcionalidad de la pena, conforme al artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, lo que

implica que la pena disminuida a imponer no sea irrazonable, considerando las circunstancias del caso”.

De las entrevistas a 10 fiscales y 10 jueces especialistas en derecho penal, se advierte que en la Casación N° 528-2020-Ayacucho, se señala que la no aplicación de la responsabilidad restringida por la edad, por la comisión de ciertos delitos, afecta el principio de igualdad en la aplicación de la pena; con lo cual estoy de acuerdo, pues el segundo párrafo del artículo 22° del CP, hace una discriminación selectiva y limitativa para excluir de la causal de disminución del quantum punitivo por la edad, solamente a ciertos delitos, sin que existan fundamento suficiente que justifique tal medida limitativa que afecta el principio de igualdad en la aplicación de la ley penal que establece nuestra Constitución en su art. 2. y que debe existir para toda persona con edad restringida que cometa un delito, independientemente de la gravedad o no del delito cometido.

En algunas jurisprudencias, la sala advierte, que en el segundo párrafo del artículo que se refiere a la responsabilidad restringida, donde se prohíbe dicha reducción de la pena para ciertos agentes, se toma en cuenta la gravedad y afectación a diversos bienes jurídicos, lo cual afectaría derechos constitucionales como el de igualdad ante la ley.

Asímismo señalan que se debe aplicar la responsabilidad restringida, ya que conforme a nuestro estado paternalista, se estima que la persona no es totalmente madura para asumir su responsabilidad como cualquier ciudadano, pero esto no se justifica en determinados casos, como es el sicariato, donde el autor condena a muerte a un ciudadano.

En la Casación Número 291-2019/Ayacucho, emitida el 16 de noviembre de 2020, la Corte Suprema señaló que la exclusión de la responsabilidad restringida en los casos de violación sexual, tráfico ilícito de drogas, entre otros, es discriminatoria. Esto debido a que se debe primar el "principio constitucional de igualdad ante la ley, frente al criterio de gravedad abstracta por el tipo de delito cometido", según la Suprema. Asimismo, la Corte señala que la atenuación en relación con las condiciones personales del sujeto y no a la gravedad del injusto cometido. Por ende, la Sala Suprema considera que es una discriminación no autorizada constitucionalmente. Por último, "no es necesaria la constatación con pericia específica del grado de inmadurez del procesado", agregó la Corte Suprema.

Estos resultados de esta investigación se afianzan en Díaz (2018) quien señaló que “los operadores de justicia han respaldado empíricamente que la inaplicación de la responsabilidad restringida para mayores de 18 y menores de 21 años tiene influencia significativa con la vulneración de los fines preventivos especiales de la pena” (p. 140).

Respecto al objetivo específico

Examinar el derecho a la igualdad ante la ley establecido en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales.

De las entrevistas se advierte que:

**Tabla 20.**

<b>Fiscales</b>	<b>¿En qué consiste el principio - derecho de la igualdad ante la ley?</b>
<b>Fiscal 1 y 10</b>	Tratar al desigual por igual
<b>Fiscal 2 y 6</b>	Que todo ser humano tiene los mismos derechos



<b>Fiscal 3 y 8</b>	Que ante personas de mismas condiciones debe aplicarse la misma ley.
<b>Fiscal 4 y 9</b>	Que al aplicar la ley, no debe existir discriminación de ninguna índole, tampoco por razón de la edad o el sexo
<b>Fiscal 5 y 7</b>	Todos ser tratados por igual

**Tabla 21.**

<b>Jueces</b>	<b>¿En qué consiste el principio - derecho de la igualdad ante la ley?</b>
<b>Juez 1 y 7</b>	El derecho a la igualdad tiene dos vertientes, derecho a la igualdad en la ley y ante la ley, esto último implica que el legislador (el constituyente) no cree, no diseñe, disposiciones lesivas o carentes de sustento, a personas o colectivos que se encuentran en la misma situación.
<b>Juez 2 y 6</b>	Nadie puede ser tratado diferente sin motivo justificado.
<b>Juez 3 y 9</b>	No puede darse un trato discriminatorio.
<b>Juez 4 y 8</b>	Implica ser tratado de igual modo frente a otros en similares situaciones.
<b>Juez 6 y 10</b>	Este principio señala la obligación del tratamiento igualitario frente a la ley, siempre y cuando existan las mismas condiciones, existiendo la posibilidad válida de realizar diferencias cuando las condiciones también sean diferentes.
<b>Juez 5</b>	Consiste en darle un tratamiento similar a todas las personas en la elaboración, interpretación y aplicación de la ley, sin hacer distingos de raza, sexo, religión, etc.

Del análisis documental, se advierte que el Pacto de San José de Costa Rica, en su Art. 24, señala que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

La Constitución Peruana, en su art. 2º prescribe: “(...) toda persona tiene derecho (...) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

Según el Tribunal Constitucional, en el Exp. 03525-2011-AA:

“(...) La igualdad es ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda, implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable”.

El mismo TC, señala que “es un principio rector de la organización del Estado Social y Democrático de Derecho, la igualdad será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable” (STC 00009-2007-PI/TC, fundamento 20).

El contenido esencial de la igualdad ante la ley implica “que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma”

El TC en su sentencia STC Exp. N° 0018-2003AI/TC ha señalado que:

“La naturaleza jurídica de la igualdad, reposa en una condición o presupuesto indispensable para el ejercicio de los distintos y plurales derechos

individuales. Por ende, no es un derecho autónomo, sino relacional"; es decir, "funciona en la medida en que se encuentra conectado con los restantes derechos, facultades y atribuciones constitucionales y legales".

La igualdad es principio rector del ordenamiento jurídico y es derecho fundamental de la persona, a ser tratado con igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación. Este derecho inspira la expedición de normas, su interpretación y aplicación jurídica, la intervención de la fuerza pública y la actuación administrativa.

El trato diferenciado de las personas, no es necesariamente contrario a la Constitución, siempre que tal tratamiento disímil se base en las diferencias de las personas y en las distintas condiciones o circunstancias en las que se desenvuelven.

La distinción en el trato nunca puede ser irrazonable ni desproporcionada y en la medida en que se protegerían bienes de relevancia constitucional no pueden transgredirse otros bienes constitucionales que también merecen ser realizados.

Estos resultados difieren de Oyarce (2019), quien señaló que "No existe un término de comparación válido para establecer que las restricciones incorporadas a la atenuación de la pena vulneran el principio de igualdad, ya que la situación fáctica no es análoga, para poder determinar que el sujeto ha sufrido un trato diferente" (p. 85).

Por el contrario, hallamos cuatro antecedentes investigados que fortalecen nuestra investigación. En primer lugar, Castro (2018), señaló que "El principio de igualdad ante la ley garantiza que ante ella, todos somos iguales, siendo que por ello las normas deben ser

aplicable de la misma manera para todos, sin efectuar excepciones y sin consideraciones personales, vulnerándose con la imposición de penas elevadas sin considerar la responsabilidad restringida en los delitos de robo agravado cometidos por menores de 21 años y mayores de 18 años” (p.99).

Así también se afianzan en Zambrano (2018) quien señaló que: “la variable responsabilidad penal restringida influye directa y positivamente con la variable principio de igualdad procesal, según la correlación de Spearman de 0.577 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de  $p=0.000$  siendo menor que el 0.05. P” (p. 73).

De igual forma, se afianzan en Malca (2019), quien concluyó que hay una afectación a la dignidad humana al excluir de responsabilidad a un grupo de personas en razón de la edad, más aún cuando se sustentan en la gravedad del ilícito penal y no en la capacidad del agente, que es una eximente imperfecta o causa de disminución de la punibilidad, existiendo discriminación al agente y que su constitucionalidad sólo se consolida con la interpretación constitucional.

Así también, se sustentan en Apagüño (2018), quien determinó que la responsabilidad restringida en el Perú no es compatible con el principio derecho de igualdad, la cual no soporta el test de proporcionalidad, siendo que el artículo analizado se aplica con desigualdad y su justificación constitucional no es válida.

## 5. Capítulo V. Discusión De Resultados

### 5.1. Presentación del modelo teórico.

A fin de establecer cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal, se aplicaron las técnicas de Entrevista, Análisis documental y fichaje.

A continuación, se presenta la data de las entrevistas.

**Tabla 22.**

<b>Fiscales</b>	<b>¿Cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal?</b>
<b>Fiscal 1 y 9</b>	Lex superior, lex posterior, lex especial, es la fórmula básica para resolver las antinomias. En el caso planteado sería un pleno casatorio que fije posición de criterios, ya que de por medio existen cuestiones de política criminal que atenta con el derecho a la igualdad, por ende no existiendo antinomias respecto de los pronunciamientos, ya que los pronunciamientos judiciales no son ley. Respecto del núcleo principal, corresponde efectuar control concentrado
<b>Fiscal 2 y 8</b>	Se deben tomar los siguientes criterios: especialidad, momento de expedición de la sentencia y técnica de resolución de conflictos
<b>Fiscal 3 y 10</b>	Con la derogación de la norma legal
<b>Fiscal 4 y 9</b>	Con un pleno casatorio, donde intervengan todos los jueces supremos
<b>Fiscal 5 y 6</b>	Cumplir la norma penal estrictamente pues el tema de la seguridad debe primar ante un derecho de personas que transgrede la ley

**Tabla 23.**

<b>Jueces</b>	<b>¿Cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22° del Código Penal?</b>
<b>Juez 1 y 7</b>	Por el momento, a nivel legislativo, no hay una solución legal; sin embargo, bajo la figura de la antinomia jurisprudencial, la interpretación que ha realizado la Corte Suprema en lo penal, bajo el principio pro homine, derecho a la igualdad, resulta ser la interpretación más beneficiosa, por lo que es la que debe primar. Al margen del audaz argumento del principio de especialidad que es el principio que da pie a la antinomia jurisprudencial.
<b>Juez 2 y 10</b>	Acuerdo Plenario.
<b>Juez 3 y 8</b>	La raíz de este problema se debe a nuestros legisladores, sino hubiesen promulgado el segundo párrafo de este artículo, no existirían estos inconvenientes.
<b>Juez 4 y 5</b>	Siguiendo el principio de especialidad. En este caso los dispuesto en el ámbito penal.
<b>Juez 6</b>	La jurisprudencia soluciona lo que la norma establece mal, pero genera inseguridad jurídica en el justiciable
<b>Juez 9</b>	Existen criterios tales como: a.- Prevalece la norma de mayor jerarquía frente a la de menor rango, b.- Prevalece la norma menos antigua frente a la más antigua, c.- Prevalece la norma especial frente a la norma general

**Tabla 24.**

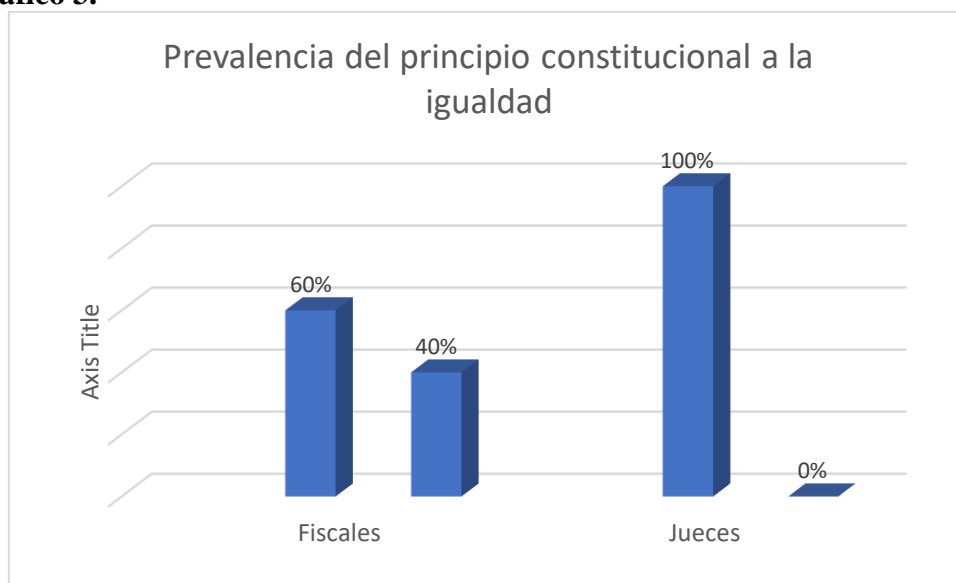
<b>Fiscales</b>	<b>¿Sí prevalece el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad sin exceptuar a agentes de algunos delitos, se soluciona la antinomia jurídica entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema?</b>
<b>Fiscal 1 y 8</b>	Sí, como existe una ley no derogada, se debe aplicar control difuso o concentrado.

<b>Fiscal 2 y 7</b>	No.
<b>Fiscal 3 y 10</b>	Sí.
<b>Fiscal 4 y 9</b>	Si se soluciona
<b>Fiscal 5 y 6</b>	No
<b>Teoría resultante</b>	Un 60% de los entrevistados, señala que debe prevalecer el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad, sin exceptuar a agentes de algunos delitos

Tabla 25.

<b>Jueces</b>	<b>¿Sí prevalece el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad sin exceptuar a agentes de algunos delitos, se soluciona la antinomia jurídica entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema?</b>
<b>Juez 1 y 8</b>	Definitivamente que sí, por cuanto, el argumento tiene sustento y parte desde la Constitución, por lo tanto, debe prevalecer, sobre argumentos de política criminal.
<b>Juez 2 y 7</b>	Si
<b>Juez 3</b>	Tendría que prevalecer el principio constitucional de igualdad; pero no perdamos de vista que las salas constitucionales de la Corte Suprema, tienen un criterio establecido al respecto y lo han expresado cuando han desaprobado la inaplicación del art. 22° del Código Penal, incluso precisan que no es inconstitucional.
<b>Juez 10</b>	Sí.
<b>Juez 4 y 9</b>	En efecto, el principal argumento para solucionar la validez de la inaplicación del segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, es la vigencia del principio de igualdad y sobre todo porque la edad es una cuestión personal y no de gravedad del injusto penal.
<b>Juez 5 y 6</b>	Considero que esa es la forma adecuada de resolver este conflicto de leyes, prevaleciendo la norma constitucional frente a una norma legal contenida en el Código Penal, sin necesidad de hacer control difuso,

	que implicaría en elevar en consulta a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema
<b>Teoría resultante</b>	Un 100% de los jueces entrevistados, señala que debe prevalecer el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad, sin exceptuar a agentes de algunos delitos

**Gráfico 3.**

De la revisión documental, advertimos que la Recurso Casación N°1672-2017/PUNO, del 18 de octubre de 2018, presenta una propuesta de solución a las antinomias jurisprudenciales, señalando que se solucionan por la especialidad de la norma, temporalidad y la técnica propia del Derecho Penal, en material penal.

Así también del fichaje se advierte que Requena (2004) señala: que es lo contrario a la coherencia, es un conflicto normativo entre situaciones en las que dos o más normas que tienen similar objeto prescriben soluciones incompatibles entre sí, de forma tal que el cumplimiento o aplicación de una de ellas implica la violación de la otra, ya que la aplicación simultánea de ambas normas resulta imposible.



A tenor del autor, se debe utilizar el sistema de fuentes constitucionales, como es el Principio de Jerarquía que implica el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto de normas jurídicas.

Es así que al privilegiar el principio-derecho a la igualdad, cuyo contenido se encuentra constitucionalmente protegido, estaríamos postulando una solución a las antinomias existentes.

De los resultados obtenidos a través del cuestionario, el fichaje y la revisión documental expuesta, nos permiten concluir que “Sí prevalece el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad sin exceptuar a agentes de algunos delitos, entonces se soluciona la antinomia jurídica entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema”.

Estos resultados, se afianzan en Taco (2017) quien concluyó que la responsabilidad restringida debe aplicarse a todos los delitos, de forma transversal, atendiendo a los principios de igualdad, proporcionalidad, convencionalidad y otros concordantes que ha desarrollado la corte suprema vía control difuso.

## **6. Capítulo VI. Propuesta De Intervención**

### **Proyecto De La Ley Que Deroga Parcialmente El Artículo 22° Del Decreto Legislativo 635 Código Penal Para Garantizar El Derecho A La Igualdad En La Aplicación Del Beneficio De Responsabilidad Restringida Por La Edad**

### **Exposición De Motivos De La Ley Que Deroga Parcialmente El Artículo 22 Del Decreto Legislativo 635 Código Penal Para Garantizar El Derecho A La Igualdad En La Aplicación Del Beneficio De Responsabilidad Restringida Por La Edad**

#### **6.1. Antecedentes**

Los derechos humanos rigen la actividad de la persona y es el Estado el llamado a protegerlos, para ello genera dentro de su normativa, disposiciones normativas, preventivas y sancionadoras, las cuales tienen como pilar los derechos fundamentales como es la igualdad; la cual debe reflejarse en la Ley y ante la ley.

Es así que el Derecho Penal, debe abordar criterios que permitan un tratamiento igual entre los iguales y desigual en los desiguales, lo cual no se apreciado en la regulación de la responsabilidad restringida por la edad, pues a los agentes de ciertos tipos penales, la norma les proscribire la aplicación de los beneficios de responsabilidad restringida por el edad, alejándose del criterio fundante de la minimización, esto es la edad del agente, que justifica su actuar inmaduro e incluso a veces inconsciente, en razón de lo cual puede ser posible de reducción proporcional de la pena, cuando el juez de la causa aprecie que le corresponde y se acredita esta restricción

## **6.2. Fundamentación**

Las disposiciones, beneficios y sanciones contemplados en el Código Penal deben ser acordes al principio de igualdad el cual no reconoce efectos discriminatorios; por lo tanto, la existencia de disposiciones reglamentarias diferentes o de tratamientos diferentes resultantes de la aplicación de la ley deben ser derogados, pues las normas no pueden transgredir a los derechos fundamentales que van a proteger.

La existencia de normas que determinan diferenciación ha generado que un sector de la magistratura las solicite (en el caso del fiscal) y las aplique (en el caso del juez), y otro sector se parte de las mismas, elevando su decisión a consulta; la cual de forma irrazonable ha sido resuelta también con diversos criterios, sin generarse uniformidad en la aplicación de la ley; menos aún seguridad jurídica de quienes pudieren aspirar al beneficio.

Es labor del legislador no permitir la contradicción de normas a preceptos constitucionales; menos aún propiciar la emisión de jurisprudencia contradictoria, por ello al haberse detectado, lo propicio es el análisis de la disposición y su constitucionalización a través de la observancia de los derechos fundamentales.

Cabe resaltar que la propuesta busca derogar únicamente el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, manteniendo la reiterancia en los delitos previstos en los artículos 111° tercer párrafo y 124° cuarto párrafo; como causal de inaplicación del beneficio, ello atendiendo a que el infractor ya tomo conocimiento de la ilicitud de su accionar y pese a ello decide su continuidad

### **6.3. Efectos de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional.**

El presente proyecto se encuentra en el marco de la constitución nacional y su efecto en la legislación nacional, de acuerdo con el principio de publicidad, se produce de inmediato, por lo que rige a partir de la fecha de su publicación.

### **6.4. Análisis Costo – Beneficio**

La presente propuesta tiene por finalidad eliminar las contradicciones existentes entre la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional y Penal de la Corte Suprema. No se advierte costo alguno para la implementación de la presente norma.

El beneficio es dotar de seguridad jurídica a todas las personas; pues pese a haber realizado conductas delictuosas, deben tener predictibilidad en las decisiones judiciales; aunado a que en la aplicación del beneficio de responsabilidad restringida por la edad se minoriza la cantidad de ingresos de reos a establecimientos penitenciarios, cuyo coste de manutención está a cargo del Estado.

### **6.5. Modificatoria**

Según lo establecido en el Manual de Técnica Legislativa (2020), respecto a la modificación de normas, se desarrolla la propuesta:

**LEY QUE DEROGA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 22 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 635 CÓDIGO PENAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA  
IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO DE RESPONSABILIDAD  
RESTRINGIDA POR LA EDAD**

**Artículo Único. Derogación parcial del art. 22 del Decreto Legislativo 635**

Se deroga el segundo párrafo del artículo 22 del Decreto Legislativo 635 para garantizar el derecho a la igualdad en la aplicación del beneficio de responsabilidad restringida por la edad; quedando redactado de la siguiente forma:

“Artículo 22.- Responsabilidad restringida por la edad

Deberá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111 tercer párrafo y 124 cuarto párrafo”.

## Conclusiones

Del estudio a la responsabilidad restringida, se advierte que su aplicación consiente la disminución prudencial de la pena señalada para el hecho punible cometido, cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción y no se relaciona con ningún delito, su basamento es el grado de capacidad (grado de madurez y el detrimento de facultades mentales) que tiene el agente al momento de la comisión del ilícito, por lo cual es aplicable al agente de cualquier delito.

Del análisis de la doctrina jurisprudencial de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, se advierte contradicción respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22° del Código Penal, ello atendiendo que la Sala Constitucional decide aprobar y desaprobar las consultas efectuadas respecto a la inaplicación del segundo párrafo del artículo 22 del CC; por el contrario, las Salas Penales, casan las resoluciones que han denegado la aplicación de este beneficio, atendiendo a que en base al principio de igualdad y al rango etario del agente, pueda reducirse la pena, si las condiciones de su culpabilidad lo permiten.

Del derecho a la igualdad, establecido en nuestra Constitución, se advierte su naturaleza fundamental y rango constitucional, hallándose en los tratados internacionales, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo su contenido esencial “que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma. La igualdad será vulnerada, cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable,

lo cual ocurre en la distinción de un beneficio otorgado, atendiendo a las capacidades del agente, basándose en la diferencia de las tipificaciones penales.

Finalmente se establece que para solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22° del Código Penal, es necesario que prevalezca el principio constitucional de igualdad en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad, sin exceptuar a agentes de algunos delitos; y que se efectúe una modificación legislativa al art. 22° del CP, derogando su segundo párrafo.

### **Recomendaciones**

1. Se recomienda al legislador contemplar el derecho a la igualdad en sus vertientes de igualdad en la ley y ante la ley, al momento de emitir las normas dispositivas y sancionadoras, ello a fin de no transgredir el bloque la constitucionalidad.
2. Se recomienda a los integrantes de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, el arribo a un consenso, a través de un acuerdo entre ambas, vinculante a los operadores del derecho, donde precisen que es el grado de madurez y el detrimetro de facultades mentales, el sustento a la aplicación del beneficio de reducción de la pena a los agentes con responsabilidad restringida, independientemente del delito; en razón de lo cual su aplicación no se limita a algunos agentes, sino a la pluralidad de los mismos; para uniformizar la jurisprudencia.
3. Se recomienda al legislador que se modifique el primer párrafo del art. 22, derogando su segundo párrafo, lo cual permite su aplicabilidad a todos los agentes de hechos delictivos, de forma indistinta al delito cometido, ello atendiendo al principio de igualdad.
4. Recomendamos, que el presidente del Poder Judicial, en base a la iniciativa legislativa que tiene, proponga la modificatoria desarrollada en el presente estudio y en tanto no se realice la modificación que derogue el segundo párrafo del art. 22 del CP, todos los operadores jurídicos lo inapliquen; para garantizar el derecho a la igualdad.



## Referencias

- Alfaro, E. (2017). El principio de proporcionalidad en la interpretación de los derechos fundamentales: Un estudio sobre su aplicación en la jurisprudencia constitucional de Costa Rica [tesis de posgrado, Universidad Autónoma de Madrid]. Repositorio Institucional UAM. <http://hdl.handle.net/10486/680766>
- Apagüño, R. (2018). “La regulación de la responsabilidad restringida por la edad en el Perú y su compatibilidad con el principio de igualdad”. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/22814>
- Arana (2016), en su tesis titulada “La Responsabilidad Penal para adolescentes mayores de 16 años”. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque]. Repositorio Institucional.
- Borja, E.(2015). La aplicación de las circunstancias del delito. (Valencia), España: Tirant lo Blanch.
- Caro, D. (2017). Notas sobre la individualización judicial de la pena en el Código Penal peruano. Recuperado de: <https://www.ccfirma.com/wp-content/uploads/2017/11/IJP-Carlos-Caro.pdf>
- Casación N.º 1115-2019, PUNO - <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://lpderecho.pe/casacion-115-2019-puno-lp/>
- Casación N.º 291-2019, AYACUCHO:- <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/01/Casacion-291-2019-Ayacucho-LP.pdf>
- Casación N.º 1-2018/CIJ-433I Pleno jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial – Sentencia Plenaria. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/03/An%C3%A1lisis-y-comentarios-de-las-principales-sentencias-casatorias-en-materia-penal-y-procesal-penal-tomo-II-LP.pdf
- Casación N.º 1672-2017/PUNO chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Casacion-1672-2017-Puno-Legis.pe\_.pdf
- Castro, R. L. (2018). La exclusión de la responsabilidad restringida vulnera el principio de igualdad en los delitos comunes. [Tesis de maestría, Universidad Nacional del Santa]. <http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/3306>
- Cerdá Martínez-Pujalte, Carmen María (2005). Los principios Constitucionales de igualdad de trato de prohibición de la discriminación. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23276.pdf>

- Chaves, J. et al. (2018). El poder del bloque de constitucionalidad sin límite [tesis de posgrado, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional de la Pontificia Universidad Javeriana. <http://hdl.handle.net/10554/40989>
- Chumán, J. L. y Quispe, L. (2014). La criminalidad en los menores de edad como personas inimputables en la provincia de Chiclayo. [Tesis de pregrado, Universidad Señor de Sipán]. <https://hdl.handle.net/20.500.12802/1351>
- Congreso de la República del Perú (1991, 3 de abril). Código Penal. Decreto Legislativo N° 635, diario oficial El Peruano. <https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0034/codigo-penal-29.07.2020.pdf>
- Córdoba (2014). El Juicio Justo. Imputabilidad Disminuida. [Tesis de doctorado, Universidad Libre]. <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7551/CordobaArturoAlfredo2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Congreso de la República del Perú (2020). Constitución política del Perú, Lima, Perú. <https://www.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/index.html>
- Córdoba (2014). *El Juicio Justo. Imputabilidad Disminuida*. [Tesis de doctorado, Universidad Libre]. <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7551/CordobaArturoAlfredo2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Creus, c. (2018). *Derecho Penal. Parte General*. (5ta edición)
- Cury, E. (2005). *Derecho Penal. Parte General*. (Santiago de Chile), Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Diario El Peruano (2017, 17 de octubre) X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias - Acuerdo Plenario N.º 4-2016/CIJ-116
- Díaz, R. (2018). La inaplicación de la responsabilidad restringida y su relación con la vulneración de los fines preventivos especiales de la pena, en el distrito judicial de Lima, año 2017. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Federico Villarreal]. <http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/2574/D%C3%8DAZ%20SO%20ROSA%20-%20MAESTRIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Fernández C. (1990). *Derecho de las Personas*. (Lima), Perú: Cultural Cuzco.
- Fernando, R. (2012). *Individualización judicial de la pena en el derecho penal argentino. Buenos Aires*. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata]. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/34940>
- García, J. (s/f). *Las antinomias en el derecho, el porqué de su origen y el cómo de sus posibles soluciones*. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cuci.udg.mx/sites/default/files/garcia\\_murillo.pdf](https://cuci.udg.mx/sites/default/files/garcia_murillo.pdf)

- García, C. (2019). La inconstitucionalidad de las normas constitucionales y el mecanismo para tratarlas en el ordenamiento peruano [tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de tesis USAT. <http://hdl.handle.net/20.500.12423/2263>
- García, P. (2015). *Derecho penal. Parte General* (3era edición)
- González Le Saux, Marianne y Parra Vera, Oscar (2008) Concepciones y cláusulas de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. A propósito del Caso Apitz. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23826.pdf>
- Guastini, Ricardo, Antinomias y Lagunas, Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Número 29, Año 1999, pág. 438.
- Gutiérrez, G. (2020). Comentarios a la Constitución Política del Perú. (Vol. 1). Grijley.
- Hurtado Pozo, José (2011). Manual de Derecho Penal - Parte General. (Lima), Perú: Editorial Grijley.
- Jiménez, J. C. (2016). La Responsabilidad restringida. El segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal. En: Actualidad Penal al día con el Derecho Penal, Procesal Penal Penitenciario y Criminología, Editorial Instituto Pacífico, Volumen N° 30, Diciembre, Lima.
- Landa, C. (2018). Derecho Procesal Constitucional. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/170693>
- Malca, R. (2019). La constitucionalidad de la limitación de responsabilidad restringida en el Código Penal y la igualdad ante la ley. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. <https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/8270>
- Mantovani, F. (2015). Los Principios del Derecho Penal. (Lima), Perú: Ediciones Legales.
- Maurach, R. (1994). Derecho Penal Parte General, 7° edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea.
- Meini, I. (2014). Lecciones de Derecho Penal – Parte General. (Lima), Perú: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Mendoza Ayma, Francisco (2015). Determinación e Individualización de la Pena. (Lima), Perú: Jurista Editores EIRL.
- Mir Puig Santiago (2014). Derecho Penal-Parte General. (Barcelona), España: TECFOTO, SL.
- Miranda, E. J. (2016). La responsabilidad restringida en delitos graves, conforme al segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal y la aplicación de la confesión sincera en su ámbito penal y procesal penal. En: Actualidad Penal al día con el Derecho Penal, Procesal Penal Penitenciario y Criminología, Editorial Instituto Pacífico, Volumen N° 30, Diciembre, Lima

- Montoya, J. (2018). El principio de proporcionalidad en las sentencias penales y la seguridad jurídica, a propósito del caso Silvana Buscaglia Zapler [tesis de pregrado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. Repositorio Institucional UNPRG. <https://hdl.handle.net/20.500.12893/8028>
- Muñoz, F., y García A, M. (2004). *Derecho Penal Parte General* (7 ed.). España: Valencia.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- Organización de los Estados Americanos (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. [https://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm)
- Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Ossorio, M. (2012). *Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales*.
- Oyarce, J. (2019). La exclusión de la responsabilidad restringida vulnera el principio de igualdad en los delitos graves. Revista Vox Iuris <https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/download/1717/1754>
- Pacheco, D. L. (2020). Antinomia: ¿qué es y cómo resolverla? [Apelación 1915-2017, Lima]. LP Pasión por el derecho. <https://lpderecho.pe/antinomia-que-es-como-resolverla-apelacion-1915-2017-lima/#:~:text=Lo%20opuesto%20a%20la%20coherencia,la%20otra%2C%20ya%20que%20la>
- Peña, A.(2011). *Derecho Penal*. Parte General. Tomo I.
- Pérez, P. (2019). “El bloque constitucional y el bloque de la constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador” [tesis de posgrado, Universidad Andina Simón Bolívar]. Repositorio Institucional Digital UASB. <http://hdl.handle.net/10644/6616>
- Poder Judicial (2021). Casación N.º 588-2019/Cusco de 24 de mayo de 2021
- Prado Saldarriaga, Víctor (2015). Determinación Judicial de la Pena. Lima, Perú: Instituto Pacífico.
- Prado, Víctor (2015) Las Circunstancias Atenuantes Genéricas del artículo 46 Del Código Penal. Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/15579/16028>
- Recurso de Casación 250-2018/UCAYALI de 22 de noviembre de 2018; 214-2018/EL SANTA. <https://lpderecho.pe/reiteran-tres-pautas-resolver-antinomias-juridicas-casacion-250-2018-ucayali/>
- Recurso de nulidad n.º 1877-2015, LIMA - <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/03/Recurso-de-Nulidad-1877-2015-Lima-LP.pdf>

- Requena, T. (2004). El principio de jerarquía normativa. Madrid: *Civitas*, p. 133.
- Rodríguez, L. (2011). Naturaleza y Fundamento de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal. *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, XXXVI, 2011, 1º Semestre, pp. 397-428.
- Rodriguez, M. P. (2008). *Manual de casos penales. La teoría general del delito y su importancia en el marco de la reforma penal*.
- Roxin Claus (2014). *Derecho Penal Parte General – Tomo I*. Madrid, España: Civitas Ediciones.
- Rubio, M. (2018). El test de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Rubio, M. (2017). La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Consulta N° 1618-2016 LIMA NORTE. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Reporte-de-jurisprudencia-1.-Legis.pe\\_.pdf](https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Reporte-de-jurisprudencia-1.-Legis.pe_.pdf)
- Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Consulta N° 11384-2015 HUANCABELICA. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Reporte-de-jurisprudencia-1.-Legis.pe\\_.pdf](https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Reporte-de-jurisprudencia-1.-Legis.pe_.pdf)
- Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Consultas números 1260-2011. <https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/ExpedienteVerPDF.aspx?data=EDc7MV/uv7dSpAz0BZQ2Y1gb+4ddj1KIr8Ho1/mnoMPCGalS0oey77v0apM0pJpnwH/INKI9oH/NjMJn1lP+InbCFyKZEWizHeOIRbldf6ltM9+cZGqZ2w0TwGuowAr415OoFwfGirpboWqE/+DNlbZSAhlnNZBEaXtZO+EbaSgKnlnGHF8wMvyGvpdboUmaBdRSr64g5YEqHIS/uJdBh0jvPG1X48RuCAC1fKI+38Eo25AGfx39zvJSmeopQ8j8gPCrcKXzZrgHkLWEHPzVEgRHqhNhqmk+w4SLcQCOTFQvcGc0ICe9grOnUj6rJNtS9w==>
- Schönbohm, H. (2014). Manual de sentencias penales aspectos generales de estructura, argumentación y valoración probatoria reflexiones y sugerencias. Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ. <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bb61920047a0dcfcbabbfd87f5ca43e/MANUAL+DE+FUNDAMENTACION+DE+SENTENCIAS+PENALES.pdf?MOD=AJPERES>
- Suñez, Y., y González, M. (2012). La determinación de la pena de acuerdo a la capacidad de culpabilidad que posee el adolescente. La Habana [https://econpapers.repec.org/article/ervcoccss/y\\_3a2012\\_3ai\\_3a2012-02\\_3a44.htm](https://econpapers.repec.org/article/ervcoccss/y_3a2012_3ai_3a2012-02_3a44.htm)
- Taco, C. Y. (2017). Aplicación de la responsabilidad restringida en los delitos de violación sexual en víctimas de 12 y 17 años de edad. [Tesis de pregrado, Universidad Andina]

del Cusco]. [http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/1008/3/Caron\\_Tesis\\_bachiller\\_2017\\_Part.1.pdf](http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/1008/3/Caron_Tesis_bachiller_2017_Part.1.pdf)

Tribunal Constitucional (2011). STC. Exp. 03525-2011-AA/TC. Recuperado de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03525-2011-AA%20Resolucion.html>

Tribunal Constitucional (2006). STC. Exp. 0004-2006-PI/TC. Recuperado de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00004-2006-AI.pdf>

Tribunal Constitucional (2004). STC. Exp. 0606-2004-AA/TC. Recuperado de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00606-2004-AA.pdf>

Tribunal Constitucional (2014). STC. Exp. 05157-2014-PA/TC. Recuperado de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/05157-2014-AA.pdf>

Tribunal Constitucional (2005). STC. Exp.0019-2005-PI/TC. Recuperado de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00019-2005-AI.pdf>

Vásquez, D. J. (2020). Antinomias, incongruencias en las leyes, la jurisprudencia y la doctrina militar, *Verba Iuris* 43. Bogotá D.C. Colombia . Enero-junio 2020. pp. 229-247

Villavicencio, F. (2018). Derecho Penal. Parte General. Grijley.

Villavicencio, F. (2012). Derecho Penal Parte General. (Lima), Perú: Editorial Grijley.

Villavicencio, F. A. (2006). *Derecho Penal*. Parte General.

Zambrano, G. (2018). La responsabilidad penal restringida por la edad y el principio de igualdad procesal. [Tesis de pregrado, Universidad Norbert Wiener]. <http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2418/TESIS%20Zambrano%20Guadalupe.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

## Anexos

### Anexo I: Matriz de Consistencia

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensión	Indicadores	Instrumento
¿Cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal?	<p>Objetivo general</p> <p>Establecer cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal</p> <p>Objetivos específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estudiar la responsabilidad restringida establecida en el art. 22 del Código Penal.</li> <li>- Analizar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal.</li> <li>- Examinar el derecho a la igualdad ante la ley establecido en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales.</li> </ul>	<p>Sí prevalece el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad sin exceptuar a agentes de algunos delitos, entonces se soluciona la antinomia jurídica entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema.</p>	<p>Variable Independiente</p> <p>Sí prevalece el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad sin exceptuar a agentes de algunos delitos</p>	Legal	<p>1. Legislación nacional</p> <p>2. Legislación comparada</p> <p>3. Doctrina Nacional</p> <p>4. Doctrina Comparada</p> <p>5. Jurisprudencia internacional</p> <p>6. Jurisprudencia Constitucional</p> <p>7. Jurisprudencia Penal</p>	<p>Análisis documental</p> <p>Entrevista</p>
			<p>Variable Dependiente</p> <p>, entonces se soluciona la antinomia jurídica entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema.</p>	Legal	<p>1. Legislación nacional</p> <p>2. Legislación comparada</p> <p>3. Doctrina Nacional</p> <p>4. Doctrina Comparada</p> <p>5. Jurisprudencia internacional</p> <p>6. Jurisprudencia Constitucional</p> <p>7. Jurisprudencia Penal</p>	<p>Análisis documental</p> <p>Encuesta</p> <p>Entrevista</p>

## **Anexo II: Instrumentos de Recolección de Datos**

### **Entrevista sobre el Derecho a la Igualdad en la Responsabilidad Restringida por la Edad. Antinomias Jurisprudenciales entre la Sala Constitucional y Penal de la Corte Suprema**

Entrevistado:

Cargo/Centro de Labores:

Fecha:

- 
1. ¿En qué se sustenta la responsabilidad restringida por la edad?
  2. ¿Cuál es el tratamiento doctrinario sobre la responsabilidad restringida de acuerdo a la edad del agente que comete un hecho punible?
  3. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos por los que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema decide aplicar el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal?
  4. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos por los que las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema decide inaplicar el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal?
  5. ¿Cuál es la posición mayoritaria de la comunidad jurídica del Distrito Fiscal de Lambayeque acerca de la responsabilidad restringida por la edad del agente que comete un hecho delictivo?
  6. ¿Debe expulsarse del ordenamiento penal el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal por contravenir la Constitución Política del Perú?
  7. ¿Al existir el Acuerdo Plenario N° 4-2016/CIJ-116 como jurisprudencia vinculante que se inaplique el segundo párrafo del artículo 22° del Código Penal, debe aplicarse para las Salas de Derecho Constitucional y Social y las Salas Penales de la Corte Suprema?
  8. Señale su opinión respecto a alguna jurisprudencia de las Salas de Derecho Constitucional y Social o las Salas Penales de la Corte Suprema que hayan aplicado/inaplicado el beneficio de la responsabilidad restringida.



9. ¿En qué consiste el principio - derecho de la igualdad ante la ley?
10. ¿Cómo solucionar las antinomias jurisprudenciales entre las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del segundo párrafo del art. 22 del Código Penal?
11. ¿Sí prevalece el principio constitucional de igualdad ante la ley en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad sin exceptuar a agentes de algunos delitos, se soluciona la antinomia jurídica entre la jurisprudencia de las Salas Constitucional y Penal de la Corte Suprema?

Muchas gracias por su participación.

### Anexo III: Rúbrica de Experto de Instrumentos de Recolección de Datos

#### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

##### I. DATOS GENERALES:

- 1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Vilchez Guivar de Rojas, Leyla Ivon  
 1.2. GRADO ACADÉMICO Y PROFESIÓN: Dra. en Derecho y Ciencia Política/Abogado  
 1.3. CARGO ACTUAL: Asesor Metodológico de la Escuela Nacional de Control - CGR  
 1.4. INSTRUMENTO (especificar) A VALIDAR: Guía de Entrevista  
 II. AUTOR: Padilla Rojas, Ana Isabel  
 III. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

Nº	INDICADORES	CRITERIOS	SI	NO	SUGERENCIAS
1	CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado.	x		
2	OBJETIVIDAD	Esta formulado de acuerdo a las hipótesis* u objetivos* planteados.	x		
3	ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y tecnología.	x		
4	ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica	x		
5	SUFICIENCIA	Comprende los aspectos de cantidad y calidad del instrumento	x		
6	INTENCIONALIDAD	Está de acuerdo para validar las variables de las hipótesis.	x		
7	CONSISTENCIA	Está basado en fundamentos teóricos y/o científicos.	x		
8	COHERENCIA	Existe coherencia entre variables.	x		
9	METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la hipótesis.	x		
10	PERTINENCIA	El instrumento es útil para la presente investigación.	x		

\*Según sea el enfoque del estudio (cuantitativo, cualitativo o mixto)

Fuente: APROBADO: 90-100% (8-10 PG.TAS.) / Si observa el 50% (corregir) / Si es menor al 50% replantear).

##### II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

Aplicable

##### III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

95%

FECHA: 28/06/2021



Dra. Leyla Ivon Vilchez Guivar de Rojas

## **Constancia de Aprobación de Originalidad**

### **Constancia de originalidad de aprobación de tesis**

Yo, Dra. Leyla Ivon Vilchez Guivar de Rojas, asesora de tesis, revisora del trabajo de investigación de la tesista Mg. Padilla Rojas, Ana Isabel, titulada: “El derecho a la igualdad en la responsabilidad restringida por la edad. Antinomias jurisprudenciales entre la Sala Constitucional y Penal de la Corte Suprema”, hago constar que luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 18% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte de acuerdo a la Directiva para la evaluación de originalidad de los documentos académicos, de investigación formativa y para la obtención de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo -Guías de uso del Software de reporte de similitud TURNITIN, aprobado mediante Resolución N.º 659-2020-R de fecha 8 de setiembre de 2020, razón por la cual la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-

Lambayeque, 08 de junio de 2022



---

**Dra. Abog. Leyla Ivon Vilchez Guivar de Rojas**  
**45051606**

## Resumen de Reporte TurnItIn

## Informe final de tesis

## INFORME DE ORIGINALIDAD

18%

INDICE DE SIMILITUD

16%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

7%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1

[www.pinterest.es](http://www.pinterest.es)

Fuente de Internet

2%

2

[repositorio.usmp.edu.pe](http://repositorio.usmp.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

3

Submitted to Universidad de San Martín de Porres

Trabajo del estudiante

1%

4

Submitted to Universidad Cesar Vallejo

Trabajo del estudiante

1%

5

[es.scribd.com](http://es.scribd.com)

Fuente de Internet

1%

6

[tesis.ucsm.edu.pe](http://tesis.ucsm.edu.pe)

Fuente de Internet

1%

7

Submitted to Universidad Católica de Santa María

Trabajo del estudiante

1%

8

[equedena.blogspot.com](http://equedena.blogspot.com)

Fuente de Internet

1%

9	Submitted to Universidad Tecnologica del Peru Trabajo del estudiante	<1 %
10	repositorio.ulatina.ac.cr Fuente de Internet	<1 %
11	estudiocastilloalva.pe Fuente de Internet	<1 %
12	issuu.com Fuente de Internet	<1 %
13	lpderecho.pe Fuente de Internet	<1 %
14	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
15	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
16	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Trabajo del estudiante	<1 %
17	doku.pub Fuente de Internet	<1 %
18	scc.pj.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
19	proiure.org.pe Fuente de Internet	<1 %

20	Submitted to Universidad Catolica de Trujillo Trabajo del estudiante	<1 %
21	<a href="http://www.maulee.cl">www.maulee.cl</a> Fuente de Internet	<1 %
22	<a href="http://www.siteur.gob.mx">www.siteur.gob.mx</a> Fuente de Internet	<1 %
23	<a href="http://www.ipecperu.org">www.ipecperu.org</a> Fuente de Internet	<1 %
24	<a href="http://documents.mx">documents.mx</a> Fuente de Internet	<1 %
25	<a href="http://repositorio.uladech.edu.pe">repositorio.uladech.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
26	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Fuente de Internet	<1 %
27	Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante	<1 %
28	<a href="http://antoniohuanapacheco.blogspot.com">antoniohuanapacheco.blogspot.com</a> Fuente de Internet	<1 %
29	<a href="http://dspace.unitru.edu.pe">dspace.unitru.edu.pe</a> Fuente de Internet	<1 %
30	<a href="http://www.fsp.es">www.fsp.es</a> Fuente de Internet	<1 %
31	<a href="http://prezi.com">prezi.com</a> Fuente de Internet	<1 %

## Recibo Digital TurnItIn



### Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Ana Padilla  
 Título del ejercicio: CAPITULOS I, II Y III AC  
 Título de la entrega: Informe final de tesis  
 Nombre del archivo: Informe\_Final\_de\_Tesis\_Ana\_Padilla.doc  
 Tamaño del archivo: 562.5K  
 Total páginas: 79  
 Total de palabras: 17,998  
 Total de caracteres: 101,455  
 Fecha de entrega: 07-jun.-2022 10:16p. m. (UTC-0500)  
 Identificador de la entrega: 1852677814

